

ALERTA Y DESCONFIADA

VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ



FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS

ALERTA Y DESCONFIADA

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ANTE LA CRISIS

VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS

PATRONATO

ISIDRO FAINÉ CASAS (Presidente)

JOSÉ ANTONIO OLAVARRIETA ARCOS (Vicepresidente)

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ ÁLVAREZ-CEDRÓN (Secretario)

JULIO FERMOSE GARCÍA

JULIO FERNÁNDEZ GAYOSO

ROBERTO LÓPEZ ABAD

ENRIC MATA TARRAGÓ

ANTONIO PULIDO GUTIÉRREZ

ATILANO SOTO RÁBANOS

Printed in Spain

Edita: FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS)

Caballero de Gracia, 28, 28013 - Madrid

© FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS)

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como la edición de su contenido por medio de cualquier proceso reprográfico o fónico, electrónico o mecánico, especialmente imprenta, fotocopia, microfilm, offset o mimeógrafo, sin la previa autorización escrita del editor.

ISBN: **978-84-89116-87-0**

Depósito legal: M-52828-2010

Diseño: Advantia S.A.

Imprime: Advantia S.A.

FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS

PATRONATO

ISIDRO FAINÉ CASAS (Presidente)

JOSÉ ANTONIO OLAVARRIETA ARCOS (Vicepresidente)

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ ÁLVAREZ-CEDRÓN (Secretario)

JULIO FERMOSE GARCÍA

JULIO FERNÁNDEZ GAYOSO

ROBERTO LÓPEZ ABAD

ENRIC MATA TARRAGÓ

ANTONIO PULIDO GUTIÉRREZ

ATILANO SOTO RÁBANOS

Printed in Spain

Edita: FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS)

Caballero de Gracia, 28, 28013 - Madrid

© FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS)

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como la edición de su contenido por medio de cualquier proceso reprográfico o fónico, electrónico o mecánico, especialmente imprenta, fotocopia, microfilm, offset o mimeógrafo, sin la previa autorización escrita del editor.

ISBN: 978-84-89116-66-5

Depósito legal: M-52828-2010

Diseño: Advantia S.A.

Imprime: Advantia S.A.

ÍNDICE

5	CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA GENERAL DE LA CRISIS ECONÓMICA Y EL CASO ESPAÑOL
27	CAPÍTULO 2 RASGOS DISTINTIVOS DE LA CRISIS ESPAÑOLA
45	CAPÍTULO 3 LA PERCEPCIÓN DE LA CRISIS
69	CAPÍTULO 4 INFORMACIÓN Y COMPRENSIÓN A MEDIAS
81	CAPÍTULO 5 EL MARCO DEL DEBATE Y LAS PREMISAS BÁSICAS: LA VISIÓN DE LA ECONOMÍA DE MERCADO
99	CAPÍTULO 6 LA POLÍTICA ECONÓMICA DESEABLE: ERRORES POR RECONOCER Y REPARACIONES POR HACER
125	CAPÍTULO 7 EL SISTEMA DE DEBATE Y DECISIÓN SOBRE ASUNTOS COMUNES, Y SUS ACTORES PRINCIPALES
151	CAPÍTULO 8 LOS LÍMITES DE LOS POLÍTICOS VISTOS POR LA SOCIEDAD
167	CAPÍTULO 9 LA VISIÓN QUE LA CIUDADANÍA TIENE DE SÍ MISMA
187	CAPÍTULO 10 UN ELECTORADO POCO POLARIZADO QUE NO PIDE DRAMATIZACIONES FICTICIAS
203	CAPÍTULO 11 CONCLUSIÓN
219	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS
229	ANEXO FICHAS TÉCNICAS DE LAS ENCUESTAS ANALIZADAS

1

EL PROBLEMA GENERAL DE LA CRISIS ECONÓMICA Y EL CASO ESPAÑOL

Éste no es un libro para los profesionales del optimismo o del pesimismo, sino para gentes realistas que quieran enfrentarse a los problemas con la mayor claridad posible, con objeto de resolverlos. Su lema es la búsqueda de una confianza razonable: de los ciudadanos entre sí, entre los ciudadanos y la clase política, entre unos sectores de la sociedad y otros. Los dos temas, la razón y la confianza, van ligados; como lo están sus opuestos, la confusión y la desconfianza.

Si, como el título de este libro sugiere, España está alerta, pero, en general, un tanto más cerca de la confusión y de la desconfianza que de sus opuestos, la tarea que tenemos por delante es, en principio, muy simple. No hay más que salvar la distancia que nos queda para alcanzar un estado de confianza razonable. Se pone uno a ello ya mismo, sin esperar soluciones mágicas, y se comienza por reconocer los hechos. Primero, los hechos “objetivos” de la envergadura, la gravedad y la complejidad de la crisis. Segundo, los hechos “subjetivos” de los límites cognitivos y morales para afrontarla que tienen todos los actores sin excepción, políticos y ciudadanos, elites socioeconómicas, profesionales o medios de comunicación.

Y con esto entramos en materia.

LA CRISIS ECONÓMICA COMO CRISIS DEL CAPITALISMO, Y DE LA DEMOCRACIA

La actual crisis económica ha golpeado duramente al mundo occidental, empezando por los Estados Unidos, que son el país clave de ese mundo, su primera potencia económica y geoestratégica, y la nación con la proyección cultural más extensa e influyente. Tanto la irrupción de la crisis como, sobre todo, su intensidad han tenido algo de súbito e inesperado. La sociedad americana suele ser una sociedad alerta a los signos de un cambio de coyuntura, en todo tipo de cuestiones, pero es curioso que, precisamente durante unas elecciones presidenciales (y legislativas) como las del 2008, en las que todos deberían haber estado hipersensibles a esos signos, ni su clase política ni sus medios de comunicación ni su electorado parecieran atentos a que una crisis económica de semejante envergadura pudiera surgir y dominar el debate público a partir de ese momento. Ni James McCain ni Barack Obama, los dos contendientes presidenciales, concedieron a la crisis, que se venía gestando desde hacía tiempo, una atención particular, hasta el momento mismo en que estalló, en septiembre de 2008, con ocasión de la quiebra de una de las empresas señeras de Wall Street, Lehman Brothers.

A partir de entonces, la economía se ha convertido en el problema central del país, por supuesto junto con los conflictos geoestratégicos en curso. Se ha impuesto un clima de preocupación y de urgencia en la actuación pública para lo que se ha dado en llamar “salvar el sistema financiero”, esperando que ello implique reactivar la economía del país, contener el aumento del paro y, al mismo tiempo, garantizar los recursos fiscales precisos para

hacer frente a una ambiciosa política de proyección del poderío estadounidense en el mundo (con dos escenarios de guerra, y otros focos de conflicto) y a una no menos ambiciosa agenda de reformas en el sistema de bienestar (léase, reforma sanitaria).

Que las cosas ni acaban de resolverse en este sentido ni parecen en curso de resolverse se deduce de varios indicios. Uno de los más notorios es el descenso gradual del nivel de confianza en la administración Obama por parte del público, como muestran los niveles de aprobación del presidente Obama, que han descendido de niveles próximos al 65% al comienzo de su mandato hasta niveles próximos al 45% en octubre de 2010.¹ Ello se ha traducido en una importante derrota electoral en las elecciones de noviembre.

El descontento del público con el manejo de la crisis ha supuesto una rápida calibración de las oportunidades de éxito político de unos y otros, pero también una reflexión sobre las lecciones de la crisis. Lo que parece claro es que estas lecciones afectan al funcionamiento del capitalismo, o economía de mercado, y en particular al modo de regularlo y supervisarlos. Apenas se ha cuestionado el sistema como tal, ya que la experiencia del último siglo y medio ha dejado clara en la mente de casi todos la inanidad de tomar en serio lo que se había presentado como la gran alternativa a una economía de mercado, a saber, una economía socialista en el sentido clásico del término, esto es, una economía sustancialmente planificada o dirigida por los poderes públicos. Pero si en esto,

¹ Véase "Gallup daily: Obama job approval", disponible en <http://www.gallup.com/poll/113980/gallup-daily-obama-job-approval.aspx>.

descontadas algunas retóricas populistas que gozan de cierta credibilidad en algunos países periféricos, la opinión muy mayoritaria está clara, en cambio, las respuestas a las preguntas sobre cómo regular esta economía distan de estarlo.

Para algunos, la situación es tal que cuestiona profundamente incluso la posibilidad de encontrar una respuesta plenamente satisfactoria a la cuestión. Ya Hayek (1960) nos había advertido de que la complejidad de un orden de libertad como la economía de mercado excluye la posibilidad de comprenderla en su evolución y en sus detalles, ya que sólo admite una comprensión de ciertas pautas y un conocimiento local disperso y con frecuencia implícito. Lo que podamos saber del conjunto es tentativo y provisional, y sujeto a una rectificación constante. En un lenguaje distinto, un filósofo como Karl Jaspers, hace también ya varias décadas, nos habría recordado que los seres humanos, inmersos en un todo que nos desborda por todas partes, difícilmente podemos hacer otra cosa que contentarnos con saberes parciales e indecisos, lo cual se aplica a la ciencia natural, por no hablar de las ciencias sociales (Jaspers 1953). Lo dijo dos milenios y medio antes un presocrático, el griego Jenófanes: “la verdad no es una revelación de los dioses a los hombres, sino que éstos, buscándola lentamente, han de encontrarla” (citado en Aranguren 1958).

Tomemos, por ejemplo, un testimonio como el de Jeffrey Friedman (2009). Según él, lo que la crisis nos deja como lecciones bastante evidentes es que se reguló mal el mercado inmobiliario desde el primer momento, lo que abrió la puerta a las hipotecas *subprime*, que se permitió una

concentración de riesgos opacos en la contabilidad de las empresas contra todo criterio de razonable prudencia, que la política monetaria fue demasiado laxa durante demasiado tiempo, que las agencias de calificación de riesgos descuidaron su conocimiento de los detalles más significativos, y que todo pareció confluir en una combinación de errores por parte de los reguladores y los supervisores del sistema financiero, mientras que los directivos de las empresas se dejaron llevar a operaciones cuyos detalles apenas comprendían ellos mismos. Todo ocurrió como si la información hubiera sido extraordinariamente abundante pero el juicio para valorarla hubiera sido escaso. La interpretación de Friedman, centrada en los errores cometidos, puede complementarse, por otra parte, con la de quienes miran con un punto de sospecha una mezcla de errores y de estrategias autointeresadas, como hace un economista como Jagdish Bhagwati cuando pone en su punto de mira lo que llama el complejo *Wall Street-Treasury*, al que atribuye la capacidad de haber persuadido a la *Securities and Exchange Commission* de que impusiera requerimientos insuficientes, o blandos, en las operaciones de préstamos, cuyo resultado habría sido un apalancamiento financiero sin precedentes (Bhagwati 2009).

Todo ello ha provocado, al menos por el momento, una desconfianza generalizada del público en las elites tanto políticas como económicas. Por ejemplo, Luigi Zingales (2009) cita encuestas recientes que señalan que sólo el 5% de los americanos confía mucho en el gobierno y sólo el 3% lo hace en las grandes corporaciones, mientras que un 30% afirma no creer “nada” en el gobierno y un tercio reitera esa respuesta referida a las grandes corporaciones. Ello le da pie para apuntar la posibilidad

de que el público crea, por decirlo en sus propios términos, en *markets* pero no en *business*, es decir, en los mercados pero no en, digamos, las grandes empresas, y aprecie una tensión entre el interés de mantener una economía de mercado abierta y competitiva y el interés de hacer negocio que tiene, al menos, un segmento de las grandes empresas, usando y abusando éstas de sus relaciones de proximidad con el poder político (de “derechas” o de “izquierdas”) a costa de la propia economía de mercado y, por supuesto, del público. Ahí cifra Zingales, justamente, la clave para entender la presencia secular de una larga tradición favorable a los mercados pero recelosa de la gran corporación en la opinión pública estadounidense, que se remonta por lo menos a mediados del siglo XIX y llega, sin apenas solución de continuidad, hasta hoy.

Es obvio que una crisis de regulación y un sentimiento de confianza tales en la sociedad implican cuestionar tanto la economía de mercado como el sistema de debate, decisión y gestión pública de aquélla, es decir, del sistema de gobernanza y de solución de problemas, económicos o de otro tipo, que conocemos como democracia liberal. Esa crisis puede llegar a ser más o menos profunda y duradera. Puede llegar a extremos como a los que se llegó en el primer tercio del siglo pasado, que dieron lugar a experimentos revolucionarios como el del totalitarismo nazi, que duró una docena de años, o el comunista, que en Rusia duró unos setenta años. O puede dar lugar a diversas mutaciones, como las que han tenido lugar en los Estados Unidos y la Europa occidental, por ejemplo, desde el final de la segunda guerra mundial. Tal vez estemos hoy ante una nueva mutación.

EL PROBLEMA GENERAL: LOS LÍMITES COGNITIVOS Y MORALES DE LA SOCIEDAD Y LAS ELITES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS COLECTIVOS

El problema general que se plantea a propósito de la crisis, y que subyace a las dificultades para resolverla, es el de los límites cognitivos y morales de los agentes humanos de toda condición, miembros de las elites o de la sociedad en general, para actuar con la inteligencia y la virtud cívica necesarias a la hora de resolver los problemas comunes. Fácilmente ocurre que no se informen sobre esos problemas, o no los entiendan; también, que miren a su interés particular, y quizá incluso a un interés entendido de manera errónea (sólo a corto plazo, sólo en lo que se refiere a ciertos temas con olvido de otros), en detrimento del bien general.

La literatura sobre la economía de mercado muchas veces da por supuesto que los individuos saben, de entrada, cuáles son sus preferencias, pero lo común es que no las conozcan, o las conozcan a medias, y las vayan descubriendo, o crean hacerlo, conforme van avanzando y acumulando experiencias; sólo para descubrir más tarde que nunca supieron verdaderamente lo que querían; por ejemplo, parecía que querían agitarse y moverse en todas las direcciones, sólo para descubrir, más tarde, que lo que querían era no tener la sensación de haber malgastado sus vidas. Lo cual se traduce en muchas decisiones, acertadas o equivocadas, tomadas a lo largo de mucho tiempo. De manera que lo que muchos economistas toman como un punto de partida sólido, el de los fines de los agentes, es mucho menos sólido de lo que imaginan. Por no hablar del conocimiento de los medios para conseguir aquellos fines.

Por otra parte, la literatura sobre el tema de la ignorancia que el público puede tener en las sociedades democráticas de las cuestiones políticas es abundante y bastante persuasiva. En Estados Unidos, por ejemplo, una tradición al respecto arranca de Philip Converse en los años sesenta del siglo pasado, pero tiene precedentes en Walter Lippman y otros muchos, en los años veinte (Converse 2006 [1964]; Lippman 1930). Sin entrar ahora en detalles, baste señalar que esta literatura da por supuesto que la ignorancia del público americano en asuntos económicos (y otros) es profunda y extensa, y que aquél no acaba de ser consciente de los hechos económicos fundamentales ni de entender la complejidad de las materias que se discuten (Bennet y Friedman 2008). Tampoco le ayudan mucho a entenderlo unos medios de comunicación volcados hacia la dramatización de las noticias, ni los expertos, ni los políticos.

En lo referente a los expertos, la literatura crítica señala que no contamos con evidencia persuasiva de que aquéllos estén en condiciones de enseñar todo lo que ellos imaginan que pueden enseñar. Gerald Gaus (2008) recuerda que estudios empíricos como los de Philip Tetlock (2005) muestran que el éxito de los economistas en predecir la marcha de la economía no es mayor que el de los *dilettanti*, es decir, del público un poco ilustrado que sigue la marcha de los acontecimientos con la ayuda de publicaciones de carácter general como *The Economist*, *el New York Times* o *el Wall Street Journal*. La probabilidad de que los expertos manifiesten una mayor capacidad de calibración, es decir, de indicar en qué dirección irán los acontecimientos, si irán a mejor o a peor, no es mayor que la de los *dilettanti*. En cuanto a su capacidad de discriminación (es decir, de precisar la medida en la que las

cosas empeoren o mejoren), la capacidad de todos ellos es entre mínima y nula. Obviamente, de que no se sepa predecir el futuro no se infiere que no se sea capaz de dar razón del pasado y, en consecuencia, de extraer de esa experiencia algunas recomendaciones prudentes de cara a lo que haya que hacer en el presente. Esa capacidad es importante, aunque su desarrollo depende del marco conceptual y el entrenamiento que los expertos hayan incorporado a su saber en sus años de formación (Gaus 2008) y, sobre todo, depende de su buen sentido y su experiencia de lo que podemos llamar la “economía real”, quizá algo diferente de la economía de los libros y los artículos de revista. Eso es lo que acredita a los buenos economistas. Sin embargo, la cuestión general sigue siendo la misma: que hay límites, por lo pronto, cognitivos importantes en lo que la comunidad de expertos puede aportar, de los que conviene ser consciente.

Esos límites se hacen más intensos y más claros cuando miramos a la comunidad de los políticos y los que operan en torno a ellos. Su capacidad de acción parece considerable, y tanto mayor cuanto que la ignorancia del público aumentaría su margen de maniobra. Dado que la complejidad de los asuntos hace inevitable el aumento de esa ignorancia, la autonomía del estado respecto a la sociedad parecería estar cada vez más asegurada (como sugiere Samuel DeCanio, prolongando así la discusión de Theda Skocpol y otros: DeCanio 2006; Evans, Rueschmeyer y Skocpol 1985). Según esto, independientemente de lo que una visión idealizada de la democracia como poder del pueblo pretenda, en la realidad la democracia ofrecería simplemente una apariencia de justificación para que la clase política, que ocupa las posiciones de poder del estado (o, cuando está en la oposición, se pre-

para para ello, o comparte algunas de esas posiciones a la espera de ocupar las más importantes a la primera ocasión), ejerza su poder sobre un pueblo capaz quizá de elegirla pero no de controlarla.

En la visión de muchos de los críticos de una teoría idealizada de la democracia que no se corresponde con la realidad, las posiciones de quienes pretenden que el estado procesa las demandas de la sociedad, les da curso y responde a ellas, atento a un supuesto mandato de la sociedad, como sugieren los sociólogos y politólogos de corte pluralista o estructural-funcionalista (Ciepley 2000), no estarían avaladas por la experiencia. En la práctica, serían los políticos mismos quienes decidirían sus políticas por su cuenta, a partir de sus intereses propios o, tal vez, sus ideologías. Puede ocurrir, en el mejor de los casos, que se trate de políticos como los soñara Max Weber (1994 [1919]), es decir, juiciosos, o capaces de entender situaciones complejas, con un apasionado compromiso patriótico y dispuestos a asumir su responsabilidad ante la historia, o el futuro. En el peor de los casos, pueden ser simples demagogos oportunistas; o, en un caso límite, pueden llevar a su país al desastre, siendo más o menos conscientes de estar haciéndolo.²

Sin llegar a estos casos extremos, cabe considerar que, en general, los límites cognitivos y de virtud cívica imputables a la sociedad se le pueden atribuir, de manera semejante, a la clase política. Su formación económica, por ejemplo, suele ser modesta. La etapa crucial de su formación es la

² Véase por ejemplo la interpretación de Sebastian Haffner (2002) de lo que hizo Adolf Hitler con su propio país, en particular a partir de diciembre de 1941, y en especial de agosto de 1944. El caso del régimen de Pol Pot, que asesinó o provocó por otros medios la muerte de entre un quinto y un sexto de su propia población camboyana, sería análogo al anterior.

de su propia experiencia política, en un contexto de lucha dentro de su partido y contra otros partidos, intentando influir en la opinión pública con la ayuda de unos medios de comunicación dominados por grupos con agendas políticas de toda índole y poblados de gentes con una formación, o ausencia de ella, similar. Tampoco hay razón para imaginar que, en general, el grado de su altruismo o sociotropismo, esto es, su disposición a perseguir el bien común antes que el propio, sea superior al de la sociedad de la que proceden. En unos casos, su orientación puede ser más ideológica, pero es dudoso que ello les otorgue más capacidad de juicio; también puede ofuscarles. En otros casos, su falta de ideología pudiera dejarles sin referencias intelectuales, morales y emocionales a la hora de juzgar una situación. En otras palabras, la cuestión reside no tanto en su compromiso ideológico per se cuanto en la modalidad de su compromiso, esto es, en si éste viene de la mano del buen juicio o buen sentido y de la decencia cívica necesarios.

Tengamos en cuenta que los políticos crecen y se desarrollan en grandes organizaciones, como los partidos o el aparato del estado, por lo que les son familiares los muchos sesgos intelectuales que se observan en la conducta de quienes, en el seno de aquéllas, manejan situaciones muy complejas, lo cual ha llevado a algunos autores a hablar de un riesgo intelectual (*intellectual hazard*) típicamente vinculado, precisamente, a esas experiencias (Miller y Rosenfeld 2009).³ Se trata de sesgos que afectan a la adquisición de la evidencia, a su análisis, a su comunicación y a la aplicación de las conclusiones del análisis a la realidad. Sesgos que empujan en la dirección de la

³ Lo cual también puede aplicarse a organizaciones económicas o académicas.

sobrevaloración del statu quo, el exceso en la aversión al riesgo, el optimismo de quien se obstina en una predicción avalada por el consenso del grupo de referencia, la complacencia o la aplicación de reglas de representatividad espurias, entre otros.

La conclusión de esta discusión es muy sencilla. Los límites cognitivos y morales los tenemos todos, y por tanto no hay fórmula racional alguna que pueda superar decisivamente esta situación. Cabe añadir que esto afecta, también, a la fórmula o propuesta de una “democracia deliberativa”, que reúna a todos los ciudadanos en una suerte de conversación continua, y les permita llegar a un consenso sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo. El impulso a introducir unas dosis razonables de esta deliberación en la esfera pública es muy correcto; pero las expectativas puestas en este proceso deben ser limitadas, como ha señalado Mark Pennington (siguiendo las enseñanzas de Hayek y de Popper), a sus justos términos, puesto que la esfera pública no debería obstaculizar el desarrollo del proceso de descubrimiento y aprendizaje que resulta de una experimentación dispersa y continua por parte de los individuos y los grupos, como la que tiene lugar en los propios mercados (Pennington 2003). A falta de una fórmula racional, y en la tesitura de no dar demasiado crédito a una fórmula mágica (un líder carismático, por ejemplo, o un éxtasis colectivo), la conclusión es que nos hemos quedado sin fórmula sencilla y rápida alguna para superar los límites de todos.

En tales circunstancias, lo que queda es volver a Jenófanes, por así decirlo, y reconocer que la tarea de comprender los asuntos del común será siempre lenta y laboriosa, y requerirá el concurso de todos los mecanismos institucionales y

culturales disponibles, más o menos avalados por la experiencia anterior. Ahí estarán los mercados, las clases políticas, los expertos, los medios de comunicación, la sociedad de los ciudadanos corrientes. Todos ellos. Reuniendo entre todos la información disponible, ajustando los juicios, intentando las soluciones, contrastándolas con la realidad, interpretando los resultados, y volviendo a empezar.

Lo cual se aplica, justamente, al caso que nos ocupa aquí.

■ EL CASO ESPAÑOL COMO UN CASO LÍMITE CUYO INTERÉS DESBORDA EL PROBLEMA PARTICULAR

Decíamos más arriba que Estados Unidos se había encontrado, y se encuentra, en una situación de crisis grave. Otro tanto le ocurre al conjunto de Europa (dejemos aparte, por mor de la discusión, otras partes del mundo, China o India, por ejemplo, o África), pues también en el conjunto de los países europeos se ha dejado sentir la crisis, con tanta o mayor intensidad. Sin embargo, dentro de Europa, hay diferencias. La situación de los países escandinavos y de Holanda, por ejemplo, es relativamente mejor. Las de Alemania, Francia y el Reino Unido son distintas entre sí, mas todas problemáticas por diversas razones. La de varios países mediterráneos, como España, Italia, Grecia y Portugal, es especialmente vulnerable, así como lo es la de Irlanda, presentando problemas graves en relación con su capacidad para reactivar su economía, favorecer la creación de empleo, acceder al crédito que precisan en los mercados internacionales y consolidar su sistema fiscal.

Centrando más la atención en los países euromediterráneos, son llamativos algunos datos generales relativamen-

te comunes. Su economía adolece de algunas debilidades estructurales, como la reducida importancia de su sector de productos de tecnología alta y medio-alta; las significativas deficiencias de su sistema de debate, decisión y gestión de los asuntos comunes les hace difícil adoptar reformas consensuadas entre las fuerzas políticas, y sus rasgos culturales son de los menos propicios en Europa para desarrollar una economía innovadora (Pérez-Díaz y Rodríguez 2010). Cabe aventurar que tal vez todas estas características estén asociadas con su especial vulnerabilidad ante la crisis.

En el caso particular de España, la crisis presenta rasgos bastante dramáticos (véase capítulo 2). En su comienzo, fue notable el esfuerzo de sus gobernantes en obstinarse en negar la realidad. Por ejemplo, en la campaña electoral de 2008, el partido en el gobierno se dedicó a denunciar como catastrofistas las llamadas de alerta de la oposición, y se empeñó en formular una promesa formal y solemne de alcanzar el pleno empleo en la legislatura 2008-2012,⁴ y en airear su ambición de convertir a España en uno de los países más adelantados del mundo, superando en renta per cápita, entre otros países, a Francia, en tres o cuatro años.⁵ Como contraste, en apenas menos de dos años, en el otoño de 2010, nos encontramos con que España se mantiene en el puesto 9º en la clasificación mundial por el tamaño del PIB (medido en dólares y

⁴ La primera referencia al respecto se encuentra en una afirmación de Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados, el 3 de julio de 2007: “la próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España” (*Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, 2007, VIII Legislatura, núm. 269: 13.500). El 4 de marzo de 2008, en su debate televisivo con Mariano Rajoy, Rodríguez Zapatero se comprometió a crear dos millones de nuevos empleos (*El País*, 5 de marzo de 2008: 13). Y uno de los carteles electorales del PSOE en la campaña electoral de estas elecciones de 2008 rezaba “Por el pleno empleo”, junto al *slogan* general “Motivos para creer”.

⁵ Véase *CincoDías.com*, 25-9-2008.

precios corrientes; y el 13º, medido en dólares según la paridad de poder de compra),⁶ pero desciende del 29º al 42º en la clasificación según el nivel de competitividad.⁷ Tanto o más elocuente que estos datos es el de la evolución de la tasa de paro española, que ha pasado del 8,3% en 2007 al 20% en 2010.

Entremedias se encuentra un giro reciente de la línea política del gobierno que parece ser, al mismo tiempo, radical y ambiguo. A raíz de una crisis de credibilidad que se puso de manifiesto, de manera clara, ante los mercados internacionales y ante los gobiernos de los principales países del mundo, en mayo de 2010, el gobierno procedió a dar un giro radical de su política económica, anunciando recortes sustanciales en el gasto público, la reducción de los sueldos de los funcionarios y una reforma laboral. Al mismo tiempo, la senda recorrida en los meses siguientes, hasta el otoño de 2010, sugiere una manera compleja y dubitativa de aplicar estas medidas, a la vista de las resistencias sociales de algunos sectores y las incertidumbres provocadas por unas elecciones autonómicas y locales inminentes, en el otoño de 2010 y la primavera de 2011, y unas elecciones generales previstas para el comienzo del 2012.

Un ejemplo de este carácter indeciso de la actuación pública concierne a una reforma laboral tanto más urgente cuanto que probablemente el flanco más débil de la economía española resida en la combinación de una tasa de paro extraordinaria, que afecta hoy a una quinta parte de su población activa, con un modesto nivel de cua-

⁶ Datos obtenidos de la *World economic outlook database*, del International Monetary Fund.

⁷ La clasificación es la que elabora el World Economic Forum. Véase Blanke et al. (2008, 2010).

lificación de la población laboral. Ambos rasgos tienen que ver con la equivocada regulación del mercado laboral que está en vigor, en lo fundamental, desde hace varias décadas. Los elevados costes de despido para los trabajadores permanentes han sido un incentivo para contratar trabajadores temporales, a los que se les provee de poca formación y a los que se despide con cierta facilidad. A su vez, la regulación de los salarios mediante una negociación colectiva que dedica escasa atención a las condiciones de cada empresa en particular es otro incentivo perverso para ajustar los costes de personal caso a caso, y con la atención puesta en la mejora de la productividad y la competitividad de la empresa en cuestión. Sin embargo, la reforma en curso aborda estos problemas de una manera confusa y tímida.⁸

El cambio de fondo ha sido, pues, dramático, y aun traumático. Al mismo tiempo, es obvio que ello ha traído, y trae, consigo un reto, muy considerable, a la capacidad de decisión de la sociedad y de la comunidad política. El reto se refiere al sistema mismo de debate, decisión y gestión de los grandes problemas del país, así como, lógicamente, a los límites cognitivos y morales de sus políticos, expertos, elites económicas, medios de comunicación, y ciudadanos en general.

■ EL ARGUMENTO Y EL MÉTODO DE ESTE LIBRO

El objeto de estudio de este libro es la crisis y, sobre todo, el sistema de debate, decisión y gestión de aquélla, así

⁸ Un sucinto resumen de la cuestión, vista por un observador externo, en "Pass and move", *The Economist*, 9 de octubre de 2010: 21.

como los actores implicados en ese sistema, todo ello visto desde la perspectiva del público, o la ciudadanía. Lo que nos interesa es contribuir a una discusión general sobre la capacidad de la sociedad para informarse, entender y comprometerse en ese debate, lo que incluye estar atentos tanto a sus límites (digamos, negativos) como a su potencial (positivo). De entrada, no compartimos ni el exceso de la teoría idealista de la democracia, que atribuye al *demos* un poder que de hecho no tiene, ni el exceso de pesimismo crítico, que concede al estado y a la clase política un margen de maniobra exagerado. La base principal de nuestro trabajo es la evidencia ofrecida por dos encuestas representativas de la población adulta residente en España, que llevamos a cabo en septiembre/octubre de 2009 y en septiembre de 2010, y cuyas características técnicas pueden consultarse en el anexo. Las dos encuestas tienen partes comunes, pero cubren también temas distintos, aunque complementarios.⁹

Procedemos del modo siguiente. El primer paso (capítulo 2) es recordar los datos fundamentales de la crisis española, para que nos sirvan como telón de fondo a las opiniones de las encuestas. Arrancamos, inmediatamente después (capítulo 3), con la percepción que de la gravedad y la duración de la crisis tiene el público, y con un análisis de su nivel de información y de su comprensión (capítulo 4) tanto de los datos de la crisis como de sus causas y las medidas gubernamentales en curso. A renglón seguido, exploramos (capítulo 5) el marco conceptual de los juicios que formulan los encuestados so-

⁹ El lector puede encontrar una referencia al método de la encuesta en el Anexo al final del libro. Asimismo puede tener más amplio acceso a la evidencia empírica consultando la página web de FUNCAS (www.funcas.es) o la página web de Analistas Socio-Políticos, Gabinete de Estudios (www.asp-research.com).

bre la economía de mercado, considerando asimismo la medida en la que puedan responder a una actitud más o menos, digamos, estatista, y los matices que, en su caso, conviene incorporar a esa actitud. Ello nos permite dar el paso siguiente (capítulo 6) y examinar las opiniones del público sobre determinadas políticas económicas que considera deseables.

A continuación (capítulo 7) damos cuenta de sus juicios sobre los actores principales del sistema de debate, decisión y gestión de los asuntos comunes, incluyendo en primer lugar al gobierno, seguido de la oposición y, más adelante, una serie de otros actores relevantes, como la profesión de los economistas, el banco central, otras instituciones financieras, sindicatos y patronal, y los medios de comunicación. Proseguimos (capítulo 8) presentando evidencia de cómo perciben los ciudadanos a los políticos en general, y cómo sopesan su potencial y sus límites, que les hacen estimarles y confiar en ellos, en más o en menos. Contrastamos esta lectura de los políticos con la que el público hace de sí mismo (capítulo 9), reuniendo información sobre cómo el público se ve cuando habla de sí mismo en primera persona y cuando lo hace en tercera persona, tratando de entender así su percepción de los límites propios.

Al llegar a este punto, completamos la narrativa con un análisis que tiene una dimensión política, y que nos parece necesario para entender el contexto del debate en curso. Se trata de un debate que tiene lugar en el marco de un proceso electoral que, en año y medio (o antes), puede dar lugar a la consolidación de un gobierno del PSOE o, por el contrario, a un nuevo gobierno del PP, con sus posibles alianzas correspondientes. La sociedad lo entiende

así, y sitúa el debate de la crisis precisamente en ese horizonte. Sería poco razonable no incluirlo, por tanto, en la discusión. En consecuencia, añadimos un análisis (capítulo 10), más bien sucinto, de la diferenciación de gran parte del público (cerca de un 80% de los votantes en las últimas elecciones generales) en dos grandes bloques políticos, atendiendo a cuál fuera su voto a un partido u otro en 2008. Los resultados proporcionan una información interesante acerca de cuáles pueden ser sus diferencias y (curiosamente) sus muchas semejanzas sobre una serie de materias relevantes a la hora de manejar la crisis en curso, en estos momentos y en los tiempos por venir, incluyendo cierto consenso entre ellos en lo relativo a algunos de sus mensajes a los dos grandes partidos en liza.

Naturalmente, dado que el objetivo último de este estudio es contribuir al esclarecimiento de un fenómeno general, con un alcance que desborda al caso español, introducimos referencias comparadas en numerosas ocasiones, aunque dejamos un tratamiento comparativo más sistemático para otra ocasión.

Un último comentario sobre la intención pragmática subyacente en este estudio. Lo haremos, si se nos permite, en negativo, y utilizando la retórica clásica del “ni esto, ni aquello”.

Primero, la intención de este estudio es contraria a la posición de los catastrofistas que, en nuestra opinión, tienden a minusvalorar la capacidad de aguante y flexibilidad de la ciudadanía en las condiciones de una crisis como la actual, así como su capacidad para alcanzar un barrunto razonable de en qué consiste; sin que por eso hagamos nuestro el lema *vox populi, vox dei*. La voz del

pueblo tiene, como toda voz, el valor de su contenido razonable. Al mismo tiempo, nuestra posición es igualmente contraria a la de quienes adoptan una posición de fácil y complaciente optimismo, que imaginan que el mundo cambia cuando se hace uno la ilusión de que ha cambiado por arte de magia: la magia de la palabra “confianza”, por ejemplo, o la magia de un líder salvador o un partido salvador. Sin que por ello se nos ocurra negar la importancia que tiene el darnos ánimos unos a otros en tiempos de dificultad, y la contribución que unos líderes o unos partidos sensatos pueden hacer al bien común.

Segundo, la intención de este estudio es contraria a la posición de los elitistas, que esperan demasiado tanto del saber de los expertos, funcionarios o académicos, como de la prudencia de las elites que se dejan (o hacen como que se dejan) aconsejar por ellos; pero tampoco negamos que la contribución de esas gentes al debate y a la decisión pública puede ser de gran valor. Es obvio que los saberes expertos son importantes e imprescindibles. Al mismo tiempo, nuestra intención nada tiene que ver con la de quienes adoptan una posición populista, que suele derivar en una simplificación exagerada de los problemas y en la sustitución del razonamiento por una emotividad confusa, que puede dar pábulo a no pocos excesos. Ello no significa, en modo alguno, que no reconozcamos su parte de razón a la opinión común. En realidad, con este estudio demostramos justo lo contrario. Lejos de minusvalorar las opiniones del común de las gentes, hacemos de ellas el centro mismo de nuestra investigación.

2

RASGOS DISTINTIVOS DE LA CRISIS ESPAÑOLA

■ CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA CRISIS EN ESPAÑA

La crisis internacional que se desencadenó en 2007/2008 ha tenido en cada país efectos distintos, debido a las características particulares de cada economía. En España, el efecto más notable ha sido el de una gran destrucción de empleo y, por tanto, un gran aumento de la tasa de paro, a pesar de que el PIB no ha caído tanto como en otros países europeos. Según las estadísticas oficiales (Eurostat) en España el PIB cayó un 2,9% entre 2007 y 2009, mientras que la caída media de los países de la UE27 fue de 4,2%. Sin embargo, en ese mismo periodo, el empleo, medido con la Encuesta de Población Activa Europea, cayó en España un 7,2%, frente a una caída media del 1,3% para los países de la UE. Habiendo caído tanto el empleo, lógicamente, el desempleo en España ha subido mucho. Entre 2007 y 2009, la tasa de paro española pasó del 8,3% a más del doble, un 18%; por su parte, la media de las tasas de paro de los países de la UE pasó del 6,3 al 8,8%. Si en 2007 la tasa de paro española había sido la 5ª de la UE27, en 2009 volvió por sus fueros tradicionales, situándose en el primer lugar.

En buena medida, la gran destrucción de empleo en la economía española se ha debido al colapso del sector

de la construcción, que había crecido extraordinariamente durante la última fase alcista del ciclo. En realidad, la construcción siempre gana peso en la economía española en las fases alcistas y lo pierde en las bajistas. Baste un dato para comprobarlo, el de la evolución del porcentaje de ocupados en el sector de la construcción. Partiendo de niveles próximos al 8% a mediados de los sesenta, llegó a un primer máximo (cerca del 10%) al comenzar 1977. La crisis de los setenta y primeros ochenta envió el dato a un nuevo mínimo, cercano al 7% a comienzos de 1985, pero se recuperó con fuerza en la segunda mitad de los ochenta, llegando a un nuevo máximo, algo superior al 10% hacia 1991. La nueva crisis hizo retroceder el indicador, pero sólo hasta un mínimo del 9% a finales de 1993. La recuperación ulterior lo elevó a niveles extraordinarios, con un máximo superior al 13% hacia 2007. Con la nueva crisis, la cifra se ha desplomado hasta unos niveles actuales cercanos al 9%.¹

Una prueba más de los excesos de la construcción la tenemos en el porcentaje de ocupados varones en dicho sector sobre el total de ocupados varones. Si en la fase alcista de los ochenta había alcanzado un máximo cercano al 15%, cayendo con la crisis de los noventa por debajo del 13%, el crecimiento posterior careció completamente de precedentes, alcanzándose una cima superior al 21% en 2007. Uno de cada cinco ocupados varones estaba empleado en la construcción. En el punto álgido de la ocupación de la construcción en España (2º trimestre de 2007), el peso de dicho sector en el empleo total en España (13,4%) era el segundo en la UE27, sólo por detrás

¹ Cálculos propios con datos de la Encuesta de Población Activa del INE.

de Irlanda (13,5%).² En los primeros lugares se situaban varios países que habían protagonizado un *boom* inmobiliario, como España, Irlanda o Portugal, pero también muchos países de la antigua Europa del Este, en los que es esperable mucha actividad constructora (o reconstructora), dado que parten de niveles de desarrollo muy inferiores a la media europea. En los últimos lugares se situaban países sin *boom* inmobiliario y con una menor presencia tradicional de la construcción.

El *boom* de la construcción en España fue posible, sobre todo, gracias a lo que se ha dado en llamar una “burbuja crediticia”, protagonizada por las instituciones financieras, los promotores y constructores, y las familias con hipotecas sobre sus viviendas. Promotores, constructores y familias se han endeudado masivamente con las entidades financieras (locales y foráneas), y las entidades financieras españolas lo han hecho con entidades financieras foráneas.

El conjunto de la deuda de los agentes económicos españoles, excluyendo las entidades financieras, lleva creciendo, como poco, desde 1995, alcanzando el 266% del PIB en 2008, lo que supone probablemente haber crecido dos tercios en dicho periodo.³ El crecimiento se ha visto impulsado, sobre todo, por el sector privado de la economía, pues la deuda pública, así medida, había seguido hasta entonces una senda descendente. Los créditos de las entidades financieras españolas a empresas y familias crecieron a buen ritmo en los años noventa, se acelera-

² Cálculos propios con datos de Eurostat.

³ La ruptura de las series no permite una comparación exacta, pero ligándolas de manera aproximada el resultado es el mencionado. La fuente de los datos es Banco de España (varios años).

ron con el cambio de siglo y adquirieron una velocidad inusitada en 2003/2004. A comienzos de 2004 ascendían a 0,81 billones de euros; en su punto máximo, a finales de 2008, alcanzaban la cifra de 1,87 billones. Es decir, se habían multiplicado por 2,3 en apenas cinco años. Mientras tanto, en esos cinco años, los depósitos de familias y empresas en las entidades financieras españolas pasaron de 0,63 a 1,58 billones de euros.⁴

Al endeudamiento privado se ha añadido recientemente un considerable endeudamiento público. La deuda pública anterior a la crisis no ascendía a niveles preocupantes, pero la enorme caída en la recaudación derivada de la recesión, junto con la aplicación de medidas de estímulo (más gasto público), ha provocado la aparición de déficits públicos de gran tamaño, que están acrecentando la deuda pública a marchas forzadas.

Parte de estas deudas se han contraído con el exterior. De hecho, uno de los rasgos distintivos de nuestra crisis han sido los problemas para hacer frente a los pagos de la deuda exterior una vez que el crecimiento económico se ha detenido. La deuda externa bruta de la economía española ascendía a un 92% del PIB al acabar 2002. Al acabar 2007, el porcentaje ya ascendía al 148%, y a finales de 2009 se ha situado en un 167%. Las estadísticas internacionales de deuda externa compiladas por el Banco Mundial permiten comparar a la gran mayoría de los países de la Unión Europea desde 2003 a 2009. La ratio deuda externa / PIB se multiplicó por 1,57 en España, un incremento notable, pero no de los más altos (el 10º de los 22 países con datos). El tamaño de la deuda externa

⁴ Datos procedentes de las series del *Boletín Estadístico* del Banco de España.

sobre el PIB tampoco es de los más altos (1,7 veces el PIB; el 12º de los 22 países).⁵

A pesar de que la evolución de la deuda externa española no ha sido de las peores, los inversores internacionales han acabado por apreciar un riesgo excesivo en la tenencia de títulos de deuda españoles (especialmente de deuda pública), elevándose notablemente la prima de riesgo de nuestra deuda en comparación con la alemana. Ha influido en ese deterioro de la confianza no sólo el gran tamaño de la deuda externa española y su negativa evolución reciente, sino unos resultados económicos muy malos en 2009 y 2010 (señaladamente en términos de empleo), unas perspectivas económicas nada alentadoras (véase más adelante) y la inacción del gobierno español, tardo en reconocer la crisis y en adoptar medidas favorecedoras de la reactivación económica y del equilibrio presupuestario. En el deterioro de la confianza debió de influir también la previa experiencia con la crisis de la deuda griega.

La caída de la confianza en los mercados internacionales llegó a ser tan grande que a la altura de mayo los inversores internacionales, en la práctica, se negaron a adquirir deuda pública española, aunque su remuneración subiera mucho. Temerosos de que una crisis de la deuda española pusiera en peligro el mismo sistema monetario europeo (no en vano buena parte de los acreedores de España son entidades financieras y de otro tipo de los países centrales de la UE), líderes extranjeros como Angela Merkel y Barack Obama enviaron un mensaje, al parecer inequívoco, a Rodríguez Zapatero, a efectos de que adoptara una posición de mucho mayor compromiso en

⁵ Cálculos propios con datos de los *World development indicators*, del World Bank.

el control de la política fiscal, disponiéndose los países de la Unión Europea y el FMI a aportar una cantidad ingente de recursos para el salvamento de la economía española y la de otros países periféricos en situaciones similares. Desde entonces, aunque la prima de riesgo de la deuda pública española ha seguido en niveles altos, no ha vuelto a producirse, hasta ahora (otoño de 2010) una situación tan crítica, aunque las alarmas han vuelto a sonar en paralelo a la aprobación del plan de rescate irlandés el 21 de noviembre de 2010 (y pueden volver a hacerlo).

■ CÓMO AFRONTAN LA CRISIS LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS: ALGUNOS PRECEDENTES INTERESANTES

Como venimos contando, la economía española atraviesa la recesión más acusada de los últimos cuarenta años, esfumándose, de un día para otro, la bonanza de los tres últimos lustros. La tasa de paro, de un 20,2% en el segundo trimestre de 2010, se acerca a sus máximos históricos. Como en una pesadilla recurrente, las preocupaciones del público vuelven a ser las mismas que en 1994 (y antes, en 1974, o en 1979), y la discusión pública parece volver a girar sobre los mismos temas: qué hacer para recuperar la senda del crecimiento, cómo conseguir que el desempleo vuelva a niveles tolerables. Como si el tiempo no hubiera pasado, vuelven a escucharse los mismos argumentos: estimulemos la demanda con el gasto público; reduzcamos los costes del despido, y por tanto los de la contratación, para que los empresarios vuelvan a crear empleo; bajemos las cuotas de la seguridad social, o los impuestos a las empresas, para que el empleo cueste menos y se contrate más. Todo ello tiene a veces el aire de un *déjà vu all over again* ("lo ya visto una y otra vez").

Mientras la clase política y el cuerpo (maltrecho) de expertos económicos afilan sus armas dialécticas, en el fondo, a la espera de la nueva marea de crecimiento mundial que levante todos los barcos, también el español, y dispuestos, quizá, a reformas de menor calado, como en 1994, o en 1997, la sociedad se intenta adaptar a la nueva realidad. ¿Cómo lo está haciendo? La respuesta a esta pregunta viene dada, en parte, por las respuestas a las encuestas reseñadas en este libro. Pero creemos que, para entender el contexto de esas respuestas, conviene tener en cuenta el trasfondo de una experiencia anterior que pudiera afectar el tono emocional y las expectativas de los españoles de hoy a la hora de articular su reacción a la crisis actual.

Entendemos, por ello, que conviene recordar cómo se adaptó la sociedad española en 1994/1995 a una crisis económica bastante grave, y examinar algunos de los cambios que han tenido lugar desde entonces.

Entonces, como en la crisis de los setenta, una institución social permitió cruzar las aguas de una tasa de paro cercana al 25% sin demasiados ahogados. Nos referimos a la familia, que mantenía unas pautas de funcionamiento entre tradicionales y, por usar la expresión al uso, modernas. A diferencia de lo que ocurría en los países de la Europa del centro y del norte, y en común con la Europa mediterránea, los hijos vivían en el hogar paterno hasta una edad bastante avanzada, claramente superior a los veinticinco años de media.⁶ Especialmente los que seguían estudios universitarios, pero no sólo ellos, espe-

⁶ Las diferentes pautas familiares en la historia de Europa las ha estudiado David Sven Reher (1998)

raban a contar con una situación económica suficientemente estable, incluso cómoda, y con una pareja también estable, presta a casarse, para abandonar el nido paterno, eso sí, hacia un piso en propiedad, para el que se llevaba ahorrando, en pareja, unos años, y a cuyo pago habían contribuido, probablemente, esos mismos padres. Hasta que levantaban el vuelo, los hijos vivían en casa de sus padres, sin reseñables conflictos generacionales, en un marco de libertad de horarios amplio, con pocas cargas domésticas, disponiendo con mucha autonomía de sus ingresos y disfrutando de las ventajas varias del hogar paterno.

La crisis de 1993/1994 llevó la tasa de paro hasta un máximo trimestral del 24,7% (1^{er} trimestre de 1994), aunque durante cinco años superó el 20%.⁷ Golpeó especialmente a los jóvenes, cuya tasa de paro llegó a niveles desconocidos (un 43,5% para los de 20 a 24 años, un 32,1% para los de 25 a 29 en el 1^{er} trimestre de 1994). Muchos de ellos se habían incorporado en los últimos años al mercado de trabajo, con contratos temporales que, en muchos casos, iban encadenando hasta conseguir, tarde, un contrato indefinido. Cuando los empresarios tuvieron que reducir costes apresurada y drásticamente, ellos fueron los primeros en marchar, pues ni siquiera hubo que despedirlos: bastó con no renovar sus contratos temporales y afrontar indemnizaciones muy bajas. El desempleo de sus padres varones creció, pero sólo llegó a un máximo del 14,3%, por ejemplo, en el tramo de 50 a 54 (1^{er} trimestre de 1994), aunque alcanzó el 16,7% en los de 55 a 59 (2^o trimestre de 1994).

⁷ Las cifras de ocupación y desempleo que siguen a continuación proceden de nuestros cálculos con datos de la Encuesta de Población Activa del INE..

¿Cómo sobrevivimos entonces a tasas de paro tan altas? Por una parte, contando con los subsidios de desempleo correspondientes, bastante generosos en cuantía y duración. Por otra, casi sin tensiones sociales. Muchos jóvenes se quedaron en el paro, sí, pero, por lo pronto, no vivían por su cuenta, no tenían que sostener su propio hogar, no habían de afrontar pagos fijos que no podría haber cubierto el subsidio de desempleo. Fueron muy pocos los que hubieron de renunciar a una independencia doméstica recién adquirida y retornar al hogar paterno. La inmensa mayoría, simplemente, pospuso aún más su emancipación, intensificando un proceso que se había reanudado en los ochenta, pero que tiene un componente tradicional bastante claro.

La familia siguió haciéndose cargo de ellos, como unidad dispensadora de afectos y de servicios, administrando ahora menos ingresos, pero consumiéndolos en común como antes. Gracias a ello, casi nadie se quedó en la calle, y muy pocos pasaron grandes penurias. En las encuestas mensuales, el paro se reafirmó en los primeros lugares de la preocupación ciudadana, a mucha distancia de los otros problemas, pero tuvo efectos menores en la cohesión social.⁸

¿Y hoy? Ya hemos señalado que la tasa de paro general todavía no ha alcanzado los máximos de la crisis de los noventa. Igualmente, las tasas de paro juvenil más recientes (2º trimestre de 2010) están por debajo de las máximas de aquella crisis, pero se van acercando a ellas. La de los jóvenes de 20 a 24 años, por ejemplo, se sitúa en el 37,1% (habiéndose casi triplicado desde el mínimo

⁸ Véase sobre todo ello Pérez-Díaz (1996) y Pérez-Díaz y Rodríguez (1994).

del 4º trimestre de 2006: 14,2%). Ello debe de explicar que el aumento en la tasa de emancipación de los jóvenes se haya detenido, o incluso pueda estar revirtiendo (Pérez-Díaz y Rodríguez 2010: 69).

Más preocupante es la evolución del paro de las cohortes de padres. En las edades de 55 a 59 todavía no alcanza los niveles de la crisis anterior, aunque se aproxima mucho (14,8%), y deprisa, pero en las de 50 a 54 ya los ha superado (14,5%).⁹ De hecho, en ese tramo de edad, la tasa de ocupación masculina ya es inferior a la mínima de la crisis de los noventa (75,8 vs 77,0% en el 1º trimestre de 1994). Sin embargo, la tasa de ocupación femenina en esas edades es hoy muy superior a la de 1994.

En términos de empleo, la diferencia fundamental entre las dos crisis radica en que en la actual se ha partido de niveles de ocupación superiores, sobre todo por el gran crecimiento del empleo femenino en los tres últimos lustros. Previamente a la crisis de 1993/1994, la tasa de ocupación total en las edades de 16 a 64 años llegó a un máximo de 51,2% en el 3º trimestre de 1991. Antes de la crisis actual el máximo fue del 66,9% en el 3º trimestre de 2007. En esos mismos trimestres, la tasa de ocupación masculina fue del 69,8% y del 77,9% (8 puntos porcentuales por encima en 2007), mientras que la femenina fue del 32,7% y del 55,7% (23 puntos porcentuales más en 2007).

En la actualidad, tras una gran caída del empleo, las tasas de ocupación siguen siendo más altas que en el mo-

⁹ Eso es así aun sin tener en cuenta que las tasas de paro no son estrictamente comparables, por cambios en la metodología de la EPA, que redujeron el número de parados y su tasa en 2001.

mento equivalente de la crisis de los noventa, esto es, 11 trimestres después del anterior máximo del empleo. Entonces (2º trimestre de 1994) se situaba en el 46,7% (62,0% para los varones, 31,5% para las mujeres); hoy (2º trimestre de 2010) es del 59,4% (65,9% para los varones, 52,9% para las mujeres). Y si planteamos las cosas en términos del grupo de población de referencia electoral, los españoles, la situación actual es aún mejor que en los noventa. Su tasa de ocupación es del 60% (67,1% para los varones, 52,6% para las mujeres).

Por tanto, en el momento actual, en términos del empleo y del paro la crisis todavía no ha alcanzado las profundidades de la de los años noventa, menos aún en el caso de los españoles, especialmente por la notablemente mayor tasa de ocupación femenina. Ella sugiere que el número de ingresos laborales por hogar ha debido de aumentar significativamente, facilitando la misma redistribución que en los noventa. Eso sí, con un paro que ha crecido mucho más rápido entre los varones (por su mayor participación laboral en el sector de la construcción), el peso de la mujer en los ingresos familiares compartidos seguramente está siendo superior al de la crisis anterior. En esos ingresos desempeñan, de nuevo, su papel los subsidios de desempleo, aunque son menos generosos que entonces, pues, precisamente, se reformaron en 1994, como medio, probablemente eficaz, de incitar a los parados a buscar trabajo sin dejar pasar mucho tiempo.

En cualquier caso, los subsidios previstos por la regulación anterior y los activados como medida excepcional durante la crisis actual, junto con la peculiar estructura del desempleo en España (concentrado sobre todo en jóvenes dependientes), han hecho que, a pesar del crecimiento

de la tasa de paro y de la cifra de hogares con todos los miembros parados (hasta un 7,6% de todos los hogares en el 2º trimestre de 2010, tras un mínimo del 2,3% en un par de trimestres de 2007), el número de hogares sin ingresos de cualquier tipo no haya crecido tanto, alcanzando un máximo del 2,9% del total de hogares en el 3º trimestre de 2009 (el mínimo se había situado alrededor de 2,1% en 2007).

Y la familia, ¿sigue siendo como la de la crisis de los noventa? En gran medida sí. Aunque en la última década se ha revertido la tendencia a una emancipación cada vez más tardía de los hijos, por ejemplo, el porcentaje de hijos emancipados en el tramo de edad de 25 a 29 años todavía es muy parecido al del año 1993, por lo que es posible que los arreglos intrafamiliares se estén repitiendo. Quizá la situación sea distinta para los recientemente emancipados, pues, habiéndolo hecho muchos con piso en propiedad, afrontan pagos por vivienda muchísimo más altos que entonces. De todos modos, mitigará los efectos del paro el que esa emancipación haya tenido lugar, en la mayoría de los casos, formando parte de una pareja con dos ingresos.

Sin embargo, algunos fenómenos acentuados en los últimos tres lustros han podido alterar algo las bases de la solidaridad familiar, dificultando en cierto grado su funcionamiento como colchón social. La tasa de divorcialidad ha crecido sustancialmente, desde el 0,7 por mil en 1993 hasta el 2,1 por mil en 2009,¹⁰ aunque hay que tener en cuenta que con la reforma legal de 2005 casi

¹⁰ Cálculos propios con la Estadística de nulidades, separaciones y divorcios, las Estimaciones intercensales de población y las Estimaciones de la población actual, todas ellas del INE.

no hay separaciones, lo que ha hinchado artificialmente esa tasa desde entonces. El aumento del número de divorcios tiene dos efectos principales en la estructura familiar. Por una parte, aumenta el número de hogares monoparentales, casi todos encabezados por una mujer, la madre, que, en la gran mayoría de los casos, se queda con la custodia de los hijos, de haberlos. Los hogares monoparentales producto de divorcios se añaden a los que son resultado de parejas que nunca llegaron a cuajar o que nunca se plantearon como proyecto de futuro, los encabezados por las antes llamadas madres solteras. Como es sabido, los ingresos per cápita de estos hogares son relativamente reducidos, y son especialmente vulnerables a una crisis económica, pues suelen disfrutar de un único ingreso, y no suelen estar encabezados por mujeres muy cualificadas. Con todo, hasta ahora, en bastantes casos, esos hogares han mantenido relaciones muy estrechas con la familia de origen de la mujer, por lo que cabe esperar ayudas de dicha familia en el caso de que esa mujer pierda su empleo. En cualquier caso, la situación será probablemente peor que en el caso de un matrimonio o pareja con dos ingresos y que pierde uno de ellos por la crisis. Sobra decir que el padre que se queda sin la custodia de los hijos también ha de estirar más sus ingresos, al tener que mantener su propia vivienda y colaborar al mantenimiento de sus hijos. También en este caso los efectos del desempleo serán más negativos que en el de una familia nuclear al uso. ¿Cuántos son los hogares monoparentales ahora? Si los definimos como hogares encabezados por un único progenitor (y ningún adulto más) y con menores dependientes, deben de rondar los 530.000, lo que apenas representa un 3% del total de hogares (17,1 millones en 2010), aunque en la última década han de-

bido de crecer a buen ritmo (eran 300.000 en 2002, un 2% del total).¹¹

Por otra parte, este aumento incrementa el número de hogares mixtos, con hijos procedentes de matrimonios o parejas anteriores. Es improbable que la solidaridad intrafamiliar sea en ellos tan intensa como en los hogares formados por padres e hijos biológicos, por lo que, quizás, la reacción ante el desempleo de uno u otro cabeza de familia, o de un hijo en edad de trabajar, se viva de manera diferente.

En cualquier caso, la principal diferencia entre la sociedad española de 2010 y la de 1993/1994 tiene que ver con la masiva llegada de extranjeros desde finales del siglo XX. En 1993, apenas un 1% de la población empadronada en España tenía nacionalidad extranjera; en 2010, la tiene un 12,2%.¹² La inmensa mayoría de los extranjeros que viven en España se han establecido en los últimos diez años, atraídos por las notables oportunidades de empleo. De hecho, los extranjeros supusieron cerca de un 45% de los empleos netos creados entre 2000 y 2007. En los últimos dos años y medio han representado un 14,5% de los empleos netos “destruidos”, una proporción similar al 14% que los trabajadores extranjeros llegaron a representar del total de los ocupados. La tasa de paro de los extranjeros se sitúa hoy en el 30,2% (con mínimos en torno al 11% en 2006/2007), mientras que la de los españoles es del 18,1% (con mínimos en torno al 7,5% en las mismas fechas).

¹¹ Cálculos propios con datos de la Encuesta de Población Activa, del INE.

¹² Según la Explotación estadística del Padrón, del INE.

¿Cuentan los trabajadores inmigrantes, especialmente los jóvenes, con el colchón familiar del que parecen disfrutar todavía los españoles? Probablemente, no; al menos, no aquí. Muchos vinieron a trabajar a España solos. Una vez en el paro, no podrán contar con sus familias de origen aquí, pues se han quedado lejos. Tampoco podrán contar con sus ayudas económicas, pues, precisamente, son ellos los que han estado ayudando a sus familias en Ecuador, Marruecos o Rumanía con los ahorros conseguidos en España, y no es habitual que los recursos financieros fluyan en el sentido contrario. Si han de confiar en una red social de apoyo, es improbable que sea la de sus vecinos o amigos españoles: las relaciones de confianza todavía no son tan profundas y, además, esas redes tampoco funcionan tan eficazmente entre los mismos españoles. ¿Podrá funcionar la red de sus compatriotas en España, quienes, por otra parte, tampoco cuentan con muchos medios? No lo sabemos. Quizá acabe por no ser tan necesaria, pues muchos opten por volver a sus países de origen, y vivir allí de los ahorros acumulados con su trabajo en España. Quizá no lo sea porque los inmigrantes muestren ante la crisis las importantes dosis de espíritu empresarial que les han llevado a buscar trabajo muy lejos de su país. O quizá sí lo sea, pero falte. En definitiva, sabemos que, grosso modo, la estructura familiar española permitirá capear el temporal de las altísimas tasas de paro, quizá con más problemas que durante la crisis de 1993. Los efectos sociales de las altísimas tasas de paro de los inmigrantes, especialmente de los varones jóvenes, por el contrario, son una gran incógnita.

3

LA PERCEPCIÓN DE LA CRISIS

■ UNA TRAVESÍA DEL DESIERTO

En el libro del Éxodo se narra cómo una comunidad, elegida, se encuentra vagando durante unos cuarenta años por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Dios la guía y, en ocasiones, la alimenta, pero, “pueblo de dura cerviz” (Éxodo 32: 9), la comunidad le suele malentender y persiste en errar y en no comprender que *las reglas* que Él le da son la garantía de su supervivencia. Se empeña en imaginar que a golpe de deseo y de voluntarismo resolverá sus problemas, o que encontrará su camino adorando a los ídolos o quejándose amargamente. Le costará mucho aceptar la pedagogía divina, que le insta a aprender a vivir en la incertidumbre cumpliendo ciertas reglas básicas de buena conducta. Al final, parece que lo consigue, de momento, y sólo de esta manera, sólo al cabo de un tiempo, Dios permite a ese pueblo acercarse lo suficiente como para vislumbrar los contornos del lugar en el que podrá descansar y al que podrá llamar suyo, y aún le quedará a ese pueblo esforzarse por aposentarse en él.

Reduciendo, drásticamente, la envergadura existencial de la experiencia en cuestión, cabe aplicar la metáfora de la “travesía del desierto” a la situación incierta de los paí-

ses actuales ante la grave crisis económica en curso. La metáfora tiene tres componentes interesantes: la idea de que estamos ante tiempos difíciles, la de que esos tiempos pueden ser largos, y la de que la pedagogía implícita en la experiencia es que hay que aprender ciertas reglas de conducta.

Cabe decir, para comenzar, que todavía no sabemos bien cuánto durará esta “travesía del desierto”. Puede durar poco o mucho. Por ejemplo, pueden ser pocos años los precisos para recobrar un ritmo de crecimiento que permita crear empleo, o pueden ser tantos que nos encontremos con una “generación perdida” que haya visto transcurrir sus mejores años entre un trabajo de circunstancias y un ocio sin mucho sentido, instalada en la crisis, por así decirlo, pero sin hacer sus deberes, o sin cumplir las reglas básicas que le permitan, de verdad, avanzar.

Pensemos en el caso de España. Imaginemos que hacemos nuestro el lugar común que suele circular en el país desde hace mucho tiempo, entre las elites y la sociedad en general, según el cual la tierra prometida se concretaría en alcanzar el objetivo de ser un país avanzado, o muy avanzado, y como tal estar entre los llamados primeros del mundo. Podría haber ocurrido que la tierra prometida fuera definida simplemente como una sociedad buena; pero es obvio que esto no es uno de los *topoi* actuales de nuestra sociedad. Aquí lo que se quiere es ser muy avanzado. Vale. En este caso, puede que, al final de la travesía que nos ocupa, el país se sitúe en el entorno de los ocho primeros países del mundo, en consonancia con el notable impulso económico que ha tenido durante varias décadas, o que descienda a un puesto mucho

más modesto, en consonancia con el puesto que ocupa ahora en *rankings* más específicos, pero de importancia estratégica, como el concerniente a la parte que las exportaciones de productos que incorporan alta tecnología representa en el total de sus exportaciones de mercancías, el 48° (Blanke *et al.* 2008). Podríamos decir que, hoy día, el país se debate en la tensión que supone ser (o haber sido hasta ahora) un aspirante destacado al 8° puesto en el *ranking* mundial de las economías nacionales y, al mismo tiempo, el ocupante del 48° puesto en este *ranking* particular (o, si se prefiere, del 42° puesto en competitividad).

Entre un puesto y otro, entre el 8° y el 48°, media una gran distancia, que puede reducirse o ampliarse en los años que vienen. Al final de la travesía del desierto de la crisis, podemos estar más cerca de la tierra prometida de la recuperación, el crecimiento, el cuasi pleno empleo de los recursos humanos, o estar más lejos.

Cada país occidental, y en general cada país del mundo, se encuentra en alguna variante de esta tesitura. Todos intentan avanzar para salir de la crisis, o para no caer en ella, y, a la vez, para avanzar en esa carrera de prestigio, poder y riqueza. No todos están en la misma situación. Algunos países todavía llamados emergentes, como China e India, se comportan mejor; Brasil, bastante bien; los países africanos, bastante peor. Países como los Estados Unidos y gran parte de los europeos se sienten, por su parte, bastante inseguros.

Estos últimos países reaccionaron en un primer momento negando la realidad y, en consecuencia, tardaron en reconocer el alcance y la profundidad de la crisis. Al final,

ante la creciente evidencia de ella, muchos tendieron, en una segunda fase, a incorporar en sus políticas económicas dosis mayores de activismo, calculando su apuesta a la vista de la relación de fuerzas locales y de la fecha de las próximas elecciones. Con todo, el activismo inicial se tradujo sobre todo en la inyección de dosis masivas de dinero público en los sistemas financieros. Con el tiempo, tras el arranque general, una mezcla de *big stimulus* y *muddling through*, se han ido definiendo dos líneas de pensamiento relativamente distintas. Algunos gobiernos han apostado, en diversa medida, por una consolidación fiscal que compense el déficit público resultado de la crisis y de las políticas de estímulo. Otros se han centrado en mantener “como fuera”, a base de gasto público o de políticas monetarias laxas, un cierto nivel de actividad económica, sin el cual, por lo demás, incluso los intentos de consolidación fiscal, faltos de base económica en la que sustentarse, pudieran malograrse. La resultante final puede ser un híbrido o una vía media de estímulo de la demanda, reformas de oferta y austeridad fiscal.

La negación de la realidad como primera reacción se manifestó con fuerza en España, y se puso de manifiesto de forma elocuente, por ejemplo, en las controversias públicas en el momento de la campaña electoral de 2008, en las que el partido gobernante optó por minusvalorar los signos de la crisis y por prometer el pleno empleo para la siguiente legislatura, es decir, una reducción sustancial y rápida de la tasa de paro, que se acercaba entonces al 9%. Cuando los signos de la crisis se hicieron más visibles a lo largo de 2009, la reacción siguió siendo la de hacer poco, de hecho, mantener el statu quo y alentar pocas reformas estructurales, o ninguna, confiando en un proceso de ajuste a medio plazo, sin fechas precisas, por

el que fueran trasvasándose recursos (capital, mano de obra) desde la sobredimensionada construcción a otros sectores, y dejando que las cosas fueran pasando, al albur de los efectos de estabilizadores automáticos como el subsidio de paro y de la capacidad de aguante de las familias, junto con la discreción y el ingenio de los inmigrantes, además de otros arreglos.

En mayo de 2010, sin embargo, sobrevino, como ya hemos señalado, un choque traumático. A la vista del gran déficit público español, la creciente deuda pública, la inmensa deuda privada y las negativas perspectivas de crecimiento económico, en los mercados internacionales cundió la idea de que España tendría severos problemas para hacer frente a sus deudas, por lo que la colocación de deuda pública en esos mercados se encareció enormemente o, simplemente, se detuvo.¹ Debidamente aleccionado y alertado, y en cierto modo amenazado, ante las consecuencias de mantenerse en una actitud de negación de la realidad y de no poner la casa en orden, el gobierno entró en una segunda fase, en la que ha anunciado, diseñado, y comienza a implementar algunos ajustes fiscales, medidas de reforma laboral y otras medidas cuya aplicación efectiva y plena será, en buena medida, cosa del futuro, tal vez inmediato o tal vez no tanto a la vista de un escenario electoral complejo y unas relaciones de fuerzas bastante fluidas.

Teniendo en cuenta este escenario en movimiento, la cuestión que nos planteamos aquí es la de cómo van reaccionando los españoles ante ese panorama. Eviden-

¹ Véase, por ejemplo, "España estaba quebrada el pasado 7 de mayo", *Libertad Digital*, 19-5-2010.

temente, mucho depende de cómo vayan interpretando la situación. Lo cual requiere comenzar por comprender nosotros mismos en qué medida están informados de la situación, y cómo la van entendiendo.

EL HORIZONTE TEMPORAL: A LA EXPECTATIVA DE UNA CRISIS DE ¿TRES, SEIS, TRECE AÑOS?

Es obvio que, en un tiempo de incertidumbre y volatilidad como el presente, el horizonte temporal de las gentes varía con las noticias de lo que va sucediendo. Por eso ofrecemos una descripción de ese horizonte teniendo en cuenta la perspectiva del otoño del 2009 y la del 2010. Por otra parte, conviene advertir que el dato crucial de ese horizonte puede referirse a magnitudes relacionadas, pero distintas. La duración de los tiempos difíciles se puede medir según el criterio de abandonar la recesión o ritmos de crecimiento muy bajos del PIB, o según el de dejar atrás tasas de paro altas.

Aunque los expertos no se ponen del todo de acuerdo, apuntan a que no retornaremos a una senda de crecimiento robusto en bastante tiempo. En otoño de 2009, las previsiones de los expertos eran del tipo de las siguientes. Funcas, por ejemplo, preveía que el PIB acabaría cayendo un 3,8% en 2009, y un 1% en 2010 (Funcas 2009a), y que, aunque quizá el PIB pudiera crecer un 1,6% en 2011, tardaría mucho en volver a tasas de crecimiento del 3%,² necesarias para que remontase el empleo. El consenso de los expertos españoles (y el go-

² *Cinco Días*, 27-10-2009, en www.cincodias.com.

bierno) se inclinaba entonces por una previsión similar para 2009 (-3,7%), y una caída algo más suave para el 2010 (-0,6%) (Funcas 2009b), pero eran cautos para los años siguientes.

En otoño de 2010, las previsiones de los expertos eran las siguientes. Funcas preveía que el PIB acabaría cayendo un 0,4% en 2010, mejorando, por tanto, su previsión de otoño de 2009, y que creciera un 0,4% en 2011 (Funcas 2010b). El consenso de los expertos españoles apuntaba a una caída del 0,4% en 2010 y un ascenso del 0,6% en 2011 (Funcas 2010a). Por su parte, el FMI preveía una caída del 0,3% en 2010 y un crecimiento del 0,7% en 2011 (IMF 2010). El gobierno era el más optimista, pues contaba con una caída del 0,3% en 2010 y una subida del 1,3% en 2011.³

La recuperación, en cualquier caso, desde el punto de vista de los expertos, no está a la vista. Por lo que se refiere a quienes encuestamos en 2009, se repartían en sus previsiones: un 32,5% creía entonces que saldríamos de la crisis antes de un año y medio (6,5%, en menos de un año; un 26,0%, en un año o año y medio), un 31,3% veía el final de la crisis en dos años, y un 33,8%, algo más tarde, situándose el valor mediano en los dos años.

En 2010 no hemos preguntado por las previsiones de crecimiento económico, pero sí sobre la evolución del desempleo, como hicimos en 2009. En 2009, el valor mediano de la opinión del público indicaba que pensaba

³ Dato ofrecido en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, disponible en la sección de notas de prensa de la página web del Ministerio de Economía.

que se tardaría tres años en volver a una tasa de paro del 11%, similar a la de los diez años anteriores, si bien el valor medio apuntaba a los 3,6 años. Un 32,4% creía que ello ocurriría en menos de dos años; un 21,4%, que pasarían entre dos y tres años; un 42,3%, de tres a cuatro años, y un 22,3%, más de cuatro años. En términos de empleo, por tanto, el horizonte de salida de la crisis era de unos tres años. En 2010, las respuestas a la misma pregunta reflejan un ensombrecimiento de las expectativas. Esta vez, el valor mediano es de cuatro años, y el valor medio es de 4,8 años. En 2009 el 16,6% creía que habría que esperar más de cinco años para que la tasa de paro volviera al 11%. En 2010, lo creía más del doble, un 37,8%.

Las expectativas han empeorado claramente, pero “lo peor” es que, aun así, pueden considerarse demasiado optimistas, sobre todo si las situamos en el contexto de la experiencia real del pasado. En el momento de la encuesta de 2009, la tasa de paro era del 18%. La última vez que habíamos tenido una tasa similar fue en el cuarto trimestre de 1998, en una fase ascendente del ciclo económico, y tardamos seis años y medio en llegar al nivel del 11%.⁴ La última vez que la tasa de paro fue del 18% en circunstancias de crisis parecidas a las actuales fue en el tercer trimestre de 1992, de modo que si tomamos ese punto de referencia, lo que tardamos en retornar a un 11% fueron trece años. En el momento de la encuesta de 2010, la última tasa de paro conocida es del 20,2%. La última vez que tuvimos en España una tasa similar fue en el cuarto trimestre de 1997, en una fase ascendente del

⁴ Comparamos las tasas con datos, grosso modo, homogéneos, corrigiendo aproximadamente la reducción de la tasa de paro debido al cambio de metodología de la EPA que tuvo lugar en 2001.

ciclo económico, tardando siete años y medio en llegar al nivel del 11 %. La última vez que la tasa de paro se acercó al 20,2% en circunstancias de crisis como las actuales fue en el cuarto trimestre de 1992, de modo que, tomando ese punto de referencia, tardamos algo menos de trece años.

Así pues, si la experiencia del pasado nos dice algo del futuro, entonces, el retorno a una tasa de paro relativamente baja para los niveles españoles de las últimas décadas hay que fiarlo a un periodo entre un lustro y dos lustros, claramente más que las estimaciones medias de nuestros entrevistados.

La lectura de la crisis como de larga duración podría ser reforzada por otras consideraciones que se refieren a rasgos estructurales de la economía española. Por ejemplo, podemos considerar cuánto tiempo imagina la gente que será necesario para transformar en profundidad el sistema educativo, o para cambiar el modelo de crecimiento. Estas cuestiones estructurales están presentes sólo en el fondo del escenario de las discusiones habituales sobre el curso de la crisis, pero las referencias a estos temas son cada vez más relevantes en el debate experto, se irán multiplicando en el espacio público y, de hecho, el público muestra signos de que se da cuenta de ellas. Esto puede ser interpretado como un indicio de que el público sospecha que el recorrido temporal de la crisis como tal o de la crisis combinada con la adopción de decisiones de fondo es relativamente dilatado, quizá del orden de una década.

Aducimos aquí, de manera sumaria, dos de estos indicios. Uno se refiere a un dato procedente de la encuesta de 2009, al que nos referiremos más adelante, relativo

a lo que tardaría España en alcanzar el nivel educativo de los países que le han de servir de modelo. Como se verá, el tiempo medio estimado por los encuestados serían unos trece años.

Otro se refiere a la probabilidad estimada de que se tomen ciertas decisiones de calado estructural relativas al modelo productivo, combinadas con el tiempo estimado para que surtan efecto. Nuestros encuestados de 2010 estiman en media o moderada la probabilidad de que los gobernantes pongan los medios para impulsar un cambio de modelo productivo, reorientando el actual hacia uno con dosis sustancialmente mayores de productos de tecnología alta o media-alta. De hecho, un 51,3% cree probable que se adopte e implemente la política correspondiente, incluso en un momento de crisis como el actual, mientras que casi tantos, un 43,4%, no lo creen probable. Por otra parte, en el caso de que se lleve a cabo ese impulso, una amplia mayoría (del 73,2%) cree que tendrá efectos importantes en unos diez años.

UNA ESTIMACIÓN EN MOVIMIENTO: UNA CRISIS CUYA GRAVEDAD AUMENTA, PERO PERCIBIDA A MEDIAS

Según nuestras encuestas, los españoles parecen estar pensando en una crisis de dos o tres años, aunque quizá en el fondo de su pensamiento haya un eco de la experiencia pasada, de crisis más largas, al menos de crisis definidas por una tasa de paro muy elevada. De todos modos, podemos pensar que las cosas ya no son como antes, ya que la actual sorprende a los españoles tras una década larga de crecimiento y, en conjunto, más ricos

que en las crisis de 1993/1994 y en la prolongada de los años setenta. Como antes, son propietarios de sus viviendas, pero ahora muchos tienen segundas residencias, han hecho sus ahorros, tienen sus coches y sus numerosos aparatos electrónicos, y sus hijos cursan estudios secundarios (todos) o superiores (muchos). Por no hablar de que los más afectados por el desempleo son, como entonces, los más jóvenes, quienes, ante las dificultades, pueden prolongar aún más su estancia en el hogar de los padres, y, como dato nuevo, los inmigrantes, que ocupan un discreto segundo plano en el debate público y no forman parte del electorado.

Lo cierto es que la visión que tienen de la gravedad de la crisis se modula según su situación particular, y lo que creen observar en torno a ellos. Por lo que se refiere a ellos mismos, la mayoría de los encuestados en 2009 decía que en el último año la situación financiera de su hogar se había mantenido igual (47,6%) o había empeorado un poco (32,1%), habiendo mejorado para un 7,8% y empeorado mucho para un 13,4%. Afrontaban el año siguiente con un relativo optimismo: un 47,2% no esperaba cambios en la situación financiera de su hogar y un 32% esperaba que mejorara un poco (un 4% esperaba que mejorara mucho, un 10,6% que empeorara un poco, y un 4,1%, mucho). En conjunto, en torno a cuatro quintos se veían “igual o un poco peor” que en el pasado año, y otros tantos se veían con la expectativa de estar “igual o un poco mejor” en el año próximo. Aparentemente, nada demasiado dramático.

Sin embargo, había indicios, ya en 2009, de que las cosas no estaban siendo demasiado fáciles, por supuesto para los parados, pero también en general; por ejemplo,

en lo relativo a la capacidad de ahorro de las familias. El ahorro familiar, medido como un agregado, estaba creciendo notablemente: en el segundo trimestre de 2009, el ahorro neto de los hogares representaba el 18,7% de su renta disponible neta, 11,8 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2008.⁵ Este agregado ocultaba, sin embargo, situaciones muy diversas. Aunque una encuesta como la nuestra no es un instrumento preciso para medir comportamientos de ahorro, nos permite apreciar una notoria diversidad, y, por tanto, que el comportamiento de más ahorro no era ni mucho menos general: un 27,1% de los encuestados decía que, en general, ahorra más entonces que hacía un año, pero eran muchos más, un 46,2%, los que decían ahorrar menos, si bien para un 26,8% el nivel de ahorro no había variado.⁶ Y eso que en bastantes casos el ahorro habría estado forzado por la necesidad de atender a los créditos hipotecarios. Casi un tercio (30,7%) de los entrevistados tenía a su nombre una hipoteca sobre su vivienda principal. De ellos, un 26,0% había tenido dificultades (algunas, un 15,3%; bastantes, un 10,8%) para hacer frente a los pagos de la hipoteca, y un 19,7% de los titulares de hipotecas había renegociado las condiciones de ese préstamo con su entidad financiera. Probablemente, el

⁵ Cálculos propios con datos de Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales, del INE.

⁶ Bastantes encuestados pueden confundir ahorro con lo que queda tras hacer frente a todas las obligaciones de pago, de modo que no consideren, por ejemplo, el pago de la hipoteca como una forma de ahorro. En la encuesta no estimamos el nivel actual de ahorro, lo cual sí se vería afectado claramente por el error anterior, sino que reflejamos la impresión que tienen los entrevistados de cuánto ha variado en dos momentos del tiempo, por lo que, al darse el mismo error en cada momento, la influencia del error en la percepción de la variación es nula. Por otra parte, la percepción de un mayor o menor ahorro varía coherentemente con la percepción de la situación financiera del hogar. Por ejemplo, entre los que dicen que esa situación ha mejorado, el porcentaje de los que afirman ahorrar más es del 51,6%, que desciende al 19,4% entre los que dicen que su situación ha empeorado mucho.

núcleo duro del problema se sitúa en el 19,7% de los encuestados con hipoteca para los que las dificultades han sido lo suficientemente grandes como para haber tenido que renegociar las condiciones con su banco o caja.

Asimismo, según la encuesta de 2009, la crisis parecía más grave cuando se la consideraba a través de lo que la gente decía observar en la calle. En algún momento, el gobierno intentó quitar hierro a la gravedad de la crisis aludiendo a “lo que se vive o se observa en la calle”, pretendiendo con esa alusión que se pensara que en ella se vivía un clima de tranquilidad, quizá avalado por la sensación de ser más ricos a la que nos hemos referido antes; un clima que contrastaría con el supuesto catastrofismo de los medios de comunicación (de los hostiles al gobierno, se supone). Sin embargo, los encuestados no lo veían así. Una mayoría, un 52,2%, decía que si se fijaba en lo que se apreciaba a su alrededor, en la calle, entre los vecinos, en la familia, la crisis económica era más grave de como la describían los medios de comunicación, mientras que para un 38,5% era menos grave. Que la visión de la gravedad de la crisis no fuera mayor para una parte de la población podía reflejar, en parte, la amortiguación de la angustia resultante de los factores ya mencionados (muchos se sienten algo más ricos que antes, y el paro se concentra en los jóvenes y los inmigrantes) y, en parte, el carácter inestable de unos sentimientos que la marcha ulterior de las cosas podía empujar en una dirección u otra.

■ ¿EXPECTATIVAS CADA VEZ PEORES?

¿En qué dirección ha empujado esa “marcha ulterior de las cosas” a esos sentimientos? La encuesta de 2010

ofrece algunas pistas para responder a esta cuestión. Por lo pronto, podemos comparar las experiencias de los hogares de los últimos doce meses y sus expectativas para los doce meses siguientes, tal como se expresaban en septiembre de 2009 y en septiembre de 2010. Una comparación tal suele ser inhabitual, pero resulta interesante y nos proporciona una pista de la evolución del talante, es decir, del modo emocional con el que el público va manejando sus circunstancias.

Para comprender mejor la evolución, midamos, en primer lugar, la evolución de la experiencia pasada. En 2009, el 7,8% pensaba que la situación financiera de su hogar había ido a mejor en los 12 meses anteriores, mientras que para el 45,5% había ido a peor. En 2010, un 5,5% cree que las finanzas de su hogar han ido a mejor en los últimos 12 meses, mientras que los que perciben un empeoramiento son ahora un 48,4%. En conjunto, la experiencia media ha podido empeorar algo.

Quizá es más elocuente comprobar en qué medida se han cumplido las expectativas que albergaban los encuestados en 2009. Parecería que no mucho. En septiembre de 2009, el 36% esperaba que la situación financiera de su hogar mejorase en los doce meses siguientes, mientras que un 15,7% temía que empeorase. Sin embargo, en septiembre de 2010, tan sólo un 5,5% reconoce que dicha situación ha mejorado en el último año, mientras que para un 48,4% habría empeorado. Las expectativas frustradas alcanzarían, grosso modo, a un 30,5% (36 - 5,5%) de los encuestados.

Esta frustración puede implicar una acomodación a la baja de las expectativas. La resignación es un modo tra-

dicional, y muy lógico, de reducir el sufrimiento; como también lo es el de la compensación con otras alegrías cotidianas de la vida, favorecido quizá por otros factores culturales. Si en septiembre de 2009 un 36% esperaba que las finanzas de su hogar fueran mejor el año siguiente, en septiembre de 2010 sólo lo espera un 22,4%. Si en 2009, un 14,7% temía que fueran a peor, en 2010 lo teme un 23%. La dirección del ajuste de expectativas es muy clara: se reduce el porcentaje de optimistas (en 13,6 puntos) y crece el de pesimistas (en 7,3 puntos).

Parece haber, pues, cierto margen para un ajuste de expectativas a la baja en los próximos años.

PESIMISTAS EN TANTO QUE REALISTAS, PERO NO EN TANTO QUE ESTRESADOS Y ANGUSTIADOS, AL MENOS TODAVÍA

Una de las falacias habituales que circulan en el espacio público es la de confundir la mirada realista sobre cómo son las cosas, o cómo serán probablemente a la vista de las circunstancias, y las emociones dominadas por el miedo o la angustia. Los políticos la cometen a veces, tildando sistemáticamente a sus adversarios de “pesimistas” cuando pudieran ser simplemente realistas que llaman la atención sobre los problemas.

Lo más razonable es ser lo más realista posible, y también ser lo más animoso o esperanzado posible para resolver los problemas futuros. Además de razonable, esto es, acorde a la razón, dicha actitud es útil y conveniente para salir adelante.

Esto viene a cuento si queremos comprender mejor algunas informaciones relativas a cómo ven los españoles la situación en curso. En cierto modo, la ven con “pesimismo”, pero probablemente se trata, por ahora, de un pesimismo más connotado de realismo que de estrés o de angustia. Pueden seguir queriendo disfrutar del sol y del buen tiempo, por ejemplo, aprovechar un fin de semana para escaparse al mar o a la montaña, pasarlo bien en agradable compañía, no llorar por las esquinas salvo lo indispensable, y confiar o tratar de confiar en diferentes cosas y personas (partidos, líderes, el destino, la providencia, etcétera). Digamos que pueden querer mantener un tono vital animoso, en general.

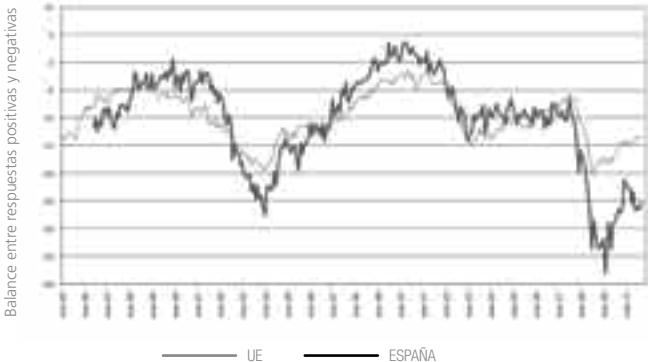
Retornemos ahora a la evidencia estadística. Los dos gráficos siguientes ofrecen una panorámica de la evolución de la percepción del pasado inmediato y de las expectativas futuras sobre la situación de sus hogares que han mantenido el conjunto de los europeos y los españoles en los últimos veinticinco años. El recorrido total dibuja a los españoles como más satisfechos y optimistas que los europeos en tiempos de bonanza, pero más insatisfechos y pesimistas en tiempos de crisis. Ello puede sugerir rasgos de una personalidad bipolar o, simplemente, reflejar que cuando toca crecer, España crece más que la media europea, y cuando toca no crecer, por ejemplo, se destruye mucho más empleo. A los efectos de nuestra discusión, centremos la atención en los últimos años.

Al hacerlo, comprobamos que el balance de las respuestas positivas y negativas de una pregunta sobre la situación financiera pasada, formulada en las encuestas

de consumidores de la Comisión Europea a la altura de septiembre/octubre de 2009, representa un juicio según el cual la situación financiera del hogar en el pasado estaba recuperándose tímidamente, tras los mínimos históricos de finales de 2008 y comienzos de 2009, unos mínimos mucho más bajos para los españoles que para el europeo medio (gráfico 1). El índice continuó creciendo hasta diciembre de 2009, pero cayó después hasta el verano de 2010, situándose en niveles similares a los de otoño de 2009, y apenas se ha recuperado después, siguiendo una evolución peor que la media europea. De este modo, los niveles españoles de septiembre de 2010 (-27 puntos) son casi idénticos a los de septiembre de 2009 (-25 puntos).

GRÁFICO 1

Unión Europea y España (1985-2010). Percepción de la situación financiera del hogar en los últimos 12 meses (datos ajustados estacionalmente)

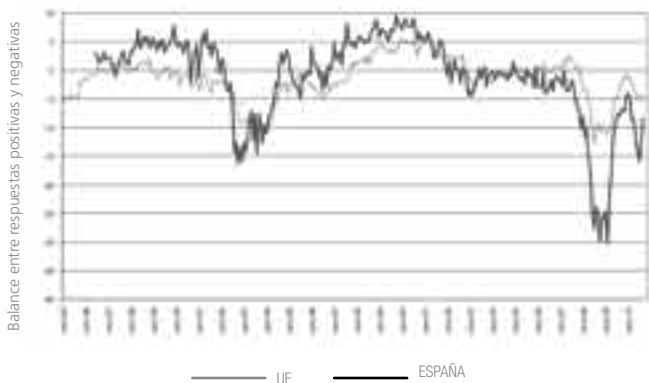


Fuente: Elaboración propia con datos de European Commission. Directorate General for Economic and Financial Affairs, *Consumer surveys. Time series*.

El gráfico 2 recoge el balance de las respuestas positivas y negativas a la pregunta por la situación financiera del hogar en el año próximo, tal como se formula en las encuestas de consumidores de la Comisión Europea. En septiembre de 2009, las expectativas habían mejorado sustancialmente en comparación con la sima a la que habían llegado entre julio de 2008 y febrero de 2009, de una profundidad inusitada en la serie de datos. Desde entonces todavía mejoraron algo, pero en enero de 2010 se inició un desplome que sólo “rebotó” en agosto de 2010. De este modo, las expectativas en septiembre de 2010 (-8 puntos) son idénticas a las de septiembre de 2009 (-8 puntos), y son peores que las del europeo medio (-4 puntos).

GRÁFICO 2

Unión Europea y España (1985-2010). Expectativas de cambio de la situación financiera del hogar en los próximos 12 meses (datos ajustados estacionalmente)



Fuente: Elaboración propia con datos de European Commission. Directorate General for Economic and Financial Affairs, *Consumer surveys. Time series*.

Este “pesimismo” de la inteligencia no tiene por qué ir de la mano de un “pesimismo” del corazón, o de las emociones. Son relativamente pocos, un 27,7%, los que en 2010 afirman haber sentido en los últimos seis meses alguna experiencia de estrés, ansiedad, depresión o dificultades para dormir a causa de la crisis. Una pregunta similar a la que hemos utilizado, aplicada en veinticuatro países en septiembre/octubre de 2009, sitúa a los españoles entre los menos estresados o angustiados por la crisis (WIN 2009). En España, un 33%, una cifra muy parecida a la obtenida en nuestra encuesta de 2010, declaró haber experimentado al menos una de esas cuatro condiciones psicológicas como resultado directo de la situación económica del momento, un porcentaje claramente inferior al 56% de los franceses en esa situación, el 55% de los británicos o el 70% de los norteamericanos.

Varias razones pueden estar detrás de que el tono vital de los españoles sea relativamente optimista. Entre ellas cabe recordar la experiencia de tiempos, grosso modo, de bonanza en los últimos cincuenta años, con fases sostenidas de crecimiento económico, reblandecimiento de un régimen autoritario que culminó en una transición pacífica a una democracia liberal, todo ello reforzado por la incorporación a una Unión Europea que parece un ejemplo de convivencia, prosperidad y buena gobernanza, sobre todo si se compara lo ocurrido en su territorio en la segunda mitad del siglo XX con lo que ocurrió en la primera mitad. En todo caso, está claro que el valor y el significado del optimismo debe ser cualificado por el contexto cognitivo, moral y emocional en el que aparece. Por repetir lo ya dicho con otras palabras: no es lo mismo el optimismo aliado con la falta de sentido de realidad que aliado con el realismo. Como ya hemos señalado,

por el momento la percepción de la realidad se va ensombreciendo, tanto en lo que se refiere a las expectativas familiares como (recordemos lo dicho sobre la evolución futura de la tasa de paro) al futuro colectivo.

RESULTADOS PRINCIPALES DEL CAPÍTULO 3

Tiempo estimado para volver a una tasa de paro del 11%.

2009	
■ Más de 5 años.	16,6
■ Media (en años).	3,6
■ Mediana (en años).	3
2010	
■ Más de 5 años.	37,8
■ Media (en años).	4,8
■ Mediana (en años).	4
(2009) SI SE FIJA EN LO QUE VE ALREDEDOR (EN LA CALLE, ENTRE SUS VECINOS, EN SU FAMILIA), ¿DIRÍA QUE LA CRISIS ECONÓMICA ES...	
■ ...más grave de cómo la describen los medios de comunicación.	52,2
■ ...menos grave.	38,5
(2009) ESPERABAN QUE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE SU HOGAR MEJORASE EN LOS 12 MESES SIGUIENTES.	35,9
(2010) LA SITUACIÓN FINANCIERA DE SU HOGAR HA MEJORADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.	5,5
ESPERAN QUE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE SU HOGAR VAYA A PEOR EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES.	65,7
■ 2009.	14,7
■ 2010.	23,0
(2010) HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES, A CAUSA DE LA CRISIS, ALGUNA EXPERIENCIA DE ESTRÉS, ANSIEDAD, DEPRESIÓN O DIFICULTADES PARA DORMIR.	27,7

4

INFORMACIÓN Y COMPRENSIÓN A MEDIAS

■ SE PUEDE APRENDER, O NO

En contra de lo que a veces se dice, la experiencia enseña muy poco por sí misma. Recuérdese, por ejemplo, que muchos creyeron aprender de la experiencia de la primera guerra mundial que el liberalismo estaba superado, y que lo más interesante y más moderno era ensayar alguna fórmula revolucionaria y totalitaria. Tal fue el *Leitmotiv* de las juventudes totalitarias de una Europa ampliada hasta los Urales (como hubiera dicho el general De Gaulle), de izquierdas o de derechas, en los años treinta y cuarenta (y algo más) del siglo pasado. En la España de hoy, que es el escenario de este libro, lo que un día se creyó haber aprendido como las lecciones de la guerra civil se ha convertido en una suma, o un revoltijo, de interrogantes, y lo que, más tarde, se pudo aprender cuando se manejaron la crisis del estado de derecho y la grave crisis económica en la primera mitad de los años noventa, ha quedado bastante diluido en el debate posterior. La respuesta sectaria y partidista de unos y la indiferencia de muchos puede volver a reflejarse en cierta tolerancia con lo que se percibe como la manipulación del aparato de estado en temas judiciales y de seguridad, y cierta resignación con una tasa de paro de nuevo elevadísima. No, no es seguro que se

aprenda, y mucho menos que lo que un día se aprenda no se pueda desaprender.

Esto dicho, cabe reconocer que, en general, ayudan a aprender un temple ecuánime y un poco de información y entendimiento de lo que ocurre. Dejando lo del temple para otra ocasión (pues, al menos, hoy por hoy no cunde el pánico o el estrés), centrémonos en la información y el entendimiento, los cuales, a su vez, también pueden tranquilizar el ánimo y mejorar el temple. Admitamos, pues, que las lecciones que se puedan extraer de la experiencia dependen de la capacidad que se tenga de entenderla. Esto, a su vez, depende de varios factores, entre otros, de si se tiene información sobre la materia y se es capaz de ordenarla.

Las encuestas de 2009 y de 2010 nos permiten profundizar en esa cuestión, encontrándonos con un conjunto de evidencias de cierta complejidad.

DICEN QUE NO LES INFORMAN LOS GOBERNANTES NI LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Constatamos, por lo pronto, que una mayoría no se siente bien informada por dos fuentes cruciales de información de los asuntos públicos, ni por los gobernantes ni por los medios de información.

En lo que se refiere a los gobernantes, en la encuesta de 2009 mayorías aplúsimas de los encuestados estaban en desacuerdo con cómo el gobierno había informado sobre la crisis. Un 74,9% creía que el gobierno había informado tarde (26,5%) o muy tarde (48,4%) sobre la cri-

sis, frente a un escaso 24,6% que pensaba que se había demorado un poco o lo había hecho a tiempo. El juicio sobre la calidad de la información del gobierno era también muy negativo: un 80% pensaba que la información había sido poco completa (40,4%) o muy incompleta (40,1%), y sólo un 17,5% concedía que había sido bastante o muy completa. Combinando ambas respuestas, se obtenía un 68,5% de encuestados que pensaban que el gobierno había informado, digamos, tarde y mal. Cabe observar que, aun cuando estos juicios estaban teñidos por la inclinación política de los encuestados, de modo que los votantes del PP eran los más críticos (un 96,1% pensaba que había informado tarde y un 96,9%, que lo había hecho mal), la crítica al gobierno era también mayoritaria entre los votantes del PSOE (un 56,5% pensaba que había informado tarde y un 63,4%, que lo había hecho mal).

En lo referente a los medios de comunicación, un 69,3% de los encuestados en 2009 creía que, en términos generales, los medios en España tienden a dar la información de manera poco objetiva, y sólo un 23,9%, que lo hace con objetividad. Esos porcentajes, por otra parte, reflejan una evolución negativa en el aprecio que tiene el público por los medios de comunicación, pues en abril/mayo de 1998 los que creían que los medios eran poco objetivos tan sólo ascendían a un 42,5%, mientras que los que los veían como objetivos eran un 40,5%.¹

¹ La fuente de estos datos es la encuesta ASP 98.011, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo en los meses de abril y mayo de 1998. Los hemos calculado a partir de una submuestra formada por los encuestados de 18 a 75 años (N=1.133).

Con todo, no cabe excluir que algunos medios de comunicación entiendan estos resultados como un signo de progreso de los tiempos, porque reflejan que el público comprende mejor cómo deben ser unos medios comprometidos con un cambio del sistema o una mejora de la situación, no fingidamente neutrales, sino sinceramente apasionados. En el lenguaje de una parte de la tribu mediática la pérdida de objetividad tal vez sea un logro, pero, hoy por hoy, en el de los ciudadanos corrientes, y algunos filósofos partidarios del lenguaje del sentido común, “ser objetivo” viene a usarse como equivalente a “ser realista” o “ser verdadero”, y no serlo suele ser considerado como un desdoro.

En la encuesta de 2010 una nueva pregunta sobre los medios de comunicación ha arrojado resultados muy coherentes con los del año anterior. Un 68,1% cree que los medios de comunicación le informan de la crisis de manera más bien desordenada y confusa, mientras que un 28,4% cree que lo hacen de manera más bien ordenada y clara.

Naturalmente, si la información que fluye de los gobernantes y de los medios de comunicación no es la adecuada, lo lógico es que los ciudadanos no se sientan muy bien informados, aunque vayan reuniendo trozos de información “de aquí y allá”, en la forma de retazos de lo que dicen los políticos y los medios, en su experiencia cotidiana, en su trabajo, en sus conversaciones con familiares y amigos. De hecho, en la encuesta de 2009 observamos que los encuestados creían estar informados sobre la crisis más bien a medias. En una escala del 1 (“nada informado”) al 5 (“muy informado”), la información media sobre la crisis que creían tener los encuestados se si-

tuaba un poco por debajo del punto 3, esto es, en el 2,8. Formulado en otros términos, podríamos decir que las posiciones 1 y 2 significan “mal informado” (23,4%), 3, “informado a medias” (39,2%) y 4 y 5 “bien informado” (36,9%). Es llamativo, por otra parte, que el nivel de información percibido no mejorase sustancialmente al aumentar el nivel de estudios: la media de quienes tenían estudios universitarios era del 3,0.

¿ENTIENDEN AQUELLO DE LO QUE ESTÁN INFORMADOS?

En la encuesta de 2009 preguntamos también sobre el entendimiento que el público creía tener de las causas de la crisis. Aplicando la misma escala de 1 a 5, los resultados son muy parecidos a los anteriores. La media venía a ser casi la misma, con un 2,9. Si suponemos que los puntos 1 y 2 representan a quienes no entienden las causas de la crisis, el punto 3, a quienes las entienden a medias y los puntos 4 y 5 a quienes las entienden, entonces, los que no las entienden son el 29,9%, los que las entienden a medias son un 43,6%, y los que las entienden son un 26%. De nuevo, tener más estudios no marca una diferencia sustancial: la media de los universitarios era de 3,1.

Siguiendo la pista del entendimiento de la situación, la encuesta de 2010 nos proporciona otro dato interesante (junto con otros que comentamos más adelante). Los encuestados tenían que señalar lo que hacían “a la hora de informarse sobre la situación económica” eligiendo entre dos opciones: se fija en dos o tres asuntos, ya que tiene una idea bastante clara de los riesgos principales

de la economía española, o no sabe muy bien en qué temas fijarse para entender lo que ocurre. Un 56,5% eligió la primera opción, lo que implica que integra mejor la información que vaya recibiendo; un 40,1% confesó que no acaba de entender lo que ocurre, por lo que es de suponer que le resultará difícil integrar la información económica.

Las dos medidas anteriores, relativas al grado de información sobre la crisis, aun no siendo directamente comparables, sugieren un aumento del grado de alerta de la sociedad ante la crisis económica. Los datos, repetimos, no son homogéneos, pero quizá pasar de un 26% en niveles percibidos como altos de información sobre la crisis a un 56,5% que afirma indirectamente tener una idea relativamente clara de las claves de la crisis, refleja una suerte de aprendizaje.

LA INFORMACIÓN SOBRE ALGUNOS DATOS CLAVES: LAS CIFRAS DEL PARO Y UN MOMENTO CRUCIAL DE LA CRISIS FINANCIERA

Sería prometedor que, efectivamente, estuviera teniendo lugar un aumento del grado de alerta sobre la crisis. Sin embargo, conviene situar esa apreciación en el contexto de lo que los españoles saben en concreto acerca de esas claves o riesgos principales de la situación económica. Conviene matizarlo a la vista de las respuestas a dos preguntas más específicas relacionadas con dos asuntos de crucial importancia, que seguramente se cuentan entre los relativos a los riesgos de la economía española en los que hay que fijarse: el paro y la colocación de la deuda española en los mercados internacionales.

Preguntamos por la dimensión del desempleo en España, un dato que es moneda corriente en el debate público, y que mide la evolución del potencial de crecimiento de la economía real, y por tanto de las probabilidades de un saneamiento del sistema financiero, por no hablar de la gravedad de los problemas sociales del país.

En 2009 pedimos al entrevistado que nos dijera la tasa de paro de entonces, respondiendo espontáneamente. En realidad, un 41,3% decidió contestar con una cifra absoluta, mientras que un 39,3% se ciñó estrictamente a la pregunta y aventuró una tasa de paro. Un 17,9% no contestó. La media de los que contestaron con un porcentaje fue del 21,2%. La media de los que contestaron con una cifra absoluta fue de 3,9 millones. Por entonces, las cifras más recientes eran las siguientes. Según la EPA, la tasa de paro en el segundo trimestre de 2009 era del 18,0% y la cifra estimada de parados, de 4,13 millones. Según la definición de paro del Ministerio de Trabajo, los parados registrados por los Servicios Públicos de Empleo al acabar septiembre de 2009 eran 3,71 millones.

En 2010 decidimos preguntar por una cifra absoluta de parados, ante la evidencia de que muchos encuestados no eran capaces de recordar o aventurar un porcentaje. Con todo, un 9,1% respondió con una tasa de paro, pero la submuestra es muy pequeña como para que los datos tengan alguna validez. Un porcentaje muy parecido al de 2009, el 17,1%, no contestó a la pregunta. Al final, contestó con una cifra absoluta el 73,8%. La media que se obtiene de sus respuestas es de 4,1 millones, similar a la de 2009. Por entonces, las cifras más recientes eran las siguientes. Según la EPA, en el segundo trimestre de 2010 eran 4,64 millones (un 20,2% de la población activa),

mientras que los Servicios Públicos de Empleo registraban al acabar agosto del mismo año 3,97 millones.

Que en la discusión pública se manejen dos cifras distintas dificulta no sólo el conocimiento de la ciudadanía, sino evaluar en qué medida se equivocan o aciertan los encuestados, pues aunque la cifra considerada por los expertos como más fiable es la de la EPA, es más probable que los encuestados hayan escuchado las de los Servicios de Empleo, que se publican cada mes. En todo caso, si comparamos sus respuestas de 2010 con el dato de la EPA (4,64 millones) y damos por buenas las cifras entre 4 y 5 millones, entonces “acertaría” un 83,9% de los que contestan con un dato absoluto, o un 61,9% del total de la muestra. Lo subestimaría un 12,7%, es decir, un 9,4% de la muestra; y lo sobreestimaría un 3,5%, o un 2,5% de la muestra total. Si a las subestimaciones y sobreestimaciones sumamos la ausencia de respuesta, tendríamos un nivel, conservador, de desconocimiento del 29%.

El otro dato interesante se obtiene al preguntar por el momento de crisis en la colocación de la deuda pública española en los mercados internacionales que tuvo lugar en la primavera de 2010, más concretamente en el mes de mayo, a raíz de la crisis de la deuda griega, y que tuvo efectos importantes en el debate político. En él se dio cuenta de la situación con una mezcla de dramatismo genérico y eufemismo respecto a los datos de la situación, supuestamente para que no cundiera el pánico. Sin embargo, el resultado evidente fue el de un cambio sustancial en la definición de la situación y en las propuestas políticas que hacía el gobierno, al menos de cara a la ciudadanía española y, especialmente, de cara al entorno internacional. De él habían llegado las extraor-

dinarias presiones, indirectas, en la forma de los muchos inversores internacionales que dejaron de confiar en la deuda pública española, y directas, en la forma de las conversaciones del Presidente del Gobierno con su homóloga alemana y con el Presidente de Estados Unidos. En la narrativa convencional de los expertos hay un antes y un después en el manejo de la crisis española ligado a esos acontecimientos.

Preguntados los encuestados por si habían oído o leído alguna vez la noticia de que “los inversores internacionales dejaron de adquirir deuda pública española en un determinado momento de la crisis pensando que el estado español tendría dificultades muy grandes para hacer frente al pago de esta deuda a corto plazo”, el 47,2% confesó que era la primera vez que sabía de ella.

Un 52% admitió haber oído o leído algo sobre el particular, por lo que podríamos estar ante una mitad de la ciudadanía formada por gentes alertas y atentas a las noticias principales de la crisis. Sin embargo, cuando se les pregunta si recuerdan cuándo se produjo esa circunstancia, sólo el 25,2% la sitúa en un margen temporal, digamos, correcto, esto es, entre abril y junio (incluyendo el 11,6% que la ubica en el mes de mayo). Para el 17,5% esos acontecimientos habrían ocurrido entre seis meses y un año antes del momento de la encuesta (es decir, entre septiembre de 2009 y marzo de 2010), y para el 23,7% se remontarían a un año atrás o más.

En conjunto, sólo un 13,1% sabía situar en el tiempo más o menos correctamente una noticia importante y reciente, quizá una de las más importantes en el transcurso de la crisis en España.

RESULTADOS PRINCIPALES DEL CAPÍTULO 4

(2009) SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA, EL GOBIERNO HA INFORMADO...	
■ A tiempo o se ha demorado un poco.	24,6
■ Tarde o muy tarde.	74,9
(2009) LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LA CRISIS HA SIDO...	
■ Muy o bastante completa.	14,9
■ Poco completa o muy incompleta.	80,5
(2009) EN TÉRMINOS GENERALES, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA TIENDEN A DAR LA INFORMACIÓN DE MANERA...	
■ Más bien objetiva.	23,9
■ Más bien poco objetiva.	69,3
(2010) LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE INFORMAN DE LA CRISIS DE MANERA...	
■ Más bien ordenada y clara.	28,4
■ Más bien desordenada y confusa.	68,1
(2010) A LA HORA DE INFORMARSE SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA...	
■ Tiene usted una idea bastante clara de los riesgos principales de la economía española y por eso se fija en dos o tres asuntos.	56,5
■ No sabe muy bien en qué temas fijarse para entender lo que ocurre.	40,1
MEDIA DE LAS ESTIMACIONES DEL NÚMERO DE PARADOS EN ESPAÑA, EN MILLONES (SÓLO LOS QUE CONTESTAN CON UNA CIFRA ABSOLUTA).	
■ 2009.	3,95
■ 2010.	4,07
(2010) ES LA PRIMERA NOTICIA QUE TIENE DE QUE LOS INVERSORES INTERNACIONALES DEJARON DE ADQUIRIR DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA EN UN DETERMINADO MOMENTO DE LA CRISIS, PENSANDO QUE EL ESTADO ESPAÑOL TENDRÍA DIFICULTADES MUY GRANDES PARA HACER FRENTE AL PAGO DE ESA DEUDA A CORTO PLAZO.	
	47,2
(2010) SITUÁ LA NOTICIA ANTERIOR EN SU MARCO TEMPORAL CORRECTO, ES DECIR, DE ABRIL A JUNIO DE 2010 (SÓLO ENTRE LOS QUE HABÍAN OÍDO HABLAR DE ELLA).	
	25,1

5

EL MARCO DEL DEBATE Y LAS
PREMISAS BÁSICAS: LA VISIÓN
DE LA ECONOMÍA DE MERCADO

LA VALIDEZ DEL SISTEMA ECONÓMICO DE MERCADO SE DA POR SUPUESTA

La discusión en el espacio público se suele fundamentar en ciertos supuestos básicos que permiten el proceso de debate y comunicación, pero no siempre lo hace, ni lo hace del todo. Puede ocurrir que ciertos segmentos de la población partan de unos supuestos radicalmente distintos a los del resto, o que la fragmentación ideológica sea tal que el debate sea imposible. Se asiste entonces a otra cosa que un debate: algunas veces, a un despliegue de fuerza o de poder desnudo de justificación o, con más frecuencia, a la exhibición de símbolos cuya función es la de identificar tribus distintas empeñadas en una lucha por el poder sin que el empeño requiera una dosis importante de persuasión razonable. Quienes tales cosas hacen, pueden pensar, por ejemplo, que basta con manipular algunas emociones, quizá inspirar confianza en uno mismo y desconfianza en el rival, o alimentar determinados temores; que esto traiga consigo la destrucción del espacio público y, llegado el caso, la de una democracia liberal o la de una economía de mercado, en nombre de una dictadura del proletariado o de un socialismo entendido en el sentido clásico, como implicando la socialización de los medios de producción y el paso a una

economía dirigida por el estado, es, entonces, bastante probable, salvo que se lleven a cabo esfuerzos morales y discursivos, y prácticos, de gran envergadura.

Estas situaciones de cuestionamiento radical del orden democrático y de la economía de mercado fueron frecuentes en los años treinta en Europa, España incluida, pero se han hecho más raras en los últimos decenios, y no parece ser el caso de España desde que la transición a la democracia coincidió con el descrédito de la alternativa a la economía de mercado, como podía ser una economía socialista en el sentido pleno, o clásico, de la expresión. Ello no significa que los términos de socialismo o planificación hayan perdido cierta relevancia, o no mantengan un cierto grado de aceptabilidad; pero son usados en sentido ligero, blando o borroso, para denotar correcciones que se consideran convenientes o incluso necesarias a, en este caso, un sistema de economía de mercado que, en lo fundamental, no se cuestiona.

Sin entrar a fondo en la exploración de esta cuestión, baste quizá con señalar que la mayoría de la población muestra una adhesión explícita a la economía de mercado, frente a su alternativa, si hemos de creer sus respuestas a una pregunta reiterada en la encuesta de 2009 y en la de 2010. En 2009, un 64,3% pensaba que es mejor una economía de mercado, frente a un 23,8% que creía que es mejor una economía dirigida por el gobierno. En 2010 los porcentajes respectivos eran casi los mismos, 62,5 y 24,9%, respectivamente. Grosso modo, casi dos tercios están a favor de la economía de mercado y en torno a un cuarto de la población prefiere una economía socialista.

No son porcentajes tan distintos de los que se obtienen en la sede por excelencia de la economía de mercado, Estados Unidos, cuyo público mostraba en 2009 un apoyo a la economía de mercado del 77% utilizando la misma pregunta.¹

La expresión “grosso modo” no se utiliza sin motivo, pues el tema merece una discusión más matizada en la que apenas podemos detenernos aquí. La aceptación de la economía de mercado, o del capitalismo, se hace con bastantes matices, no todos coherentes entre sí, lo que hace difícil entender el sentimiento popular en la materia, sobre todo si queremos entenderlo en su complejidad, y no manipularlo simplificándolo.

Según el marco espacial o temporal en que se planteen las preguntas, el juicio favorable a la economía de mercado admite ciertas variaciones. Por ejemplo, en la encuesta de 2010, un 74,5% de los encuestados cree que lo que más ha influido en la quintuplicación de la renta per cápita de los españoles en los últimos cincuenta años ha sido el desarrollo espontáneo del mercado español y el mercado internacional, mientras que sólo el 16,8% cree que ello se ha debido, sobre todo, a las políticas económicas de los gobiernos españoles (se entiende que predemocráticos y democráticos, de un signo u otro). En cambio, si la pregunta se plantea, como hicimos en la encuesta de 2009, en el marco de una problemática general sobre la pobreza, intemporal, *urbi et orbi*, la reacción es menos entusiasta, de modo que las opiniones favorables y contrarias presentan un equi-

¹ Véase “Topline - Free market economy - April 23-24, 2009”, disponible en www.rasmussen-reports.com.

libro distinto. Por una parte, un 43% estaría de acuerdo con la afirmación de que el capitalismo (o la economía de mercado, pues usamos una u otra expresión según la mitad de la muestra de la que se tratase) suele traer consigo la pobreza de la mayor parte de la población, mientras que un 50,2% estaría en desacuerdo. Por otra parte, el relativo equilibrio se rompe en contra de la economía de mercado, cuando observamos que un 36% estaría de acuerdo con que el capitalismo (o la economía de mercado) es el sistema económico que se ha mostrado más capaz de erradicar la pobreza en el mundo, mientras que un 59% estaría en desacuerdo.

LA IMPORTANCIA DEL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA DE MERCADO

Décadas de encuestas de opinión nos permiten afirmar que los españoles muestran cierta predilección por un estado activista e interventor. En nuestra encuesta de 2009, un 67,5% optó por la alternativa de que “el estado es responsable de todos los ciudadanos y debe ocuparse de aquellas personas que tienen problemas”, mientras que sólo un 19,4% de “libertarios” se inclinó por creer que “los ciudadanos son responsables de su propio bienestar y deben ser ellos mismos quienes se hagan cargo de la situación cuando tienen problemas”.

La pregunta es un poco tosca, cierto, pero nos permite comprobar cómo han ido cambiando las cosas en España, al menos en los últimos tiempos. Ya en 1986 el estatismo de los españoles parecía relativamente elevado: un 58% de ellos haría al estado responsable de todos los individuos y de ocuparse de todos aquellos con pro-

blemas, comparado con un 44% de franceses y un 26% de norteamericanos (ambos encuestados en 1985). Entre 1986 y 1994, varias encuestas españolas sugieren incluso un aumento de ese estatismo (en 1994 las respuestas estatistas alcanzarían el 72% del total).²

Entre 1998 y 2007, con encuestas del todo comparables, parece observarse cierta estabilidad de un sentimiento estatista dominante en la mitad de la población, y un sentimiento libertario prevalente en, aproximadamente, una cuarta parte, con el resto adoptando una posición indecisa entre unos y otros. Entre 2007 y 2009, sin embargo, se observaría un aumento sustancial del sentimiento estatista declarado de la población, que afectaría ya a los dos tercios de aquélla.

Por otra parte, las encuestas internacionales nos permiten situar el estatismo de los españoles en un marco comparado, revelándose su nivel como bastante alto en el conjunto de la Europa de los 27. Según datos de la 4ª ola de la Encuesta Social Europea, los españoles se situarían aproximadamente en el 5º puesto de un conjunto de 21 países de la UE27 a la hora de asignar responsabilidades al estado en las siguientes áreas: conseguir un trabajo para cada ciudadano, los cuidados sanitarios para los enfermos, el nivel de vida de los mayores o el de los desempleados, los servicios de guardería para los padres que trabajan y los permisos remunerados para cuidar a los familiares enfermos. Baste señalar, a título de ejemplo,

² Las fuentes de los datos son las siguientes. Los de España de 1985 y de Francia y Estados Unidos de 1986 proceden de Toharia (1989: 81). Los de 1994 son de la empresa Demoscopia (*El País*, 2-10-1994). Los de 1998 proceden de la encuesta ASP 98.013; los de 2007, de la encuesta ASP 07.044, los de 2009, de la encuesta ASP 09.047.

que respecto a todos y cada uno de los indicadores que acabamos de mencionar, España puntúa como considerablemente más estatista no sólo que Alemania o el Reino Unido, sino también que Francia, Suecia y Dinamarca.³

EL PAPEL DEL ESTADO EN LA FIJACIÓN DE LOS PRECIOS Y EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

Cabe complementar la evidencia anterior sobre el estatismo de los españoles con dos observaciones que ponen asimismo de relieve lo borroso de su visión de la economía de mercado, a la que juzgan, en cualquier caso, preferible a una economía dirigida por el estado.

Por una parte, la reacción, digamos, emocional a determinadas palabras relativas al modo de ordenar u ordenarse la economía sugiere cierta ambivalencia. En 2009, el 63,7% experimentaba, al parecer, sentimientos positivos cuando se hablaba del mercado, pero sólo al 31,5% le pasaba lo mismo cuando se hablaba del capitalismo. A su vez, el 75% tenía sentimientos positivos cuando se mencionaba la palabra “planificación”, lo mismo que le ocurría al 50% cuando se mentaba la palabra “socialismo”. Un indicio de la confusión emocional de los encuestados en lo que se refiere al eco que suscitan en ellos ciertas palabras lo ofrece que las palabras “capitalismo” y “socialismo” suscitaran idénticos sentimientos a un 38,9%, ya fueran positivos (15,7%) o negativos (23,2%). Casi parece coherente con este estado de indecisión semántica del público que la palabra “liberalismo” despertara sentimientos positivos en el 47,4% y negativos en el 41,3%.

³ Cálculos propios con el fichero de datos brutos de la Encuesta Social Europea, 4ª ronda.

Un cuadro de sentimientos similar ya se dibujó en 1996, en una encuesta presencial del CIS, según la cual la palabra “competencia” (no se preguntó por “mercado”) despertaba sentimientos positivos en el 70,2% de los encuestados; “capitalismo” lo hacía en el 31,4%; “planificación”, en el 69,6%; “socialismo” en el 50%; y “liberalismo” en el 53,1% (CIS 1996). Hay que tener en cuenta que la palabra “capitalismo” puede estar, por así decirlo, contaminada por una interpretación que lo asocie no tanto con un sistema económico cuanto con un grupo social constituido por los llamados “capitalistas”, vistos como gentes con especial acceso al poder u otros privilegios. Si esto fuera así, estaríamos ante una situación análoga a aquella a la que se refiere Luigi Zingales cuando contrasta *markets* y *business* (véase capítulo 1). Por otra parte, es curioso que la mayoritaria visión negativa del capitalismo parece compatible con una visión positiva no sólo de los mercados sino también de “la empresa privada”, expresión que despertaba sentimientos favorables en un 65,7% de los encuestados en 1996 y en un 61,4% en 2009.

Por otra parte, al precisar su pensamiento sobre estas cuestiones, el público añade detalles que sugieren la creencia de que el estado ha de intervenir casi de manera continua y ubicua en la economía de mercado. En la encuesta de 2009, por ejemplo, son mayoría los que entienden que el gobierno debe regular los precios de la electricidad (62,8%), la vivienda (57,5%) o la gasolina (55%), y no dejar que el mercado los establezca libremente. La mitad (49%) cree que también debería hacerlo respecto del teléfono, e incluso minorías considerables son favorables a dicha intervención estatal en los precios de los coches (31,2%) y los ordenadores (27%).

En buena medida, esas inclinaciones intervencionistas ya se daban en 1996, según la encuesta del CIS citada más arriba. Entonces, los partidarios de que el gobierno regulase los precios de la electricidad eran el 54%; los de regular los de la vivienda, el 49,1% y un 47,5% en el caso de la gasolina. Un 44,7% era partidario de regular los precios del teléfono.

Asimismo, son bastantes, incluso mayoría, los que en nuestra encuesta de 2009 prefieren que en la gestión de servicios de todo orden intervenga el estado, bien de manera principal, bien en comandita con la iniciativa privada. Así ocurre, especialmente, con la gestión de la asistencia sanitaria y los hospitales, pues un 71,7% la asignaría principalmente al estado y un 21,7% preferiría que interviniera tanto aquél como la iniciativa privada. Los porcentajes son muy similares para el caso de la enseñanza universitaria (67,1 y 24,6%, respectivamente). De todos modos, hay que tener en cuenta a este respecto que, como veremos más adelante, en el caso de la asistencia sanitaria y la enseñanza, no son pocos los que creen que la prestación estatal debería incluir fórmulas híbridas con un papel protagonista no del estado o el mercado, sino de la sociedad civil.

En menor medida, se prefiere algún tipo de gestión estatal de los ferrocarriles (con un 40,7% de partidarios de una gestión principal del estado y un 39,5% de una gestión estatal y de la iniciativa privada), de la banca (34,1 y 34,1%), el suministro de electricidad (40,2 y 18,6%), y la industria siderúrgica (22,5 y 37,3%).

Llama, por último, la atención que incluso en campos como la fabricación de automóviles, de la que el esta-

do español se retiró definitivamente a mediados de los ochenta, hasta un 15,4%, por así decirlo, reclame una gestión principalmente estatal y un 28% una gestión mixta.

De nuevo, la encuesta del CIS de 1996 reflejaba un panorama similar, lo que abunda en la permanencia de estas opiniones. Respecto de la asistencia sanitaria y los hospitales, un 61% prefería la gestión principal del estado, y un 22,9% la gestión mixta. En cuanto a la enseñanza universitaria, los porcentajes respectivos eran 59,7 y 24,5%. Y tampoco se observa un cuadro sustancialmente distinto en los ferrocarriles (47,3 y 24,7%), el suministro de electricidad (44,1 y 21,5%), y la industria siderúrgica (30,8 y 22,3%).

OTROS MATICES INTERESANTES: **A/** UNA ACTITUD PRO MERCADO, PERO DE SOSPECHA RESPECTO A "LA GRAN EMPRESA" Y "LOS RICOS"

La inclinación estatista convive, sin embargo, con una sospecha bastante extendida acerca de los favores que las clases acomodadas puedan recibir, impropriamente, del propio estado. Ésta es una línea de pensamiento interesante, que podría servir para consolidar una distinción parecida a la que proponen algunos tratadistas (Zingales, por ejemplo, al que ya hemos aludido) cuando contraponen *markets* y *business*, indicando que una cosa es favorecer los mercados abiertos y competitivos y otra favorecer los tratos de favor entre determinadas corporaciones empresariales y los círculos del estado. Estos tratos han sido habituales, por lo demás, en el estado español desde que tenemos conocimiento de su modo de funcionar en

el marco del capitalismo contemporáneo, desde mediados del siglo XIX, sin apenas interrupciones.

Se trata de una sospecha un poco gruesa, porque le fallan los detalles, aunque parezca avalada por una experiencia antigua. A ello puede responder, por ejemplo, que un 74,2% de los encuestados en 2009 esté de acuerdo con la idea de que “la gente acomodada recibe un trato fiscal claramente más favorable que el que recibe el ciudadano medio”, frente a un 16,8% que está en desacuerdo.

B/ NOSTALGIA POR UN SECTOR PÚBLICO EN EL QUE LA SOCIEDAD CIVIL TENGA UN PAPEL PROTAGONISTA

Otro aspecto, muy interesante, de la visión que tienen los españoles del sistema de la economía de mercado y de su aceptación con matices es el que parece surgir con ocasión de la respuesta a dos preguntas de la encuesta de 2010, que comprueban su inclinación por un modo de gestionar dos servicios sociales muy importantes, la enseñanza y la sanidad, que no se corresponde con los modos propios del estado o del mercado.

En relación con la enseñanza pública, un 65,7% cree que “sería una buena idea introducir la posibilidad de centros escolares gestionados por profesores independientes en colaboración con asociaciones de padres y madres de familia”, frente a un 27,7% que no lo cree así. En el caso de la sanidad pública, un 51,6% cree que “sería una buena idea introducir la posibilidad de que existan centros de salud y hospitales gestionados por profesionales independientes en colaboración con asociaciones

de consumidores” (entiéndase, “usuarios”), frente a un 40,5% que no lo cree así.

El tema es de gran importancia a la hora de configurar un sistema de servicios en el que se combinen de alguna forma estado, mercado y sociedad civil. No nos corresponde profundizar en él en esta ocasión, pero quede, al menos, apuntado.

FALLOS DEL CAPITALISMO O ABUSOS DEL CAPITALISMO

Tras explorar algunas de las premisas del debate público sobre asuntos económicos, retomemos el hilo argumental fijándonos en el dato fundamental de que, aun inmersos en una crisis económica muy profunda, la gran mayoría no cuestiona el sistema de economía de mercado. En cierto modo, ocurre, de nuevo, algo parecido a lo que ocurrió con ocasión de la gran crisis económica de la segunda mitad de los setenta del siglo XX, que vino a coincidir en España con la transición democrática. A saber, que la sociedad, en lugar de “aprovechar la ocasión” para cambiar el sistema, se aferró a él, plenamente consciente de que no tenía mejor alternativa.

Cuando decimos “la sociedad” queremos decir, precisamente, la sociedad de los ciudadanos corrientes. No fueron los aparatos políticos y sindicales, por ejemplo, los que moderaron a unas (supuestas) bases obreras radicales de la época y les hicieron acomodarse a la situación. Más bien ocurrió al contrario, que las clases trabajadoras, por activa y por pasiva, mediante sus actos y (también) mediante sus declaraciones explícitas en las encuestas

correspondientes de la época, dejaron claro que estaban dispuestas a una acomodación con el sistema de economía de mercado, a reserva de precisar los detalles (Pérez-Díaz 1979, 1980). Entre paréntesis, la concreción de los detalles, llevada a cabo por los sindicalistas, los representantes patronales, los expertos y los políticos de la época fue loable en algunos aspectos y deplorable en otros, como muestran las rigideces del mercado de trabajo que se mantienen hasta hoy.

Lo cierto es que la aceptación del sistema de economía de mercado se ve corroborada en las respuestas a una pregunta sobre la sustancia de la crisis económica actual. En la encuesta de 2010, sólo un 20,2% elige la opción de que la crisis actual refleja “graves fallos del capitalismo”, mientras que un 70,4% elige la de que refleja “graves fallos en el sistema de regulación y supervisión del capitalismo”. De todas formas, la interpretación de que estamos ante una situación de “abusos” más que de “fallos” queda abierta, pues cabe prolongar la reflexión (y las preguntas correspondientes) señalando que, para reducir los abusos o los fallos, puede hacer falta más regulación (esto es, más intervención estatal) o mejor regulación (posiblemente, con menos intervención estatal).

La distribución de las respuestas a dicha pregunta es paralela a la de otra pregunta relacionada con la anterior y que planteamos en 2009. El 35,6% pensaba que la crisis económica mundial era resultado del “fracaso” (cabe suponer, sistémico) del capitalismo, mientras que el 58,9% creía que había sido causada por “abusos” dentro del capitalismo. Es decir, la mayoría “salvaría” al sistema, admitiendo la necesidad de atajar sus problemas internos (los “abusos”).

Conviene tener en cuenta que la posición de los españoles parece, a este respecto, bastante semejante a la de otros ciudadanos de países occidentales. En una encuesta de octubre de 2008, mientras que el 62% de los españoles entendía la crisis como un resultado de los “abusos” del capitalismo (más que de sus “fallos”), así lo hacía un 66% de los norteamericanos, un 64% de los italianos o un 68% de los franceses (adoptando una posición más crítica, en cambio, los alemanes, entre los cuales sólo un 46% atribuía la crisis a tales abusos) (HarrisInteractive 2008a).

■ ¿DE QUIÉN SON LOS FALLOS? RESPONSABILIDADES EXTERNAS E INTERNAS DE LA CRISIS ECONÓMICA

La sociedad puede centrar su atención en la regulación y la supervisión del capitalismo, y por tanto en el papel desempeñado por los gobiernos, pero éstos no tienen por qué hacerlo, o no en un primer momento. No es raro que los gobiernos de los países cuyas economías se ven inmersas en una crisis tan profunda como la actual alienten, al menos una vez pasado un primer momento de negación de la crisis, en un segundo momento, una explicación de sus causas que enfatice los factores externos, como si éstos escaparan a su control. Esto sucede cuando los reguladores de un mercado culpan a los operadores, a los que, por lo demás, los primeros no han sabido regular ni supervisar, pero también cuando los gobiernos culpan a otros países o al entorno internacional. En el intento de limitar la posible responsabilidad gubernamental, cabe aludir, así, a fuerzas tan ajenas al control del gobierno como una crisis internacional devastadora, que llega, inmisericorde, a pesar de la buena marcha de

la economía nacional y de la buena gestión del gobierno de turno. El gobierno español se ha ajustado a ese patrón, una vez que, tras un tiempo relativamente largo de negación, acabó reconociendo la existencia y la gravedad de la crisis. Probablemente, una gran parte de la opinión pública aceptó un razonamiento tal durante un tiempo.

Es obvio que la crisis actual tiene un claro componente internacional, pero también lo es que sus muy diversas manifestaciones nacionales pueden deberse a errores o aciertos en las trayectorias locales seguidas en los últimos lustros o décadas. A medida que esas divergencias se han ido haciendo evidentes en España (lo peculiar de la crisis inmobiliaria, el ingente endeudamiento privado, lo abultado de la tasa de paro), el argumento que enfatiza las causas internacionales de la crisis ha ido perdiendo plausibilidad, y ganándola el que resalta el peso de los factores internos. A la altura de septiembre/octubre de 2009, en el momento de nuestra primera encuesta, estaba claro que la crisis española volvía a tener el rasgo distintivo, clarísimo, de la gran destrucción de empleo y el retorno a tasas de paro muy elevadas, a pesar, incluso, de que la recesión (la caída de la producción, medida con el PIB) no ha sido tan acusada como en otros países de la Unión Europea (véase capítulo 2).

Los discursos relativamente encontrados de gobierno y oposición (y otros actores), junto con los contundentes datos que cada mes producían los institutos estadísticos españoles e internacionales, habían acabado conformando una opinión mixta sobre las causas de la crisis, al menos tal como la medimos en nuestra encuesta de 2009. Un 39,3% de los encuestados creía que la crisis económica en España había sido, sobre todo, consecuencia de

la situación internacional, pero un porcentaje similar, del 35,1%, creía que lo había sido de problemas internos de la economía española, mientras que un 22,6% asignaba espontáneamente un peso similar a ambos factores. Estos juicios estaban bastante teñidos políticamente: el 54,8% de los votantes del PSOE en 2008 primaba la situación internacional al explicar la crisis, mientras que la imagen inversa, la de la primacía de las causas internas, era la opinión del 54,6% de los votantes del PP.

Esta opinión mixta se modulaba, sin embargo, al proyectarse sobre los factores de los que dependería la salida de la crisis, es decir, cuando la atención se desplazaba del problema de la imputación de responsabilidad por lo pasado al de qué hacer en el futuro. En este caso, para un 31,4%, la salida de la crisis iba a depender, sobre todo, de la evolución de la situación internacional, pero para el doble, un 63,4%, lo haría de la fuerza de nuestra economía. Este desplazamiento hacia los factores internos de la crisis a la hora de pensar en el futuro contagiaba a los propios votantes del PSOE, una mayoría de los cuales (54,6%) creía que la salida dependería de la fuerza de nuestra economía, y reforzaba aún más la tendencia de los votantes del PP a pensar de esa manera (74,1%).

RESULTADOS PRINCIPALES DEL CAPÍTULO 5

(2009) ES MEJOR...	
■ Una economía libre de mercado.	64,3
■ Una economía dirigida por el gobierno.	23,8
(2010) ES MEJOR...	
■ Una economía libre de mercado.	62,5
■ Una economía dirigida por el gobierno.	24,9
(2010) EN QUE LA RENTA PER CÁPITA DE LOS ESPAÑOLES SE HAYA MULTIPLICADO POR MÁS DE 5 EN LOS ÚLTIMOS CINCUENTA AÑOS, HAN INFLUIDO MÁS...	
■ Las políticas económicas de los gobiernos españoles.	16,8
■ El desarrollo espontáneo del mercado español y el mercado internacional.	74,5
(2009) ESTADO E INDIVIDUOS EN RELACIÓN CON EL BIENESTAR DE ÉSTOS:	
■ El estado es responsable de todos los ciudadanos y debe ocuparse de aquellas personas que tienen problemas.	67,5
■ Los ciudadanos son responsables de su propio bienestar, y deben ser ellos mismos quienes se hagan cargo de la situación cuando tienen problemas.	19,4
(2009) PREFERENCIAS SOBRE LA GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA Y LOS HOSPITALES.	
■ Principalmente por el estado.	71,7
■ Tanto por el estado como por la iniciativa privada.	21,7
■ Principalmente por la iniciativa privada.	6,2
(2009) PREFERENCIAS SOBRE LA GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.	
■ Principalmente por el estado.	67,1
■ Tanto por el estado como por la iniciativa privada.	24,6
■ Principalmente por la iniciativa privada.	7,9
(2009) MUY O BASTANTE DE ACUERDO CON: "LA GENTE ACOMODADA RECIBE UN TRATO FISCAL CLARAMENTE MÁS FAVORABLE QUE EL QUE RECIBE EL CIUDADANO MEDIO".	
	74,2
(2010) EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA SERÍA BUENA IDEA LA POSIBILIDAD DE QUE EXISTAN CENTROS ESCOLARES GESTIONADOS POR PROFESORES INDEPENDIENTES EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA.	
	65,7
(2010) EN LA SANIDAD PÚBLICA, SERÍA BUENA IDEA LA POSIBILIDAD DE QUE EXISTAN CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES GESTIONADOS POR PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.	
	51,6
(2009) LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL...	
■ Ha sido causada por abusos dentro del capitalismo.	58,9
■ Es resultado del fracaso del propio capitalismo.	35,6
(2009) LA SALIDA DE LA CRISIS VA A DEPENDER, SOBRE TODO, DE...	
■ La evolución de la situación internacional.	31,4
■ La fuerza de nuestra economía.	63,4

6

LA POLÍTICA ECONÓMICA
DESEABLE: ERRORES
POR RECONOCER Y
REPARACIONES POR HACER

A TORO PASADO, “TODOS HEMOS COMETIDO ERRORES” EN LA CRISIS INMOBILIARIA

Supuesto que estamos ante una crisis grave y larga, muy preocupante, pero que no parece cuestionar radicalmente el sistema económico, porque la atención se centra en lo que cabe hacer y se debe hacer en el ámbito nacional, profundizamos a continuación en la percepción que los españoles parecen tener de determinadas causas y mecanismos de los problemas con los que se encuentran, y de las medidas que pudieran resolverlos. Intentamos pasar de una lectura sincopada de la mente de las gentes, como el lugar donde se juntan, sin combinarse necesariamente, informaciones y pulsiones diversas, a una lectura algo más sistemática de aquélla, que permita entender cómo se va forjando el esbozo de una narrativa, un diagnóstico y el barrunto de una cura.

Asimismo, el análisis de cómo se enfrentan los encuestados a problemas diferenciados y concretos permite llevar a cabo un balance más complejo y, en cierto modo, más equilibrado de su actitud en general, y, sobre todo, rastrear un conjunto de razonamientos implícitos en las posiciones de los encuestados. Como se verá, algunos razonamientos se refieren a lo ocurrido en el pasado y

suenan razonables, y otros, a un futuro indefinido, y sue-
nan también correctos, con límites. Los relativos a qué
hacer en el presente parecen más dudosos.

Lo que no podemos conocer, sin investigaciones ulterio-
res, es el grado en que ese conjunto de observaciones
refleja consideraciones personales o repite, con un re-
ducido grado de reflexión personal, los lugares comu-
nes del debate público más familiares o accesibles. Es
posible, por ejemplo, que muchos ciudadanos utilicen
la heurística de su identificación con un determinado
partido, y que, por ello, hagan suyo el discurso habi-
tual de aquél, o la heurística de su identificación con un
segmento u otro de periodistas y expertos.¹ De hecho,
más adelante examinaremos el grado de confianza de
los españoles en el sistema de debate público y en sus
diversos protagonistas, y veremos que esa identificación
con unos u otros no es muy acusada. Por el momento,
examinaremos simplemente el contenido de las obser-
vaciones que hace el público sobre los acontecimientos
en curso.

Empecemos por lo más aparente y espectacular: la bur-
buja inmobiliaria (y del crédito). En la encuesta de 2009,
el público parecía hacer una lectura bastante realista de
las causas de la gran crisis inmobiliaria reciente, sin aho-
rrar críticas a los diferentes actores, comenzando, por así
decirlo, por la misma ciudadanía. Su conclusión, de pue-
blo humilde y arrepentido, sensato y sin caer en la tenta-
ción del victimismo, venía a ser: “todos hemos cometido
errores”.

¹ Sobre el tema general de las distintas heurísticas como instrumento individual de juicio en condiciones de incertidumbre, véase el clásico Tversky y Kahneman (1982).

En primer lugar, era amplísimo el consenso acerca de los posibles errores de previsión de quienes adquirieron viviendas como un bien de inversión. Nada menos que un 90,9% estaba muy (68,0%) o bastante (22,9%) de acuerdo con el razonamiento de que mucha gente adquirió una vivienda como inversión pensando que su precio sólo podía subir.

En segundo lugar, una opinión muy mayoritaria asignaba alguna responsabilidad a algunos de los actores protagonistas de la crisis inmobiliaria, los bancos y cajas, que habían concedido en pocos años un montante de créditos desconocido en la historia económica española. Un 83,4% estaba muy (61,1%) o bastante de acuerdo (22,3%) con la idea de que los bancos y las cajas habían dado muchos créditos hipotecarios imprudentemente.

En tercer lugar, el acuerdo era también muy grande con respecto a otro de los incentivos principales para el auge de la compra de viviendas en los últimos años, los bajos tipos de interés, cuyos responsables son, en buena medida, los bancos centrales. Un 70,3% estaba muy (36,6%) o bastante (33,7%) de acuerdo con el argumento de que la gente se había endeudado demasiado porque los tipos de interés hipotecarios habían sido muy bajos (tan sólo un 28,3% está en desacuerdo).

Por último, y abundando en el tema de las responsabilidades de las autoridades públicas, un 56,6% se mostraba muy (20,1%) o bastante (36,5%) de acuerdo con la idea de que las deducciones fiscales, responsabilidad del gobierno y el parlamento, habían impulsado en exceso la compra de viviendas; si bien, en este caso, un 39,6% se mostraba en desacuerdo con esa afirmación.

SALVAR IMPERATIVA Y URGENTEMENTE EL SISTEMA FINANCIERO, O NO

En la encuesta de 2009 eran tantos quienes estaban de acuerdo (48,4%) como quienes mostraban su desacuerdo (49,1%) con la frase siguiente: “es responsabilidad del gobierno intervenir y salvar las instituciones financieras en dificultades, tales como bancos”. Lo cual significa que la medida reina de las políticas inmediatas de solución de la crisis de prácticamente todos los gobiernos del mundo, en aquel momento incluido el español con la anuencia de los principales partidos, la veía la opinión pública con sentimientos mezclados. Esta actitud de duda parecía persistente. En marzo de 2008, con la misma formulación de la pregunta, una muestra *online* de residentes en España de 16 a 64 años había reflejado niveles de acuerdo y desacuerdo muy similares (50 y 50%, respectivamente). Se trataba, y se trata, de una reacción que comparten gentes de todas las categorías socioeconómicas, con rasgos culturales y afiliaciones políticas distintas. Tampoco es privativa de España, cuyos datos no se distinguen sustancialmente de los de Estados Unidos y otros países europeos.²

De hecho, según la encuesta de 2009, se dudaba no sólo de que el gobierno debiera intervenir y salvar las entidades financieras, sino también de la eficacia de esa intervención, y se dudaba, asimismo, de la capacidad de los protagonistas y los destinatarios de esta medida. Una mayoría clara de entrevistados (57,2%) no creía que las

² En marzo de 2008, estaba de acuerdo con la frase comentada el 38% en Italia, el 40% en el Reino Unido, el 40% en Alemania, el 51% en Estados Unidos y el 53% en Francia (HarrisInteractive 2008b).

inyecciones de dinero público en bancos o cajas sirvieran realmente para sanear esas entidades; aunque sí lo consideraba así una minoría significativa del 38%. Probablemente, aquella reticencia genérica y esta duda sobre la eficacia de la medida afectaban a la credibilidad de las instituciones financieras implicadas en estas operaciones de salvamento.

Por su parte, la confianza en la competencia de los directores de los bancos y las cajas de ahorros para hacer frente a la crisis financiera en España recibía, en una escala del 1 ("mínima confianza") al 5 ("máxima confianza"), una calificación media baja, del 2,2, claramente en la zona del suspenso, mientras que la confianza en la competencia del Banco de España para la misma tarea recibía una calificación media de 2,9, si bien, como veremos, la encuesta de 2010 sugiere que la actitud del público es todavía más crítica con esa institución.

■ POLÍTICAS DE ESTÍMULO A LA DEMANDA

Transcurrido un año desde entonces, y en plena discusión sobre los efectos reales que han podido tener las inyecciones masivas de fondos públicos en el sistema económico internacional, se dibuja un debate entre quienes creen que dichas aportaciones públicas han sido adecuadas, o incluso se han quedado cortas, porque las ven precisas (o insuficientes incluso) para mantener el ritmo adecuado de actividad económica, y quienes las juzgan exageradas, porque les preocupa el volumen de deuda y de déficit público que están generando. A su vez, los unos y los otros tratan de sustentar sus propuestas en una coyuntura que por ahora muestra signos equívocos, lo que tiene al esta-

blishment y a la sociedad expectantes. Ello está obligando a los políticos y los expertos a un ejercicio, curiosísimo, de lo que podríamos llamar la tardomodernidad, es decir, a aplicar sus saberes expertos, pero, a la vez, recurrir a las artes divinatorias de la antigüedad: los horóscopos, la observación del vuelo de las aves, las actuaciones rituales hechas con el debido espíritu religioso, en su acepción romana, es decir, escrupuloso en las formas, en los encuentros internacionales de rigor, el cuidado con los gestos y los tonos de voz y la buena orquestación de la propaganda de rigor, que inspiran confianza.

Mientras los debates continúan, y la atención de las elites se centra en salvar el sistema financiero y en hablar de la necesaria consolidación fiscal, el crédito que fluye del sistema financiero a la economía real no acaba de levantar cabeza, y da la impresión de que las medidas de consolidación fiscal sólo se han implementado en parte, sin que sus frutos sean evidentes.

En la encuesta de 2010 incluimos varias preguntas sobre la cuestión de la escasez del crédito. Por lo pronto, una mayoría amplísima de los encuestados, un 77,8%, no cree que bancos y cajas estén dando una cantidad suficiente de créditos a las familias y a las empresas, mientras que sólo un 13,8% piensa que sí los están dando.

A los que creen que las entidades financieras no dan suficientes créditos les ofrecimos cinco posibles razones de ese comportamiento, para que eligieran la que explicaba mejor la insuficiencia de los créditos y la segunda en orden de importancia. Recogemos aquí las primeras respuestas, pues marcan más claramente las orientaciones básicas de la opinión sobre esta cuestión. La mayor parte

se inclina, digamos, por censurar el desinterés de las instituciones financieras, bien porque no tengan entre sus prioridades más destacadas la de dar créditos a familias y empresas (razón mencionada por un 32%), bien porque son demasiado prudentes con los créditos a unas y a otras (31,9%).

Muy en segundo lugar se sitúan las razones que apuntarían a que las entidades financieras responden, más bien, a los estímulos de las autoridades públicas: un 13% cree que dedican demasiados recursos a fusionarse con otros bancos y cajas en crisis (algo, añadimos nosotros, a lo que les han empujado, claramente, las autoridades monetarias), un 9,4% piensa que dedican demasiados recursos a financiar al estado español comprando deuda pública (algo que igualmente responde a una presión lógica del gobierno), y un 7,4% piensa que, en general, el estado no incentiva lo suficiente a bancos y cajas para que den créditos.

Así pues, tres quintos piensan que los bancos y las cajas son las instituciones responsables por antonomasia, quizá otro quinto repartiría la responsabilidad entre ellos y el gobierno (por las operaciones de fusiones y la compra de deuda pública), y uno de cada catorce identifica al gobierno como principal responsable directo de la situación.

Parece lógico que, en estas condiciones, y sobre la base de una percepción tal de la situación, la mitad del público (un 49,8%) crea que la regulación de las entidades y los mercados financieros debería ser más estricta que la que se hace de los mercados de productos y servicios, imaginando tal vez que es esa regulación estatal más estricta lo

que traería consigo un aumento del flujo de los créditos hacia las familias y las empresas (o esperando, tal vez, que, con una regulación más estricta que la del resto, se den menos crisis financieras); frente a un 28,9% que piensa lo contrario.

NECESIDAD DE UNA CONSOLIDACIÓN FISCAL, DUDAS SOBRE LA REDUCCIÓN DEL GASTO Y DÉBILES DESEOS DE PAGAR IMPUESTOS

Se suele pensar que la mayoría de la opinión pública española tiende a rechazar subidas de impuestos, incluso en el caso de que en las encuestas (o los programas partidistas) se ofrezca como contrapartida un aumento o una mejora de las prestaciones o servicios ofrecidos por la administración. Evidentemente, esto no puede ser del todo cierto, pues si lo fuera no habría manera de explicar el aumento extraordinario de la carga fiscal que ha coincidido con la democracia liberal, la expansión del sistema de bienestar y el crecimiento del empleo en el sector público durante las últimas tres décadas.

En todo caso, en un contexto de crisis económica, y con un déficit público galopante, podría ser plausible un argumento favorable a subir los impuestos como medio no ya de dar nuevos servicios públicos, sino, simplemente, de salvar el sistema económico de la ruina, empezando por equilibrar las cuentas públicas, que así dejarían de acumular deuda y de detraer fondos que podrían destinarse a la inversión privada. A ello se añade el argumento de que, en cualquier caso, precisamente en tiempos de crisis, conviene mantener el colchón social para las familias más afectadas por la caída del empleo, lo cual,

ante la caída en la recaudación por efecto de la recesión económica, implica aumentar los tipos impositivos. Ambos argumentos los ha ensayado el gobierno español, y otros partícipes en la discusión, y a ellos se han resistido bastantes de los partidos de oposición. Así pues, los españoles han asistido muy de cerca a este debate, planteado no en términos genéricos, sino en circunstancias muy concretas.

De todos modos, si, como es el caso, el público carece de entusiasmo por salvar el sistema financiero con dinero público, y si, además, implícitamente se niega a complementar las cotizaciones a la Seguridad Social con otros impuestos, pues la mayoría no quiere reducirlas, entonces es lógico que no se vea como necesario un incremento sustancial de los ingresos impositivos del estado. Todo ello, junto con la proclividad natural de los contribuyentes a pagar lo menos posible y quizá el añadido emocional de una falta de confianza en la clase política (véase más adelante), puede ayudar a explicar que, en la encuesta de 2009, una amplia mayoría (64,5%) creyera que, en la situación de crisis actual, convenía más bajar los impuestos que subirlos, frente a un 18,1% que pensaba que convendría subirlos, y un 13,4% que los mantendría en su nivel actual. Es llamativo que esa opinión tiende a trascender, al menos parcialmente, los alineamientos partidistas, pues incluso entre los votantes del PSOE eran mayoría (un 51,5%) los partidarios de bajar los impuestos.

En la encuesta de 2010 ahondamos más en el tema con nuevas preguntas. Por lo pronto, en una amplia mayoría del público parece haber calado la idea de que es prioritario que el gobierno reduzca el déficit público: un

75,5% lo cree así, mientras que un 16,8% disiente de ello. Sin embargo, a la hora de precisar la forma de reducirlo, el público, por regla general, parece encontrar una sola manera de hacerlo, la de reducir el gasto de personal en la administración central, las comunidades autónomas y los municipios. Un 71,3% de los encuestados está de acuerdo con esa medida, mientras que un 26,8% está en desacuerdo. En cambio, son amplias las mayorías que no ven razón suficiente para reducir la inversión pública en infraestructuras (un 62,6% en contra de reducirla, frente a un 34,9% a favor), o el gasto social (un 70,8% en contra de reducirlo, frente al 28,8% a favor).

Por último, queda de nuevo claro el rechazo al aumento de los impuestos aun planteado como medida para reducir el déficit público (un 78,9% está en contra de subirlos, frente al 20,4% que sí es partidario de hacerlo). Da la impresión de que la resistencia al aumento de la fiscalidad se mantiene al mismo nivel, muy alto, de 2009, representando a más de tres cuartas partes del público, aunque no sabemos si ha cambiado el reparto entre quienes quieren bajarlos o sólo mantenerlos. (No hicimos esta pregunta adicional, por lo que sólo cabe especular sobre la cuestión; en todo caso, los políticos partidarios de subir los impuestos siempre pueden acariciar la idea de que tal vez la proporción de quienes quieren sólo mantenerlos haya aumentado respecto de quienes quieren reducirlos, y eso les permita a ellos subirlos.)

■ LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL

Como ya hemos señalado antes, los españoles parecían tener en 2010 una idea grosso modo correcta de la mag-

nitud del paro, aunque la estimación media de la magnitud del paro no parece haber cambiado mucho en el año transcurrido desde la encuesta de 2009. La cifra de los 4 millones de desempleados como referencia principal puede reflejar una cierta fijación del público con una cifra redonda o que el público recuerde mejor la cifra publicada por los Servicios Públicos de Empleo, pues su presencia mediática es mensual, y lleva bastantes meses rondando, precisamente, los 4 millones.

Es posible que esta cierta inercia mental tenga alguna relación con un razonamiento dificultoso sobre la materia a la hora de participar en un debate sobre unos cambios que hagan más flexible la regulación del mercado de trabajo, cuya rigidez tiene que ver tanto con la abultada cifra de paro en cuestión como con la resistencia de ésta a descender.

Las respuestas de los encuestados en 2009 a varias preguntas sobre el mercado laboral y su reforma sugieren que la mayoría del público no acaba de percibir una conexión fuerte entre la reforma laboral y la recuperación del empleo. Quizá por ello la mayoría no acababa de convencerse de la eficacia de un posible pacto social, el núcleo de cuyo contenido era, en principio, un acuerdo sobre reforma laboral.

En realidad, tan sólo un 56,5% de los entrevistados en 2009 había oído hablar del pacto social que, supuestamente “contra la crisis”, estaban negociando entonces, a trancas y barrancas, los sindicatos, las asociaciones de empresarios y el gobierno. Entre los que sí tenían noticia de dicho pacto, la opinión estaba muy dividida acerca de su conclusión: un 44,5% creía que acabaría firmándose

(probablemente, un 37,1%; con seguridad, un 7,4%), y un 48,3% creía que no se firmaría nunca (probablemente, un 29,4%, con seguridad un 18,9%). Pero, a su vez, los que sí creían en que se firmaría albergaban bastantes dudas acerca de su eficacia: al estimar la contribución del pacto a reducir la tasa de paro en una escala del 1 ("no ayudará nada") al 5 ("ayudará mucho"), la media que se obtenía era la de un modesto 3,1 (con un 51,1% de encuestados optando por el nivel 3).

Dos medidas favorecedoras del empleo que se suelen discutir en España en tiempos de crisis y que pueden ser objeto de acuerdo, o no, en un pacto social son la reducción de las cuotas de la Seguridad Social a las empresas y el recorte de los costes del despido de los futuros trabajadores. Los empresarios y los expertos económicos suelen enfatizar que esas medidas favorecen el empleo a medio y largo plazo, porque abaratan la contratación del factor trabajo. Los sindicatos suelen oponerse al recorte de cuotas en aras de la viabilidad del sistema de pensiones públicas (sin atender a la posibilidad de mantenerlo por otras vías, como, por ejemplo, con cargo al presupuesto del estado) y al abaratamiento de los despidos, porque los facilite justo cuando el empleo cae intensamente. Que esta discusión dure ya algunas décadas y apenas se haya traducido en políticas concretas (a falta de comprobar los efectos de la reforma laboral recientemente promulgada por las Cortes) nos alerta de las resistencias que han encontrado los promotores de estas medidas en tiempos de crisis, y de lo fácil que es olvidarse de ellas en tiempos de bonanza. De todos modos, el desarrollo de una discusión semejante depende de un marco argumentativo complejo, que no se ve favorecido por la simplificación del debate político partidista ni por su tendencia a concen-

trar la atención en la solución de los problemas a corto plazo. Esto repercute en la calidad de la discusión y, a la larga, en cómo el público entienda los problemas, porque cuanto menos se entienda la experiencia económica como un proceso que se desarrolla en el tiempo,³ menos se apreciará la importancia de medidas de política laboral como las citadas para la creación de empleo a medio y largo plazo.

Con todo, es interesante observar que el público adopta posiciones algo diferentes respecto de una y otra medida, tal vez porque esté condicionado por su posición política en grados distintos. El de las cotizaciones sociales fue uno de los temas más contenciosos entre el gobierno (y el PSOE) y la patronal en las negociaciones del pacto social, resistiéndose el primero a aceptar cualquier reducción de aquéllas, mientras que el PP llegó a abogar por recortarlas en dos puntos porcentuales. En el caso de los encuestados de 2009, si bien un 52,3% se oponía a reducir las cuotas a la Seguridad Social, hasta un 44,5% estaría de acuerdo, un porcentaje que se quedaba en el 37,1% de votantes del PSOE, pero ascendía al 60,2% de los del PP.

En cambio, aunque el PSOE utilizó, durante un tiempo, el abaratamiento del despido de nuevos trabajadores como arma arrojadiza contra el PP, los líderes de este partido se guardaron de hacer declaraciones que pudieran interpretarse como favorables a dicho abaratamiento. En este caso, la medida para combatir el paro de abaratar la contratación de futuros trabajadores reduciendo los costes del despido encontraba un rechazo amplio, del 75,5%,

³ Esta temática está desarrollada en O'Driscoll y Rizzo (1996).

y un apoyo modesto, del 22,2% (mínimo entre los votantes del PSOE, 15,6%, y algo mayor entre los del PP, 36,0%).

En la encuesta de 2010 hemos complementado nuestra información sobre las actitudes del público hacia la reforma laboral atendiendo a otro aspecto, también muy importante, el de la flexibilidad de la negociación colectiva. De nuevo nos encontramos con una actitud de resistencia a cambios que conllevaran una mayor flexibilidad en los salarios y las condiciones de trabajo en atención a la singularidad de cada empresa. Un 68% prefiere que la negociación busque unas condiciones de trabajo y unos salarios iguales o muy parecidos para todos los trabajadores de un mismo sector, mientras que sólo un 27,4% prefiere la opción de que la negociación adapte lo más posible las condiciones de trabajo y los salarios a las características de la empresa.

Es llamativo que estas notables resistencias a la reforma del mercado laboral coincidan con un cierto optimismo en lo concerniente a lo que se tardará en recuperar una tasa de paro del 11%, baja para los estándares españoles de las últimas décadas pero inaceptable en la mayoría de los países avanzados. El público tiende a pensar que se tardará, pero no tanto como es lógico prever a la vista de la experiencia pasada. Ya hemos visto cómo se espera que se tarde una media de 4,8 años en alcanzar dicho objetivo, a pesar de que la experiencia pasada sugiere que se tardará entre seis y trece años.

Una dosis todavía mayor de optimismo se observa en lo relativo a cómo prevén los encuestados que se adapten los trabajadores en general, y los jóvenes parados en par-

ticular, a la situación de crisis del empleo. Por una parte, en la encuesta de 2009, un 78,8% creía que, en las circunstancias actuales, los trabajadores estaban intentando mejorar su formación, bien para mantener su puesto de trabajo, bien para conseguir empleo más fácilmente; y sólo un 18,8% creía que no ocurría así. En realidad, según la EPA, los activos que estaban cursando algún tipo de formación (reglada o no) en el segundo trimestre de 2009 eran un 13,8%, un porcentaje casi indistinguible del que los cursaba en el 2º trimestre de 2008 (un 14,1%) o en el 2º trimestre de 2007 (un 14,2%) y tampoco muy distinto del porcentaje equivalente para el 2º trimestre de 2010 (13,9%). Todo lo cual sugiere que los trabajadores españoles no se aplican más en su formación aunque vivamos una crisis económica. Lo que sí ha ocurrido es que son algunos más los jóvenes que optan por permanecer en el sistema educativo, bien por convencimiento de estar haciendo una inversión en su capital humano, bien por la reducción drástica del atractivo del mercado de trabajo para ellos. Así, por ejemplo, si en el 2º trimestre de 2008 cursaba algún tipo de estudios el 76,8% de los de 16 a 19 años, en la fecha equivalente de 2010 lo hace un 82,4%, y el porcentaje también ha aumentado para los de 20 a 24 (de 44 a 48,3%).⁴

Por otra parte, en la encuesta de 2010, un 71,9% cree que lo más probable es que los jóvenes sin trabajo se dispongan a buscar trabajo en otra provincia, mientras que un 21,9% cree que más bien esperarán a encontrar trabajo en la provincia en la que residen. En realidad, lo sucedido durante los últimos treinta años ha sido, más bien, lo contrario.

⁴ Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa.

En cambio, los españoles parecen recuperar su sentido de la realidad cuando consideran el caso de los trabajadores mayores, pues escasamente un 5% cree que es más probable que los trabajadores mayores de 55 años vuelvan a encontrar trabajo en su gran mayoría, mientras que una abrumadora mayoría del 93,9% cree que es más probable que sólo una minoría lo encuentre. Al parecer, la gran mayoría considera a este segmento de población, en el fondo, como amortizado. Tal vez se ha acostumbrado a verlo así, y no se siente demasiado afectado personalmente por ello; tal vez le influye el discurso de las elites del país, que suelen usar mucho del lenguaje de la renovación (de inventar tradiciones, de reinventarse uno a sí mismo, por ejemplo).

Quizá en esta lectura un poco ligera de lo que les ocurra a los jóvenes o a los mayores influye, en el fondo, una mentalidad dominante entre quienes componen el núcleo de los trabajadores españoles, esto es, de gentes agarradas, por así decirlo, a sus puestos fijos, y tanto más en momentos de dificultad, lo cual se transmite al resto de la familia y contagia, en cierta forma, a todas las generaciones.

Que sea así puede ser corroborado, al menos parcialmente, por otro indicio acerca de los rasgos prevalentes en la actitud de los españoles respecto a su entorno, y que apunta a su obsesión por la seguridad, lo que les distingue de bastantes europeos. En la encuesta de 2010 leímos al encuestado una descripción de un tipo de persona y le preguntamos en qué medida se parecía a él o a ella. La descripción decía: "Para esa persona es importante vivir en un entorno seguro. Evita cualquier cosa que pueda poner en peligro su seguridad". En un 81,1% de los ca-

sos, los encuestados pensaron que esa persona se parecía mucho (53,5%) o algo (27,6%) a ellos, y sólo un 17,8% pensó que se les parecía poco (13%) o nada (4,8%).

Esa pregunta procedía de una muy similar utilizada en distintas olas de la Encuesta Social Europea, que nos permite situar a los españoles en el marco de los países de la UE. Con datos de la 4ª ola de dicha encuesta, correspondiente a 2008/09, si ordenamos a los 21 países de la UE con datos según el porcentaje que responde “se parece mucho a mí”, España queda situada en el 6º puesto (con un 39,7%), por detrás de Grecia (52,5%), Chipre (50,2%), Letonia (46,6%), Hungría (46,5%) y Eslovaquia (40,8%), y se encuentra muy alejada de las posiciones inferiores, ocupadas por varios países nórdicos (Suecia, 6,8%; Dinamarca, 15,7% y Finlandia, 17,8%), y los Países Bajos.⁵

EL DISCURSO DEL CAMBIO DEL MODELO DE CRECIMIENTO ESPAÑOL

La relativa inercia en el pensamiento y en los actos de la sociedad española que cabe observar a la hora de abordar el tema del excesivo tamaño del sector de la construcción, la política financiera, la consolidación fiscal o la reforma laboral se modifica en cierta medida al encarar el tema del cambio del modelo de crecimiento.

Existe en España un antiguo discurso que, sin apenas solución de continuidad, ha recorrido el debate público de los últimos cincuenta años, antes y después de la tran-

⁵ Fuente: elaboración propia con el fichero de datos brutos de la Encuesta Social Europea, 4ª ronda.

sición democrática, y que se puso ya de relieve a propósito de los planes de desarrollo de los años sesenta. Reflejaba la insatisfacción de muchos con un modelo de desarrollo basado en el turismo, la construcción y una oferta de productos y servicios que trataban de competir en precios, y no en calidad, con los de otros países. El discurso enfatizaba la necesidad de contar con un tejido industrial, o empresarial en general, de cierto calado, de apostar por la investigación y por la formación profesional, y por un sector exterior menos basado en lo obvio, los ingresos por turismo y (en su momento) las remesas de emigrantes, y más en una economía exportadora de cierta calidad. Como el Guadiana, este discurso ha aparecido, desaparecido y reaparecido varias veces en la trayectoria española del último medio siglo.

En los últimos años, tal vez la última década, ha resurgido aparentemente con más ímpetu. El contexto de una situación de crisis como la actual ha provocado un aumento en la velocidad de circulación de este lugar común, algo así como un sobresalto de nostalgia acerca de ese nuevo modelo de crecimiento, tantas veces mentado, y soñado, e incluso objeto de tantos esfuerzos aquí y allí, pero que todavía no ha acabado de cuajar. El ejemplo de los países escandinavos, por ejemplo, o de Holanda, o la propia Alemania, que parecen sortear la crisis con más éxito que otros, y que encarnarían ese modelo, recuerdan a los españoles lo que habría debido ser, quizá, pero nunca fue, de modo que la política estructural correspondiente sigue ahí como una "asignatura pendiente".

En la encuesta de 2009 formulamos una batería de preguntas relacionadas directa o indirectamente con la deseabilidad de ese modelo de crecimiento basado en la

tecnología alta y media-alta, la investigación (y el desarrollo y la innovación, como se suele decir) y la educación, a lo que añadimos el elemento de una mayor atención al problema de la dependencia energética, un problema que está asociado en el debate público, también, con la idea de un modelo de crecimiento más sofisticado que el actual, al menos en el sentido de más atento al equilibrio de su sector exterior.

Al parecer, el discurso ha calado en el imaginario y el argumentario del público. A la altura del otoño de 2009, un 91,4% de los encuestados afirmaba estar muy (59,1%) o bastante (32,3%) de acuerdo con que el peso del sector de la construcción en España había sido excesivo en la última década (con sólo un 7,6% en desacuerdo), lo que, prima facie, parecería coherente con que echaran de menos una estructura productiva distinta de la actual, una en la que fuera, por ejemplo, más relevante la producción de bienes de tecnología alta o media-alta. De hecho, los encuestados eran muy conscientes de que la actual no tiene esas características, tal como lo declaraba el 64,7% que estaba muy (24,2%) o bastante (40,5%) de acuerdo con la idea de que el peso de la industria de alta tecnología en España había sido bajo en la última década (aunque no lo creía así un 28,9%). Ello es coherente, a su vez, con que los encuestados creyeran que el esfuerzo que se había hecho en lo relativo al desarrollo de la ciencia o la innovación tecnológica en España había sido modesto; lo que se deducía de que un 72,8% estuviera poco (47,5%) o nada (25,3%) de acuerdo con que el nivel de la inversión en investigación y desarrollo hubiera sido suficiente. Finalmente, aunque, en general, el interés por cuestiones energéticas y medioambientales de los españoles es bastante bajo (Pérez-Díaz y Rodríguez 2008: 77-81), en dos tercios de los encuestados

(65,8%) parecía haber calado la idea de que la dependencia energética de España respecto al exterior era alta (muy alta, un 26,7%; bastante alta, un 39,1%).

De hecho, una estructura productiva con un peso mayor de sectores con un componente de tecnología alta y media-alta, y un mayor cuidado con el así llamado menú energético es lo que caracteriza a los países europeos que los españoles parecen considerar como modelos, de acuerdo con sus declaraciones en la encuesta de 2009. En ella, requerimos de los encuestados la elección espontánea de un país que pudiera ser un modelo para la economía española, y, aunque fueron bastantes, un 25,5%, los que no contestaron a esta pregunta, el resto parecía tener las cosas relativamente claras. Alemania (31,1%), Francia (11,9%) y Suecia (6,1%) recibían la mitad de los sufragios (49,1%). En Europa, otros países escandinavos, el Reino Unido, Suiza y Holanda recibían un porcentaje apreciable de votos; a los que cabía añadir un 5,2% que veía a Estados Unidos como modelo. El carácter modélico de los países de Europa Occidental era obvio, y, en un sentido geográfico, están próximos, pero, en otro sentido, quizá no están tan cerca. Para comprobarlo preguntamos a los encuestados por una comparación del nivel educativo de su país modélico con el de los españoles.

Abrumadoramente, un 82,1% de los que habían citado algún país contestó que el nivel educativo medio de los españoles era inferior al de los habitantes de ese país (sólo un 3,0% lo consideró superior, y el 13% lo veía similar). Pero lo más interesante es que, al estimar los que consideraban el nivel educativo español como inferior el número de años que necesitaría España para que su nivel educativo medio alcanzase el del país modelo, la media obtenida

fue de 13 años, y la mediana de 10. Es decir, según ellos, habría entre esos países y España una distancia temporal de cierta importancia, y España llevaría al menos una década de retraso respecto del nivel educativo de los países que cabe imitar y tienen un nivel educativo superior. Resalta el punto de coherencia y de realismo en la narrativa de los encuestados: es coherente postular lo deseable de un modelo productivo distinto y la elección de los países a imitar; y es realista comprobar que para imitarles hace falta un serio esfuerzo educativo prolongado en el tiempo.

En la encuesta de 2010 hemos prolongado esta discusión. De nuevo, una gran mayoría, el 85,4%, está de acuerdo con que España haga un gran esfuerzo en los próximos años para mejorar su capacidad de fabricar productos de alta tecnología, frente a un 12,4% en desacuerdo. Incluso eran muchísimos, el 73,3%, los que creían que si se llevaba a cabo ese esfuerzo, la fabricación de ese tipo de productos podía crecer mucho o bastante en diez años.

Sin embargo, hay que ver este optimismo con cierta cautela. Planteada una cuestión acerca de la probabilidad de que se hiciera efectivamente ese esfuerzo, aun cuando la mitad, un 51,3%, opta por la afirmación de que “en momentos de crisis hay más motivación y más capacidad de decisión para invertir en innovación y tecnología, y es más probable que se haga esa inversión”, casi la otra mitad, el 43,4%, opta por la proposición de que “es poco realista pensar que si no lo hemos hecho [invertir en innovación y tecnología] en momentos de crecimiento económico, lo vayamos a hacer en estos momentos de crisis”.

Finalmente, puestos a imaginar cuáles serían las medidas más adecuadas para alcanzar el objetivo del crecimiento

de la fabricación de productos de alta tecnología, se observaba lo siguiente. Del conjunto de medidas propuestas a los entrevistados, las dos más mencionadas en primer lugar fueron la de mejorar la educación universitaria (citada por un 33,3%), una tarea, por tanto, de cierto recorrido temporal, y la de aumentar el gasto público en investigación y desarrollo (32%), que puede estar cayendo con la crisis. A bastante distancia eligen medidas relativamente precisas y de posible impacto inmediato, tales como los incentivos fiscales a multinacionales extranjeras de alta tecnología para que se instalen en España (16,7%), o los incentivos a investigadores extranjeros o españoles residentes fuera para que se instalen en España (13,9%).

Obsérvese que estos incentivos están relacionados con una intensificación de las relaciones del país con el exterior. Quizá sea ésta una dimensión descuidada en la lectura de la vida económica de los españoles. En realidad, cuando se les plantea una pregunta sobre la política comercial, los españoles parecen entonces proclives a apoyar una política proteccionista de los productos españoles frente a la competencia de los de otros países de la Unión Europea. Esto es lo que pensaba en 2009 el 79,7% de los encuestados (con un 19,3% en contra), un porcentaje muy parecido al de 1994 (87,8%; CIRES 1994). Esta posición es incoherente no sólo con la propia experiencia de los españoles desde el ingreso en las Comunidades Europeas en 1986, sino también con sus ideas sobre lo que pueda ser un nuevo modelo productivo y, por supuesto, con la experiencia de los países que los españoles toman como modelos, y que, en su gran mayoría lo son porque son economías muy abiertas o bastante abiertas al exterior.

RESULTADOS PRINCIPALES DEL CAPÍTULO 6

(2009) MUY O BASTANTE DE ACUERDO CON FRASES RELATIVAS AL *BOOM* INMOBILIARIO.

■ "Mucha gente se ha comprado una vivienda como inversión pensando que su precio sólo podía subir".	90,9
■ "Los bancos y las cajas han dado muchos créditos hipotecarios imprudentemente".	83,4
■ "La gente se ha endeudado demasiado porque los tipos de interés hipotecarios han sido muy bajos".	70,3
■ "Las deducciones fiscales han impulsado en exceso la compra de viviendas".	56,6

(2009) GRADO DE ACUERDO CON: "ES RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO INTERVENIR Y SALVAR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN DIFICULTADES, TALES COMO BANCOS".

■ Muy o bastante de acuerdo.	48,4
■ Poco o nada de acuerdo.	49,1

(2009) NO CREE QUE LAS INYECCIONES DE DINERO PÚBLICO EN BANCOS O CAJAS SIRVAN REALMENTE PARA SANEAR ESAS ENTIDADES. 57,2

(2010) NO CREE QUE LOS BANCOS Y LAS CAJAS ESPAÑOLAS ESTÉN DANDO UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE CRÉDITOS A LAS FAMILIAS Y A LAS EMPRESAS. 77,8

(2009) EN LA SITUACIÓN DE CRISIS ACTUAL, CONVIENE MÁS...

■ Subir los impuestos.	18,1
■ Dejar los impuestos igual.	13,4
■ Bajar los impuestos.	64,5

(2010) MUY O BASTANTE DE ACUERDO CON DIVERSAS MEDIDAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT PÚBLICO (ENTRE LOS QUE CREEN PRIORITARIO HACERLO).

■ Reducir el gasto en personal de la administración central, las comunidades autónomas y los municipios.	71,3
■ Reducir la inversión pública en infraestructuras.	34,9
■ Reducir el gasto social.	28,8
■ Aumentar los impuestos.	20,4

(2009) GRADO DE ACUERDO CON: "PARA COMBATIR EL PARO SE DEBERÍA ABARATAR LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES REDUCIENDO LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE PAGAN LOS EMPRESARIOS".

■ Muy o bastante de acuerdo.	44,5
■ Poco o nada de acuerdo.	52,3

(2010) OPCIÓN ENTRE DOS MODELOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

■ Que adapte lo más posible las condiciones de trabajo y los salarios a las características de cada empresa.	27,4
■ Que busque unas condiciones de trabajo y unos salarios iguales o muy parecidos para todos los trabajadores de un mismo sector.	68,0

RESULTADOS PRINCIPALES DEL CAPÍTULO 6

(2009) CREEN QUE EN LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES LOS TRABAJADORES INTENTAN MEJORAR SU FORMACIÓN, YA SEA PARA MANTENER SU PUESTO DE TRABAJO O PARA CONSEGUIR EMPLEO MÁS FÁCILMENTE.	78,8
(2010) ¿QUÉ CREE MÁS PROBABLE, QUE LOS JÓVENES PARADOS...?	
■ Se esperen a encontrar trabajo en la provincia en que viven.	21,9
■ Se dispongan a buscar trabajo en otra provincia.	71,9
(2010) ¿QUÉ CREE MÁS PROBABLE, QUE LOS TRABAJADORES MAYORES DE 55 AÑOS VUELVAN A ENCONTRAR TRABAJO...?	
■ En su gran mayoría.	5,0
■ Sólo una minoría lo encuentre.	93,9
(2009) MUY O BASTANTE DE ACUERDO CON DOS FRASES RELATIVAS AL MODELO DE CRECIMIENTO ESPAÑOL.	
■ "El peso de la construcción en España ha sido excesivo en la última década".	91,4
■ "El nivel de inversión en investigación y desarrollo ha sido suficiente".	23,1
(2009) EL NIVEL EDUCATIVO MEDIO DE LOS ESPAÑOLES, EN COMPARACIÓN CON EL PAÍS QUE EL ENTREVISTADO CREE QUE PODRÍA SER MODELO PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA ES... (SÓLO ENTRE LOS QUE CITAN UN PAÍS).	
■ Superior.	3,0
■ Similar.	13,0
■ Inferior.	82,1
(2009) ESTIMACIÓN MEDIA DE LOS AÑOS QUE NECESITARÍA ESPAÑA PARA SITUAR SU NIVEL EDUCATIVO MEDIO AL NIVEL DE LOS HABITANTES DEL PAÍS MENCIONADO (SÓLO ENTRE LOS QUE CREEN QUE EL NIVEL DE LOS ESPAÑOLES ES INFERIOR).	13
(2010) OPCIÓN ENTRE DOS FRASES SOBRE LA INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN MOMENTOS DE CRISIS.	
■ Conviene invertir en innovación y tecnología, pero es poco realista pensar que si no lo hemos hecho en momentos de crecimiento económico, lo vayamos a hacer en estos momentos de crisis.	43,4
■ Precisamente en momentos de crisis hay más motivación y más capacidad de decisión para invertir en innovación y tecnología, y es más probable que se haga esa inversión.	51,3
(2009) MUY O BASTANTE DE ACUERDO CON: "LA LEY DEBERÍA PROTEGER A LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES FRENTE A LA COMPETENCIA DE PRODUCTOS DE OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA".	79,7

7

EL SISTEMA DE DEBATE Y
DECISIÓN SOBRE ASUNTOS
COMUNES, Y SUS ACTORES
PRINCIPALES

■ LAS CUESTIONES A EXAMEN Y LA IMPORTANCIA DE LA ESFERA PÚBLICA

La sociedad española está preocupada por la crisis, da por supuesto que conviene mantener la economía de mercado y, en ese marco, atribuye a los gobernantes un papel destacado para resolver la crisis. Ahora bien, a la hora de decidir, y previamente debatir, las medidas en cuestión conviene preguntarse cuánta confianza depositan los españoles en el sistema de debate público, cuánta en sus actores principales (gobierno, oposición y otros actores), cuánta en la clase política en general y cuánta en sí mismos, como ciudadanos. He aquí las cuestiones que vamos a abordar en los próximos capítulos.

Como hemos visto en el capítulo 5, el apoyo a la economía de mercado encuentra su contrapunto en un pensamiento borroso y ambiguo respecto al núcleo mismo de aquella, a saber, que son los particulares quienes determinan las decisiones de inversión y establecen los precios de los productos y los servicios, operando libremente y de una manera descentralizada en un mercado competitivo y abierto. Son los particulares quienes deciden lo que producen, lo que venden, lo que compran y lo que pagan. Lo que hemos llamado el estatismo de los espa-

ñoles introduce un contrapunto a lo anterior, que puede contribuir a un mejor funcionamiento de los mercados, o a distorsionarlo.

Por otra parte, hemos visto en capítulos anteriores algunas de las dificultades de la sociedad a la hora de entender la crisis y la mejor manera de manejarla. Si nos fijamos, por ejemplo, en la comprensión de los errores cometidos por unos y otros, y en el contenido de algunas de las medidas que hay que adoptar, se observa, en síntesis, lo siguiente.

El público reconoce que todos, incluidas las gentes del común, hemos cometido errores. Sin embargo, quizá no acaba de ver los errores del gobierno con la misma acuidad con la que percibe los errores de las instituciones financieras a la hora de remediar la actual escasez de crédito. Parece creer que ayudará a resolver los problemas de los mercados financieros una regulación estatal más estricta, a pesar de que dichos mercados están hoy muy condicionados por la presión de las autoridades a favor de que las entidades financieras adquieran deuda estatal y se comprometan (las cajas, en particular) en fusiones que no están guiadas exclusivamente por la eficiencia económica, sino que incorporan los intereses particulares (por lo pronto, de poder) de los gobiernos regionales y los partidos políticos correspondientes.

Parece que el público es sensible a la importancia de acometer una política de consolidación fiscal. Además, centra su atención, una vez más correctamente, en el gasto que supone el personal de la administración estatal (la central, la autonómica y la local). Conviene introducir aquí la salvedad, obvia, de que la experiencia sugiere que

la resistencia política a la reducción del gasto público, por parte de determinados segmentos de la sociedad o de las propias administraciones públicas, puede ser notable, por lo que habrá que esperar a comprobar los resultados en su momento, con riesgo de que el debate sea de “mucho ruido y pocas nueces”. De todos modos, llama la atención que, en términos generales, la reducción del 5% de los salarios de los funcionarios apenas haya encontrado resistencia, y haya tenido poco seguimiento la huelga general convocada en septiembre de 2010 por los principales sindicatos contra la reforma laboral y otras medidas del gobierno. Aunque el público parece por ahora poco inclinado a aceptar con gusto reducciones de gasto distintas de la del salario de los funcionarios y tampoco un incremento de impuestos, el proceso político permanece abierto, y hoy, muy condicionado por el compromiso del gobierno español ante otros gobiernos, y sobre todo ante los inversores internacionales, en pro de reducir el déficit público desde el 11% del PIB en 2009 hasta el 3% en 2012, lo cual requiere de una notable reducción de gastos y/o de un notable incremento de ingresos.

Por ahora, la lectura que el público hace del mercado laboral es rudimentaria. Su inclinación “natural” parece ser la de negarse a rebajar los costes de despido, a reducir las cuotas empresariales a la Seguridad Social, y a flexibilizar la negociación colectiva. Además, espera, con poco realismo, que los trabajadores se formen, lo cual no parece estar ocurriendo, o sólo en escasa medida; que los jóvenes dejen su provincia para buscar trabajo, lo que no suelen hacer; y da por amortizados a los mayores de 55 años sin trabajo, pues piensa que no volverán a trabajar. Imaginar que la economía española pueda prosperar si estas disposiciones se reflejan en las políticas públicas co-

respondientes es irrazonable; esperar que aquélla pueda transformarse en la línea de un crecimiento basado en la tecnología alta y media-alta, con un gran impulso exportador, parece poco plausible.

Finalmente, sobre el nuevo modelo de crecimiento, observamos, de nuevo, una reacción razonable, la de anhelar un modelo económico más complejo, con más oferta de productos y servicios de tecnología alta y media-alta. Ello es congruente con lo sensible que se muestra el público a la existencia de un déficit educativo en comparación con las economías de referencia. Sin embargo, esta cuestión plantea problemas de gran alcance. Que nuestra economía no sea de alto valor añadido tiene su explicación, que está relacionada con el descuido relativo de esas materias por parte de la sociedad y de las elites responsables del sistema educativo español desde hace treinta años. El público intuye que llegar al nivel de los países que tiene como modelos llevará, por término medio, una década. Es probable que se quede bastante corto en su estimación. En cualquier caso, el asunto requiere un tiempo y un esfuerzo considerables, con el debate consiguiente y decisiones muy difíciles de tomar e implementar.

¿Qué conclusión podemos extraer de este resumen? Es muy sencilla: en la visión del público se mezclan pensamientos y percepciones plausibles con otras que parecen requerir rectificación y aprendizaje. Esto último implica recurrir a instancias educativas diversas. Algunas pueden derivarse de un esfuerzo personal por informarse, reflexionar, discutir en redes de amigos y familiares, o asistir a cursos y seminarios ofrecidos por las instituciones educativas. Otras se derivan de lo que ocurra en la esfera pública, es decir, el espacio en que tiene lugar el debate

y la toma de decisiones sobre los asuntos comunes, e incluso la implementación de aquéllas.

A continuación observamos cómo percibe la sociedad española ese espacio de debate, y lo que espera de él. Más adelante comprobaremos el grado de confianza que deposita en la clase política como tal. Finalmente, centraremos nuestra atención en cómo la sociedad se ve ella misma en tanto que conjunto de ciudadanos responsables de la cosa común.

EL JUEGO ENTRE GOBIERNO Y OPOSICIÓN, Y UN POSIBLE DESPLAZAMIENTO DE VOTOS DEL UNO A LA OTRA

Es natural en una democracia liberal que una gran mayoría de los ciudadanos espere del gobierno de turno la solución de los graves problemas de la comunidad, a reserva de expulsar del poder al partido gobernante y sustituirlo por su rival si no los soluciona. En cierto modo, la legitimidad sustancial del propio sistema democrático, por oposición a su legitimidad formal, como la que da el propio marco legal o la tradición (por no hablar de la suscitada por una confianza extraordinaria y muy emotiva en unos líderes con poderes supuestamente carismáticos), depende de que tal cosa ocurra, o al menos ocurra con cierta frecuencia.

En España, la expectativa de que con la democracia se van resolviendo los problemas sustanciales de la sociedad suscita, o refuerza, la adhesión ampliamente mayoritaria de la población al régimen democrático desde hace algo más de treinta años. Esta adhesión se pone de manifiesto

elección tras elección, concitando habitualmente la participación de cerca del 60 o el 70% del cuerpo electoral.

No supone ello, sin embargo, una sociedad intensamente interesada en la política. En la encuesta de 2010, por ejemplo, un 41,3% declaró mucho o bastante interés por la política, frente a un 58,5% que afirmó tener poco o ningún interés en ella. La proporción de interesados en la política es algo superior a la que suele medirse en las encuestas españolas de opinión pública desde la transición democrática (en torno a un 30%), si bien hay que recordar que nuestra encuesta excluye a los mayores de 75 años y que probablemente coincide con uno de los momentos (crisis, elecciones disputadas, escándalos políticos) en los que dicho interés crece coyunturalmente (Pérez-Díaz y Rodríguez 2010: 129-131).

En la encuesta de 2010, la gran mayoría de los que afirman haber votado al PP en las elecciones generales de 2008 dicen que volverían a hacerlo si se celebrasen ahora nuevas elecciones (un 78,9%), pero sólo votaría al PSOE un 53,6% de los que dicen haberlo hecho en 2008. En conjunto, la intención directa de voto expresada en la encuesta favorecería con un 25,9% al PP, frente al 18,9% para el PSOE, lo que trastocaría claramente la distribución de los votos que los entrevistados afirman haber emitido en 2008, con un 23,0% al PP y un 30,4% al PSOE. Así, la diferencia pasaría de ser favorable al PSOE en 7,4 puntos porcentuales a serlo en 7 puntos al PP.

No entraremos ahora en un análisis más estricto de estos datos, que ofrecemos al lector sin “cocina” alguna, es decir, sin ponderarlo por el recuerdo de voto u otras declaraciones (lo que dejamos para otro lugar). Nos basta,

para el propósito de esta discusión, con resaltar el cambio de orientación política partidista que ello puede suponer. Da la impresión de que estamos ante un veredicto que condena al gobierno del PSOE, quizá como responsable de la crisis o de gestionarla defectuosamente (véase más adelante), y parece apostar, con cierta reticencia, como veremos, por su alternativa política. El veredicto es provisional, por supuesto, porque habrá que esperar a la hora de la verdad de unas elecciones generales que, probablemente, no tendrán lugar antes de 2012. En todo caso, al final de este capítulo analizaremos los efectos que la gestión de la crisis por parte del gobierno y la oposición pueden tener en ese desplazamiento del voto.

Por el momento, profundizamos un poco más en el contexto de ese posible cambio de orientación, analizando algunos de los problemas de credibilidad del gobierno y de la oposición.

■ LOS PROBLEMAS DEL GOBIERNO

El “castigo” en la intención del voto que el público inflige al gobierno del PSOE parece avalado por su juicio, bastante duro, acerca de la gestión que éste ha hecho de la crisis económica. Un 78,2% de los encuestados en 2010 no está de acuerdo con cómo está afrontando la crisis económica el gobierno central, un porcentaje muy parecido al obtenido en la encuesta de 2009 (76%).

Obsérvese que incluso una amplia mayoría de los votantes del PSOE en 2008 (61,5%) está en desacuerdo con la gestión gubernamental de la crisis, si bien los críticos son claramente menos que entre los votantes del PP (91,6%).

Para entender mejor el calado de este rechazo, situemos la pregunta anterior en su contexto, en lo que se refiere al pasado, al presente y a la expectativa de futuro. Comprobaremos que ni determinadas políticas del pasado convencen al público, ni le impresionan las medidas actuales, ni está persuadido de lo que se vaya a hacer en el futuro.

La lectura crítica de la gestión gubernamental de la crisis, reiterada en dos años consecutivos, cuenta, por lo pronto, con el refuerzo de una crítica de la política de gasto público de los años previos a la crisis. En efecto, son tantos los que critican la gestión del gobierno como los que piensan que “el notable aumento del gasto público [en los años previos a la crisis] fue poco o nada sensato, pues era previsible que los ingresos públicos bajaran mucho en caso de crisis económica” (78,2 y 77,9%, respectivamente). Cabe, por supuesto, dudar de una crítica que toma por previsible lo que no fue previsto por casi nadie, probablemente incluyendo a los encuestados que formulan esa crítica. Pero el dato puede ser expresivo de una actitud de censura que se basa en la presunción de que el gobierno debería haber previsto los acontecimientos, y eso es lo que hace que, retrospectivamente, su gestión sea vista como imprudente. Por lo demás, por “los años previos a la crisis” es lógico pensar que el público se esté refiriendo a los tres o cuatro años anteriores al comienzo de la crisis, que podría datarse, a efectos de la percepción del público, en torno a la crisis de Lehman Brothers, en septiembre de 2008. Hablamos pues, presuntamente, del período de 2004-2008, que viene a coincidir con una legislatura y un gobierno, el de Rodríguez Zapatero, que ha hecho un gran esfuerzo para diferenciar su record del de los gobiernos anteriores.

También refuerzan la sensación de poco entusiasmo por la gestión del gobierno las respuestas del público a una pregunta abierta sobre cuál considera que ha sido la principal medida del gobierno frente a la crisis. Por lo pronto, un 24,5% no sabe qué contestar o decide no hacerlo, y un 13,1% responde que ninguna. Tampoco parece que haya medida alguna que se destaque nítidamente. La más mencionada es la bajada de los sueldos de los funcionarios, y sólo la cita un 14,7% de los entrevistados. El 9,4% habla de una reforma laboral que, en rigor, en el momento de la encuesta no había acabado de definirse del todo, y, obviamente, no se había aplicado. Sigue un rosario de medidas: el 7,7% menciona la subida de los impuestos; el 7,6%, el aumento de algunos gastos sociales; el 6,3%, la congelación de las pensiones; el 3,1%, el llamado "Plan E", un plan de ayudas a iniciativas diversas de carácter local.

Parece como si en el imaginario del público, en general, no destacara con fuerza medida alguna, no hubiera quedado rastro de una medida de gran fuste que descollara claramente sobre las demás. Ninguna parece tener rasgos de medida estratégica de primer orden. Tal vez estamos ante una miscelánea difusa de medidas de escasa envergadura. Como si el público asistiera al despliegue no de una gran estrategia sino de una serie de apañes ad hoc.

Finalmente, si se considera lo que el público espera de la capacidad del gobierno para tomar algunas decisiones importantes atinentes al cambio del modelo productivo, y para mantenerlas en el tiempo, cabe recordar algo que ya hemos tenido ocasión de comentar: que al menos a una amplia minoría del público (43,4%) no le parece probable que tales decisiones se tomen en este momento de crisis.

Las informaciones anteriores parecen corroboradas por la sospecha que alberga el público de estar ante una clase política que no acaba de tener una idea precisa de lo que ocurre y, lógicamente, de lo que quiere hacer en estas circunstancias. Ello sucede tanto en lo que concierne al gobierno como en lo concerniente a la oposición, como veremos. En todo caso, cuando a los encuestados se les pregunta, clara y directamente, si al escuchar al Presidente del Gobierno hablar de la crisis y la situación económica: tienen la impresión de que sabe mucho, bastante, poco o casi nada de lo que está hablando, hasta un 62,4% cree que sabe poco (33,6%) o casi nada (28,8%), mientras que sólo un 35,1% cree que sabe mucho (8,4%) o bastante (26,7%). Además, la sensación de que el Presidente del Gobierno sabe poco o casi nada del tema en cuestión está bastante generalizada, compartiéndola buena parte (un 49,7%) de los que se declaran votantes del PSOE en 2008.

■ LOS PROBLEMAS DE LA OPOSICIÓN

De todos modos, la frustración de gran parte del público con el gobierno del PSOE en lo que se refiere a lo que hace y lo que parece que sabe se corresponde con una falta de entusiasmo parecida respecto a la oposición del PP, tanto en lo que se refiere a lo que se espera que haga como en lo que se supone que sabe.

Ya en la encuesta de 2009 una mayoría de encuestados, un 62,8% (unos 13 puntos por debajo, es cierto, del 76% que no estaba de acuerdo con la gestión del gobierno), no esperaba que la oposición manejase la crisis mejor que el gobierno, frente a un 30,9% que sí lo esperaba. En la encuesta de 2010, las perspectivas quizá son más negati-

vas para la oposición: quienes creen que un gobierno del PP manejará la crisis igual o peor que el gobierno ascien- den a un 68,8% (45%, igual; 23,9%, peor), y quienes esperan que lo haga mejor representan el 25,2%.

La capacidad de persuasión del PP parece pues limita- da. Sin embargo, el nivel de desconfianza parece algo mayor en el caso del gobierno del PSOE (un 78,3% en desacuerdo con su gestión de la crisis frente a un 68,8% que cree que el PP lo haría igual o peor), y, sobre todo, la frustración de los votantes de uno y otro presentan rasgos distintos.

De hecho, quienes votaron al PP en las elecciones de 2008 parecen algo más convencidos de los méritos de su partido que quienes votaron al PSOE con respecto al suyo. Un 61,5% de los votantes del PSOE (en 2008) se muestra en desacuerdo con la gestión gubernamental de la crisis, mientras que sólo un 23,3% de los votantes del PP no espera gran cosa, por así decirlo, de la acción del PP. El índice de desconfianza de los propios partidarios arroja, si cabe decirlo así, un saldo menos desfavorable en el caso del PP que en del PSOE.

Tampoco conviene perder de vista que cuando pregunta- mos a los entrevistados si, al escuchar al líder del principal partido de la oposición hablar de la crisis y la situación económica, tienen la impresión de que sabe mucho, bastante, poco o casi nada de lo que está hablando, el 59,2% cree que sabe poco o casi nada (un porcentaje muy parecido al 62,4% que cree lo mismo respecto del Presidente del Gobierno), frente a un 37,6% que cree que sabe mucho o bastante (un 36,1% en el caso del Presidente).

EFFECTOS DE LOS JUICIOS SOBRE LA GESTIÓN EFFECTIVA DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN POSIBLE DE LA OPOSICIÓN EN LA ORIENTACIÓN DEL VOTO

La prueba de que el juicio crítico de los votantes del PSOE respecto de la gestión gubernamental de la crisis hace que caiga su intención de volver a votarle en las próximas elecciones es cómo desciende dicha intención de voto a medida que aumenta su desacuerdo con la gestión gubernamental de la crisis. Según nuestra encuesta de 2010, un 93,3% de los que están muy de acuerdo con dicha gestión expresan su intención de volver a votarle, porcentaje que baja hasta un minúsculo 28,6% de los que no están nada de acuerdo. Obsérvese que ello no implica una transferencia masiva de votos al PP o a otros partidos, sino más bien hacia la abstención, hacia la indefinición (voto en blanco) o hacia la ocultación (no contestan). Dado que la inmensa mayoría (91,9%) de los votantes del PP en 2008 juzga negativamente la gestión gubernamental de la crisis, no tiene sentido repetir el mismo ejercicio con ellos.

Sí cabe, por otro lado, observar en qué medida orientan los votantes del PSOE su voto futuro hacia el PP dependiendo de las expectativas que albergan respecto a este último en lo referente a su hipotético manejo de la crisis. Nuestros datos reflejan claramente que los convencidos de que el PP lo haría peor son los que menos le transferirían su voto (1,0%), por debajo de los que creen que lo haría igual (7,6%) y muy por debajo de los que creen que lo haría mejor (46,2%).

Apenas puede repetirse este ejercicio para los votantes del PP, pues casi todos (72,4%) piensan que el PP gestio-

naría la crisis mejor que el PSOE. De todos modos, sí que se observa que los que albergan dudas acerca de una hipotética gestión del PP tienen menos claro mantener su confianza electoral en dicho partido, si bien ello no implica depositarla en el PSOE o en otros partidos.

OTROS ACTORES: EL PAPEL DE LOS ECONOMISTAS, EL BANCO DE ESPAÑA, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los profesionales son clave en el sistema de debate público. Tienen los saberes expertos que les faltan a políticos y ciudadanos, y tienen además la obligación moral de poner ese saber experto al servicio del debate de aquéllos, porque esa obligación está inscrita en la definición misma de profesión desde hace muchos siglos, incluso un milenio. Su profesión consiste justamente en eso, en la vocación de quienes responden a la llamada tanto de la sociedad como, en rigor y en origen, de las instancias divinas asociadas a esa sociedad para ofrecerles sus servicios. De modo que no es cuestión menor la de que cumplan con esa obligación, y la de que la sociedad reconozca ese cumplimiento.

En la España de la crisis actual contamos, entre otros muchos, con dos mecanismos de mediación importantes basados en la función profesional de poner los saberes expertos al servicio de la comunidad: la comunidad de los economistas y una institución clave como el Banco de España. Otro mecanismo de mediación profesional, los medios de comunicación, también incorporan una dimensión fiduciaria, de confianza pública depositada en su saber propio, pero de distinta

índole y basada en la aportación de información sobre los asuntos públicos.

Examinamos a continuación cierta evidencia sobre el grado de confianza que todos estos mecanismos inspiran en el público, constatando que, hoy por hoy, esa confianza es limitada.

Por lo que se refiere a la comunidad de los economistas, se observa que, puestos a elegir entre tres frases relativamente contrapuestas sobre su papel en España, los encuestados responden en 2010 de la forma siguiente. Un 20,3% piensa que hay en España una comunidad de economistas que están relativamente de acuerdo sobre lo que se debería hacer en el país para afrontar la crisis. Un 73,7%, en cambio, no cree que una comunidad así exista: lo que incluye un 32,9% que cree que no existe porque tienen opiniones muy distintas y un 40,9% que no existe porque son muy pocos los economistas que saben lo que hay que hacer.

Da la sensación de que a los economistas se les plantea aquí un problema interesante que concierne tanto a lo que son como a la manera de ser vistos por la sociedad y de influir en ella. Si esa comunidad existe porque sea poseedora de un saber experto con un núcleo compartido de ideas, datos y diagnósticos, entonces puede que los economistas no sepan proyectar su saber experto al público, bien porque no entiendan a ese público, bien porque éste sea incapaz de entenderles al carecer de una formación económica básica.

Por lo que se refiere al Banco de España, en la encuesta de 2009 preguntamos por el grado de confianza en la

competencia del Banco de España para hacer frente a la crisis financiera en España. En una escala del 1 (mínima confianza) al 5 (máxima confianza), la media obtenida ni siquiera llegó al punto medio (3), quedándose en 2,9.

En 2010 planteamos una pregunta más concreta, que ha revelado, probablemente, una actitud más crítica. Puestos a elegir entre dos opciones, un 27,8% piensa que durante la crisis, “el Banco de España ha actuado con prudencia, pero se ha visto desbordado por una crisis mundial”. La mayoría (65,7%), por contra, opta por la afirmación de que, durante la crisis, “el Banco de España ha faltado a su deber de vigilancia y de previsión, permitiendo que los bancos [y, suponemos, las cajas] se endeudaran en exceso”.

En cuanto a los medios de comunicación, ya hemos señalado que el 64,3% de los encuestados creen que les informan de manera más bien desordenada y confusa, y un 28,4%, que lo hacen de manera clara y ordenada. Nótese que nos referimos a los medios que les informan, por lo que no se trata de un juicio sobre los medios de comunicación en general, sino sobre los medios de comunicación que los encuestados frecuentan. Esto es, se trata de los medios que, se supone, les ofrecen mayor crédito, y no de aquéllos que no frecuentan, presumiblemente porque no les interesan o no los estiman. Por lo demás, el porcentaje de encuestados críticos con los medios casi coincide con el que se obtuvo en la encuesta de 2009, esta vez referido a si los encuestados consideraban que los medios de comunicación, en general, eran más bien objetivos (así lo creía un 23,9%) o no objetivos (un 64,3%).

Cabe considerar a las instituciones financieras privadas, bancos y cajas, no sólo como entidades individuales, sino como una suerte de actores colectivos que encarnan la defensa de un interés particular, pero también, de alguna manera, de un bien público. Su voz refleja en parte su interés, pero también el interés por el funcionamiento del conjunto del sistema financiero, sin el cual la economía real no podría funcionar. Al mismo tiempo, esa voz suya sirve como mecanismo mediador de una voz impersonal aún más potente, la de los mercados financieros internacionales, de los que dependen la colocación de la deuda pública y el margen de maniobra del propio estado español.

Sin entrar en demasiados detalles, baste con señalar que el público ve con cierta desconfianza a estas instituciones financieras, a las que hemos agrupado, un tanto impropiamente, por la diversidad de sus problemas, en la categoría “bancos y cajas”; a ellas y, es de suponer, a su voz en el debate público.

En la encuesta de 2009, un 59,6% confiaba relativamente poco (puntuaciones 1 y 2 en una escala del 1 al 5) en la capacidad de los dirigentes de bancos y cajas para hacer frente a la crisis financiera en España, y la puntuación media obtenida apenas llegó a un 2,2, de lo que cabe inferir una escasa confianza en sus declaraciones y consejos al respecto. Conviene ver esta declaración de desconfianza en el contexto de una lectura de la situación que atribuía a esas instituciones parte de la responsabilidad por la crisis. En 2009, un 83,4% estaba de acuerdo con la

idea de que bancos y cajas habían dado muchos créditos hipotecarios imprudentemente, y un 70,3% estaba de acuerdo con la idea de que la gente se había endeudado demasiado porque los tipos de interés hipotecarios habían sido muy bajos, lo que puede entenderse como una censura, indirecta, a las condiciones en las que se ofrecieron los créditos.

Es posible, sin embargo, observar un reconocimiento implícito de las dificultades de las familias hipotecadas en el hecho de que, junto al 26% de los encuestados con hipoteca que reconocía haber tenido dificultades para hacer frente a los pagos de aquella, un 19,7% había conseguido renegociar las condiciones de la hipoteca con su banco o caja.

En cualquier caso, la reticencia del público hacia las instituciones financieras se puso en 2009 de manifiesto en la división por mitades de los encuestados a la hora de apoyar que el gobierno salvase a las instituciones financieras en dificultades (48,4% a favor, y 49,1% en contra).

En la encuesta de 2010 nos volvemos a encontrar con una actitud de distancia crítica respecto a “bancos y cajas”. Como ya hemos señalado antes, un 77,8% de los encuestados entiende que no están dando suficiente crédito a las familias y las empresas. A su vez, según la mayoría de esos encuestados (un 63,9%), que no lo hagan tiene que ver con decisiones propias de los bancos. Un 22,4% se fija más en motivos tras los que un experto puede atisbar desincentivos a los créditos derivados de políticas estatales, como la adquisición de deuda pública o la fusión de unas entidades financieras con otras. Sin embargo, no es obvio que el público comparta la lec-

tura del observador experto, por lo que pudiera ocurrir que para una mayoría de encuestados en esas políticas estatales se concitaran las estrategias del gobierno y los intereses particulares de las instituciones financieras.

No extraña así que, como ya hemos señalado, un 49,8% del público reclame para los mercados financieros una regulación más estricta que para los mercados de productos y servicios.

■ GRUPOS DE INTERÉS: SINDICATOS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES

Entre el resto de los actores relevantes en el espacio público destacan los grupos de interés organizados, tales como los sindicatos y las asociaciones de empresarios, que cuentan con notables privilegios y reconocimientos legales, abundante financiación estatal y fácil acceso a los medios de comunicación y al sistema político. Lo interesante aquí es constatar el juicio del público sobre la influencia real de estos actores en las medidas contra la crisis adoptadas por el gobierno y el parlamento, una influencia que se percibe como irrelevante o, si acaso, como negativa.

Cuando preguntamos a los encuestados cómo han influido en tales medidas los dos sindicatos principales (es decir, la Unión General de Trabajadores, UGT, y Comisiones Obreras, CCOO), un 9,1% les asigna una influencia positiva, un 32,9%, negativa, y una mayoría, el 51,1%, piensa que no han tenido una influencia relevante.

Asimismo, al preguntarles por la influencia de la principal asociación empresarial, la CEOE (Confederación Es-

pañola de Organizaciones Empresariales) en las medidas anticrisis, el 15% la ve como positiva, el 27,4%, como negativa, y el 36,6% piensa que no ha tenido una influencia relevante, a lo que habría que añadir el elevado porcentaje que no sabe qué contestar a esta pregunta, un 21,0%.

Se trata pues, al parecer, de grupos de presión destacados para los políticos y para los medios de comunicación, y probablemente para los académicos, pero de un interés menor para el público en general.

Recordemos, a estos efectos, la información sobre el pacto social obtenida de la encuesta de 2009, a la que ya hemos aludido, y que parece congruente con un perfil bajo de los sindicatos y las asociaciones empresariales. En plena discusión de los políticos y los medios de comunicación sobre el pacto social, sólo un 56,5% aseguraba haber oído hablar de él. Entre los que habían oído hablar de él, sólo un 44,5% pensaba que llegaría a firmarse, y entre los que creían que se firmaría sólo un 27,5% consideraba que sería claramente eficaz para reducir el paro (4 ó 5 puntos en una escala del 1 al 5). De manera que, en conjunto, escasamente un 6,9% del público parecería expectante ante la firma del pacto social entre patronal y sindicatos.

■ CAMBIANDO DE MARCO DE REFERENCIA: EUROPA

El sistema de debate, decisión y gestión al que venimos refiriéndonos es el español, que opera dentro de los límites de una comunidad política nacional determinada. Sin embargo, conviene ampliar el marco de referencia, o

al menos comprobar en qué medida el público percibe la relevancia y el interés de hacerlo. Con esto entramos sin duda en un territorio de problemas amplios y complejos. No disponemos aquí de evidencia empírica suficiente para hacerlo a fondo, pero sí para esbozar algunos temas que merecen ser abordados con más atención en otra ocasión.

La encuesta de 2009 nos ofrece algunas respuestas interesantes a este respecto. Por ejemplo, la que decía que la mayoría consideraba que la crisis se debía, sobre todo, a la situación internacional (39,3%) o a dicha situación junto con problemas internos de la economía española (22,6%); mientras que sólo un 35% la consideraba consecuencia, sobre todo, de problemas internos. Por otra parte, puestos a elegir entre dos opciones, una clara mayoría (63,4%) pensaba que la salida de la crisis dependería, sobre todo, de la fuerza de nuestra economía, frente al 31,4% que creía que dependería de la evolución de la situación internacional.

Algunas respuestas de la encuesta de 2010 matizan las de la encuesta anterior. Por ejemplo, parece reforzarse la sensación de que mucho depende de lo que ocurra fuera de España, y en especial en la Unión Europea. Un 60,4% piensa que la coordinación de los gobiernos de la UE puede ayudar mucho o bastante a la solución de la crisis española, lo que quizá sea un reflejo un poco difuso de las alusiones, frecuentes en la prensa, en un lenguaje un tanto dramático o arcano, a un asunto relacionado, el de la importancia de la crisis de los países europeos periféricos para la economía europea y para el futuro del euro. A su vez, casi la misma proporción, un 59,4%, piensa que el tirón de un crecimiento económico fuerte en de-

terminados países europeos ayudará mucho o bastante a la economía española a salir de la crisis. Se expresa así, claramente, una conciencia de la interdependencia de las economías española y europea. Hasta dónde llegue esta conciencia y de qué manera se articule son preguntas más arduas de contestar. Una indicación de la complejidad de las cuestiones subyacentes en esta conciencia de interdependencia la pone de manifiesto el dato de que, en 2009, un 79,7% de los encuestados estaba de acuerdo con que “la ley debería proteger a los productos españoles frente a la competencia de productos de otros países de la UE”, frente a un 19,2% en desacuerdo. De modo que, al parecer, se valora a la UE pero también se quiere el proteccionismo contra la UE, una actitud que cabría calificar de algo esquizofrénica.

Instalados en una actitud europeísta, los encuestados parecen dispuestos a llegar bastante lejos, al menos en teoría. Les planteamos dos preguntas en las que tenían que adoptar la perspectiva del interés común de los países de la UE y aplicarla al caso de un país de la UE que no fuera capaz de recortar su déficit público en un plazo razonable. La primera solicitaba su acuerdo con que, en un caso como el descrito, “la UE debería ejercer cierto control sobre el presupuesto público de ese país”, a lo cual respondió afirmativamente un 83,8% (y un 11,3% negativamente). Respuesta drástica y contundente, que parece alinearse espontáneamente con los deseos de la canciller alemana, Angela Merkel, por ejemplo, haciendo suya la llamada perspectiva alemana, de rigor y exigencia. Tal vez el subtexto a esta pregunta sea una antigua pauta, relativamente frecuente no sólo en España, sino también en otros países euromediterráneos (por ejemplo, en Italia), según la cual los ciudadanos se pueden dar

cuenta, en determinadas circunstancias, de las ventajas de ser controlados por un gobierno exterior cuando desconfían de que sus propios gobiernos ejerzan ese control, aunque lo simulen ante sus opiniones públicas respectivas, o porque desconfían, quizás, del autocontrol que ellos mismos, los ciudadanos, pueden ejercer.

Sin embargo, las respuestas a la segunda pregunta sugieren los límites de esa delegación de responsabilidad en la UE. Preguntados si, en el mismo caso de un país que no recorta su déficit en un plazo razonable, sus derechos de voto en las instituciones de la UE deberían ser recortados en alguna medida, las respuestas se equilibran, de modo que un 46,2% se opone, mientras que un 44,3% de rigoristas lo acepta. De todos modos, no podemos descartar que el subtexto de esta pregunta sea entendido como uno que sugiere que estamos ante una pregunta que puede ser percibida como meramente retórica.

RESULTADOS PRINCIPALES DEL CAPÍTULO 7

(2010) LA POLÍTICA LES INTERESA MUCHO O BASTANTE.	41,3
POCO O NADA DE ACUERDO CON CÓMO EL GOBIERNO CENTRAL ESTÁ AFRONTANDO LA CRISIS.	
■ 2009.	76,0
■ 2010.	78,3
UN GOBIERNO DEL PRINCIPAL PARTIDO DE LA OPOSICIÓN NO MANEJARÍA LA CRISIS MEJOR QUE EL GOBIERNO ACTUAL.	
■ 2009.	62,8
■ 2010.	70,2
(2010) CUANDO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO / EL LÍDER DEL PRINCIPAL PARTIDO DE LA OPOSICIÓN HABLA DE LA CRISIS Y LA SITUACIÓN ECONÓMICA, SABE POCO O CASI NADA DE LO QUE ESTÁ HABLANDO.	
■ Presidente del gobierno.	62,4
■ Líder del principal partido de la oposición.	59,2
(2010) OPINIONES SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA COMUNIDAD DE ECONOMISTAS EN ESPAÑA.	
■ En España hay una comunidad de economistas que están relativamente de acuerdo sobre lo que se debería hacer en nuestro país.	20,3
■ No la hay, porque tienen opiniones muy distintas.	32,9
■ No la hay, porque, en realidad, son muy pocos los que saben lo que hay que hacer.	40,9
(2010) CÓMO DEBE SER LA REGULACIÓN DE LAS ENTIDADES Y LOS MERCADOS FINANCIEROS EN COMPARACIÓN CON LA DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.	
■ Más estricta.	49,8
■ Parecida.	28,2
■ Menos estricta.	12,2
(2010) PERCEPCIÓN DE LA INFLUENCIA DE LOS DOS SINDICATOS PRINCIPALES EN LAS MEDIDAS CONTRA LA CRISIS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO.	
■ Positiva.	9,1
■ No relevante.	51,1
■ Negativa.	32,9
(2010) PERCEPCIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA PRINCIPAL ASOCIACIÓN EMPRESARIAL, LA CEOE, EN LAS MEDIDAS CONTRA LA CRISIS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO.	
■ Positiva.	15,0
■ No relevante.	36,6
■ Negativa.	27,4
(2010) DE ACUERDO CON DOS MEDIDAS, ADOPTADAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL INTERÉS COMÚN DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA, SI UNO DE ELLOS NO ES CAPAZ DE RECORTAR SU DÉFICIT PÚBLICO EN UN PLAZO RAZONABLE.	
■ La UE debería ejercer cierto control sobre el presupuesto público de ese país.	83,8
■ Los derechos de voto de ese país en las instituciones de la UE deberían ser recortados en alguna medida.	44,3

8

LOS LÍMITES DE LOS POLÍTICOS
VISTOS POR LA SOCIEDAD

■ EL DEBATE SOBRE LA CLASE POLÍTICA

El debate público funciona de tal forma que los medios de comunicación suelen centrar su información en la conducta de los políticos, los economistas tratan de persuadirles, los sindicatos y las patronales les someten a presión y los gobiernos de la UE intentan influir en ellos; por no hablar de los ciudadanos, que miran en su dirección, comentan lo que hacen y les votan. En definitiva, los políticos de la comunidad política local de referencia son considerados como el centro de gravedad del sistema de debate, decisión y gestión de los asuntos colectivos. Cabe discutir si las cosas son como deben ser, y quizá se piense que no deberían ser así, por ejemplo, porque los ciudadanos debieran ser “ciudadanos activos”, dispuestos a implicarse en ese sistema de manera más intensa y continua, pero por ahora las cosas son así.

Tenemos pues a los políticos, o la clase política, en el centro del sistema. La expresión “clase política” tiene una historia controvertida en la tradición de la ciencia política, siendo muy utilizada, con intención más bien peyorativa, por un conjunto de politólogos de comienzos del siglo XX, que algunos denominaron “neomaquiavélicos”, tales como Gaetano Mosca, Wifredo Pareto y Robert Michels.

Despojada de la intención peyorativa y reducida a su carácter descriptivo y analítico, la expresión es elocuente y útil. Denota que la experiencia de los profesionales de la política les induce a una forma de vida peculiar y distinta de la de los ciudadanos corrientes, la cual se caracteriza por el uso continuo e intenso del poder político, porque se ejerza o porque se aspire a ejercerlo, lo cual se traduce en una forma singular de percibir, experimentar y manejar simbólicamente la vida política.¹

La experiencia es, grosso modo, común a los políticos de las tendencias más diversas, lo que les acerca entre sí y les diferencia del resto. Eso sí, obsesos con sus rivalidades, los políticos apenas entienden que se les pueda poner juntos y se les ubique en la misma categoría, de lo cual se resienten; pero esto responde a una deformación profesional que les hace no ver lo que para los demás es obvio. En ese no querer reconocer su carácter de clase política influye también su interés práctico en difuminar el hecho de que los representantes políticos no son idénticos a sus representados, o que sólo lo son para ciertos efectos, retóricos principalmente, pero no a la hora de la verdad, que es la de ejercer el poder. Aunque este interés suyo es comprensible, no justifica la distorsión de la verdad, y por ello no debe impedirnos distinguir con claridad, y no con borrosidad, a unos y a otros.

Detengámonos un momento en la lectura que el público hace de estos políticos, o esta clase política, independientemente de que ocupen sus puestos en el gobierno o en la oposición. Ello nos ayudará a comprender mejor el capítulo anterior, es decir, las reticencias del público

¹ Véase al respecto Pérez-Díaz (2008).

respecto a los políticos en tanto que actores organizados en gobierno y oposición. Asimismo, nos dirá algo sobre los límites que perciben en los conocimientos y la buena voluntad de aquéllos, y sobre las razones que subyacen a sus críticas. Esto es importante a los efectos de reparar y mejorar el sistema de debate, así como para favorecer la comunicación entre políticos y ciudadanos. Las críticas del público ofrecen pistas para una posible senda de recuperación de la confianza de la ciudadanía en la clase política. En cierto modo, se trata, más que de un simple camino para mejorar las cosas, de una gran avenida o una “vía real” que los políticos harían mal en ignorar. Porque es difícil que lleguen muy lejos con los comentarios cuidadosos (o “dramáticos”) de su entorno de expertos, medios de comunicación y elites económicas o sociales o culturales, casi siempre a la espera de los favores de turno (de unos u otros). Y tampoco es probable que recorran mucho camino por esa senda con un ejercicio de autocrítica que fácilmente se convierte en un ejercicio de crítica a sus rivales y en un instrumento de sus luchas internas.

Así pues, intentemos comprender la lectura crítica que subyace en la desconfianza que el público manifiesta con cierta frecuencia respecto a los políticos, incorporando algún tipo de argumento o de ilación de temas. Por lo pronto, recordemos que el contexto en el que aparecen esas críticas las suaviza, o contiene dentro de ciertos límites su alcance. Se trata de críticas hechas en el contexto de una relación democrática, que da por supuesta la legitimidad del marco político de esa relación. El público critica, pero vota; y vota precisamente a esos partidos, o sus equivalentes, una y otra vez, desde hace más de treinta años. Y está dispuesto a seguir haciéndolo, como se deduce, grosso modo, de sus intenciones de voto. Más aún, casi

la mitad se siente fiel a los partidos que vota, tal como sugiere que, en 2010, un 46,3% se identificara como votante de un partido determinado (un 44,9% en 2009), mientras que otro tanto, un 48,6% (idéntico porcentaje en 2009), admitía decidir su voto en cada elección. Por lo mismo, aunque estamos, como veremos, ante ciudadanos críticos con los partidos, no dejan de conservar un fondo de esperanza en que los políticos “aprendan”. En 2009, la mayoría, un 56,7%, daba por sentado que los políticos aprenderían de la experiencia de la crisis, afrontando mejor los problemas económicos futuros, frente a un 38,3% que no lo esperaba así.

■ PARECEN GENTES DIFERENTES, PERO ¿ABIERTAS O CERRADAS?

Un indicio de la distancia emocional entre políticos y ciudadanos se aprecia en el dato elemental de que mientras a los segundos les puede afectar personalmente la propia crisis económica, el público sospecha que no les ocurre lo mismo, o en la misma medida, a los políticos. El 76,4% de los encuestados en 2010 está poco (27,1%) o nada (49,3%) de acuerdo con la frase “muchos políticos, de todas las tendencias, están muy motivados para resolver la crisis porque están sufriendo las consecuencias de la crisis en su vida personal”. Al parecer, sólo un 22,7% estaría de acuerdo con la frase (9,5% muy de acuerdo, y 13,2%, bastante de acuerdo), y vería, pues, a los políticos, por así decirlo, compartiendo las preocupaciones de una gran parte del común de los mortales.

Así pues, según la mayoría del público, los políticos ven las cosas a cierta distancia, sin la extrema atención que

implica el estar plenamente involucrados en la situación a título personal. Serían vistas diferentes porque viven en un mundo diferente; de modo que cuando entran en política eso sería justamente lo que hacen, entrar en un mundo distinto y, al parecer, más protegido de ciertas angustias cotidianas. Se codean con gentes de otro nivel, tienen acceso a medios de los que los demás no disponen, y desarrollan una pasión específica de poder que no suele tener, y mucho menos en el mismo grado, la gente común. Quizá al hacerlo se crea una cesura respecto del mundo ordinario, del que proceden: olvidan cosas y gentes que se quedan atrás y a las que vuelven poco menos que sólo cuando les hace falta. Se van haciendo así diferentes, gentes con un carácter propio. Eso les acerca mutuamente, a pesar de sus diferencias de partido, como sin querer. Se comprenden bien entre adversarios, y se dan cuenta, antes que los demás, de las intenciones de sus rivales. Es una nueva forma de vida la que abrazan, que deja en ellos una impronta que permanece cuando la dejan atrás, porque no pierden el contacto, les queda la nostalgia, y, además, vuelven al mundo de las gentes corrientes pero ya a otro nivel, porque su paso por la política les ha dado un capital de saberes, contactos y reputación que les coloca en otro tramo, más alto, en la senda de su movilidad social.²

¿Cómo cree el público que son estas gentes políticas tan distintas? Pudieran verlas como gentes “abiertas”, en el sentido que Henri Bergson (2008 [1932]) dio a

² De hecho, comienza a publicarse una literatura sobre la materia que se mueve entre la denuncia y la investigación social, tanto en España como en otros países, como Italia, país en el que algún libro al efecto, que usa el término “casta política” para marcar aún más la diferencia, ha tenido un éxito de ventas espectacular (Rizzo y Stella 2008).

esta expresión: abiertas a los otros, y a sus problemas, empáticas, sociotrópicas, inclinadas a escuchar y responder. Pero también pudieran verlas, a pesar de sus esfuerzos por comunicar con el electorado, como personas “cerradas”: egocéntricas, maquinales, en sus relaciones con el público, en sus relaciones dentro de los partidos y en sus relaciones con políticos de partidos distintos. Varios indicios recogidos en la encuesta de 2010 parecen corroborar la hipótesis de que esta lectura crítica de los políticos está bastante extendida entre el público.

Planteamos a los encuestados dos preguntas relativas al partido político del que se sienten más próximos. No, obsérvese, sobre los políticos en general, incluyendo los de partidos lejanos del entrevistado, sino sólo sobre los más próximos, los más afines, los que le merecen, se supone, un juicio más favorable. Primero, si creen que los políticos de ese partido, en sus debates dentro del partido suelen razonar según su criterio y debatir abiertamente o, más bien, creen que tienden a acomodarse a las directrices de sus líderes, casi sin discutirlos. El 69,2% piensa que hacen lo segundo, acomodarse a las directrices de los líderes, y sólo un 22,7% piensa que debaten abiertamente. Es decir, los encuestados dan por supuesto que no hay debates “abiertos” en el seno del partido, sino, para decirlo con cierta crudeza, apaños acomodaticios de gentes atentas a no enemistarse o enfrentarse con sus líderes, bien porque crean intensamente en ellos, bien porque crean que no les interesa hacerlo, digamos que por oportunismo. Sin embargo, cabe especular que esa impresión se basa en algo más que la observación de unos datos recientes, de modo que tenga que ver con lo que el público considera como pautas establecidas ya desde el comienzo de

la democracia. Quede el tema, en todo caso, para otra ocasión.

La “cerrazón” de los políticos parece aún más acusada en lo que se refiere a sus tratos con otros partidos. De nuevo, les pedimos a los encuestados que se fijen en el partido del que se sientan más próximo, y les preguntamos si creen que cuando los políticos de ese partido escuchan los puntos de vista de políticos de otros partidos, suelen estar abiertos a incorporar las ideas más razonables, o creen que sólo les escuchan para rebatir mejor sus argumentos. La respuesta es rotunda, más aún que en el caso de la pregunta anterior: el 75,8% piensa que los políticos sólo escuchan a los de los otros partidos para rebatirlos, frente a un 15,3% que les cree abiertos y dispuestos a incorporar las ideas razonables de los demás. Es posible que el público esté proyectando algo de su propia experiencia de gentes que discuten escuchando apenas a sus contrincantes, o al menos cabe pensar eso si se atiende a la observación de cuán frecuente es la interrupción del prójimo en las tertulias que se ofrecen en los medios de comunicación, y que aparentemente hacen las delicias del público. Sin embargo, éste es un tema aún sin dilucidar, y también podría pensarse que el público se interesa en esas tertulias a pesar del disgusto, y no el gusto, que pudiera sentir, porque quizá sean un modo accesible de informarse sobre las opiniones de unos y otros, digamos que haciendo un sacrificio personal en aras de mejorar su nivel cívico. En todo caso, parece razonable concluir de este espectáculo de una clase política como una comunidad dividida, de gentes que no se escuchan, el carácter poco ejemplarizante, o deseducador, de la clase política en relación con la comunidad política nacional que la sustenta con su voto.

Estos comentarios de moral política elemental conectan con el paso siguiente en nuestra descripción y análisis de los políticos vistos por el público. Podría pensarse que al ver como “caracteres cerrados” a los políticos, el público les describe, pero no necesariamente les censura. Que le parece normal que sean así, y tal vez que les admira por ello, por ser tan entusiastas y enérgicos en el rechazo de los otros partidos, por ejemplo. Como si con ello reconocieran que “la vida política tiene que ser así”, “así de dura”, “propia de verdaderos animales políticos” (dicho lo de “animales” con un punto de admiración, como el que introducen muchos comentaristas políticos cuando dicen eso de que “tal o cual líder es un verdadero animal político”).

Es posible que fluya una corriente de simpatía o admiración por debajo de esta lectura de la política partidista cerrada. Pero también es posible que no. Por lo pronto, puesto que esa lectura coincide con una amplia desconfianza hacia las acciones y los saberes de los políticos (recordemos los datos sobre gobierno y oposición señalados en un capítulo anterior), parece lógico vincularla a una visión negativa del personal político.

Añadamos otro indicio interesante. A los encuestados de 2010 les solicitamos su grado de acuerdo con la afirmación de que “muchos políticos de todas las tendencias suelen descalificar a los adversarios para desviar la atención del público del hecho de que en realidad no son capaces de resolver la crisis”. Obviamente, la pregunta es compleja: le sugerimos al entrevistado que piense en políticos de todas las tendencias y le enfrentamos con un dato incontrovertible, que los políticos descalifican a sus adversarios, pero

añadimos un juicio de intenciones, que lo hacen para desviar la atención de su propia incapacidad. A pesar de esa complejidad, casi todos respondieron la pregunta (sólo un 1,2% no lo hizo), y una abrumadora mayoría, el 88,4%, no tuvo reparo alguno en mostrar su acuerdo con la proposición. Sólo un 10,4% estuvo en desacuerdo.

Parece, por tanto, que la inmensa mayoría del público no sólo entiende que los políticos son cerrados en sus tratos entre sí, y no se escuchan, sino que nos sugieren un atisbo de explicación de ello: que los políticos quizá sean proclives a desviar la atención de sus incapacidades; llevando las cosas al límite, aparecerían en tal caso como tergiversadores, o poco veraces, o manipuladores del personal, a la vez que poco capaces; y lo uno tendría que ver con lo otro.

Por lo demás, la respuesta a esa pregunta amplía lo que también pone de manifiesto la encuesta de 2009 mediante una pregunta más simple, acerca de si los principales partidos de España, el PSOE y el PP, se tratan entre sí más bien como adversarios políticos o más bien como auténticos enemigos. Para el 68,6%, se tratan como “auténticos enemigos”, mientras que para el 29,5% se tratan como (meros) “adversarios políticos”. Evidentemente, si se tratan como “auténticos enemigos” no pueden confiar lo suficiente los unos en los otros como para alcanzar compromisos en aras de un bien común compartido, los que se alcancen serán frágiles e inestables, y la colaboración entre los partidos será muy circunstancial. Obviamente, ésas no son condiciones favorables para resolver los graves problemas económicos de hoy, u otros, no menos graves,

de otra índole, incluidos los de política territorial o de política exterior.³

Pues bien, cuando se tratan como enemigos, los partidos dejan claro que no hay un substrato de comunidad política entre ellos. Si ese comportamiento influye en la ciudadanía, la dividen en bloques comunicados. Si ese comportamiento no influye en la ciudadanía, quizá se deba a que el espectáculo de la división partidista cansa a la población, generando en ella una actitud de desconfianza respecto al conjunto de la clase política.

Llegados a este punto, parece claro que el problema de los políticos, desde el punto de vista del público, no es tanto, o tan sólo, el de sus programas cuanto el de cómo son, el de su modo de ser, sin que ello suponga excesivo descuido de los programas mismos, naturalmente. Es una cuestión de equilibrio. En 2010 preguntamos a los encuestados por su grado de acuerdo con la afirmación de que “en general, es más importante fijarse en el carácter moral, la energía y la inteligencia de los líderes que en el contenido de los programas”. Las respuestas se repartieron por mitades: un 47,7% puso el énfasis en fijarse en cómo eran, y un 49,2%, en atender a sus programas.

Siguiendo por ese camino, les preguntamos por la medida de su acuerdo con la afirmación de que “un país es muy

³ Por ejemplo, en relación con esta última cabe observar cómo, en esa misma encuesta de 2009, hay constancia de que el 65,7% piensa que la influencia de España en el exterior es baja, e incluso hay una ligera mayoría del 49,9% que cree que va a menos. Hay que tener en cuenta, de todos modos, que esta constatación de la poca influencia de España en el mundo puede ser interpretada como indicativa de que la sociedad ve aquí un problema grave de la política exterior española, pero puede serlo así para un segmento de la población y no para otro: no lo sería desde la perspectiva de quienes se sintieran satisfechos con una política exterior de bajo perfil, y, en consecuencia, de bajo coste y de bajo riesgo.

afortunado si cuenta con líderes políticos que asumen la responsabilidad de gobernar y de velar por el futuro de la nación, y son capaces de persuadir al público de cuál es su mejor interés". La pregunta tiene tintes weberianos, siguiendo el hilo de las preocupaciones de Max Weber por personalidades políticas dotadas de visión y energía, pero también de sentido de responsabilidad (de rendir cuentas de sus actos) y capacidad de persuasión (se supone que razonable, pero la cuestión quedaría abierta). El hecho es que un 76% de nuestros encuestados cree que es un país afortunado el que cuenta con ese tipo de líderes.

En todo caso, esa pregunta era el preludio de la siguiente: "¿Cree que España cuenta con muchos, bastantes, pocos o casi ningún político de ese tipo?". Un 82,5% respondió negativamente (un 50,2%, pensaba que había pocos y un 32,3%, casi ninguno), mientras que un 14,5% lo hizo positivamente (un 4,8% creía que había muchos; un 9,7%, bastantes).

En resumen, por debajo de la escasa confianza en el sistema de debate público, y en sus actores organizados, parece latir una desconfianza profunda en el modo de ser, por lo pronto, de los políticos mismos. Cabe inferir de ello que el público piensa que con gentes así los cambios en las instituciones o en los repartos de poder no bastarán para resolver los problemas en curso. Sin embargo, el problema es, en cierto modo, más profundo, o existencial: el público los percibe como políticos que no se comportan como deben comportarse, y no son como deberían ser.

Ahora bien, conviene evitar ser rígidos y demasiado contundentes en esa conclusión. Primero, porque el contexto

de la encuesta es, como ya hemos señalado, el de un régimen democrático que funciona con regularidad desde hace tres décadas, ha sido capaz de resolver bastantes problemas, o al menos de no agravarlos demasiado, y concita el apoyo inequívoco de una población que participa una y otra vez en las elecciones correspondientes, y está dispuesta a volver a votar a los mismos partidos a los que critica, al parecer, acerbamente. Incluso, les sigue otorgando (como es lógico, dado lo anterior) un margen para que aprendan y mejoren.

Segundo, porque una comunidad política no se reduce a la clase política, sino que incluye también a la ciudadanía, la cual tendrá algo que ver con el carácter de sus políticos. Al fin y al cabo, esa ciudadanía les sustenta y les vota, por lo que no es probable que sea tan distinta de ellos. En los capítulos que siguen trataremos de explorar, precisamente, esta cuestión.

RESULTADOS PRINCIPALES DEL CAPÍTULO 8

(2010) POCO O NADA DE ACUERDO CON: "MUCHOS POLÍTICOS, DE TODAS LAS TENDENCIAS, ESTÁN MUY MOTIVADOS PARA RESOLVER LA CRISIS PORQUE ESTÁN SUFRIENDO LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS EN SU VIDA PERSONAL".	76,5
(2010) COMPORTAMIENTO DE LOS POLÍTICOS DEL PARTIDO MÁS PRÓXIMO AL ENTREVISTADO EN SUS DEBATES DENTRO DEL PARTIDO.	
■ Suelen razonar según su criterio y debatir abiertamente.	22,7
■ Tienden a acomodarse a las directrices de sus líderes, casi sin discutirlos.	69,2
(2010) COMPORTAMIENTO DE LOS POLÍTICOS DEL PARTIDO MÁS PRÓXIMO AL ENTREVISTADO CUANDO ESCUCHAN LOS PUNTOS DE VISTA DE POLÍTICOS DE OTROS PARTIDOS.	
■ Suelen estar abiertos a incorporar las ideas más razonables.	15,3
■ Sólo les escuchan para rebatir mejor sus argumentos.	75,8
(2010) MUY O BASTANTE DE ACUERDO CON: "MUCHOS POLÍTICOS, DE TODAS LAS TENDENCIAS, SUELEN DESCALIFICAR A LOS ADVERSARIOS PARA DESVIAR LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO DEL HECHO DE QUE, EN REALIDAD, NO SON CAPACES DE RESOLVER LA CRISIS".	88,4
(2009) EL PSOE Y EL PP SE TRATAN ENTRE SÍ...	
■ Más bien como adversarios políticos.	29,5
■ Más bien como auténticos enemigos.	68,6
(2010) ESPAÑA CUENTA CON POCOS O CASI NINGÚN POLÍTICO QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE GOBERNAR Y DE VELAR POR EL FUTURO DE LA NACIÓN, Y SON CAPACES DE PERSUADIR AL PÚBLICO DE CUÁL ES SU MEJOR INTERÉS.	82,5

9

LA VISIÓN QUE LA CIUDADANÍA
TIENE DE SÍ MISMA

LÍMITES Y POTENCIAL DE LA CIUDADANÍA EN EL MANEJO DE LOS ASUNTOS COMUNES

Ni la economía de mercado ni la democracia liberal pueden funcionar correctamente sin que determinadas virtudes intelectuales y morales estén suficientemente extendidas, tanto entre los políticos y las elites económicas como entre el público en general. En el caso de este último, esas virtudes son precisas cuando se comportan como agentes económicos (empresarios, trabajadores, consumidores, etcétera) y como ciudadanos. Piénsese, por ejemplo, en que la crisis se debe en parte a una falta de prudencia generalizada, incluyendo la de los reguladores y los supervisores del sistema, así como la de los grandes agentes económicos, pero también la de las gentes comunes que se han endeudado por encima de sus posibilidades o se han resistido a reformas necesarias. A su vez, esa prudencia ha de venir conectada con virtudes morales o de carácter como son la de la justicia o el sentido cívico, y la fortaleza y la ecuanimidad necesarias para enfrentarse con situaciones difíciles.

Nos encontramos, pues, abocados a una consideración de los límites cognitivos y morales de unos y otros, po-

líticos o público en general, en términos de cuál sea su carácter o, como se ha llamado en la filosofía moral clásica, su *ethos* propio. Carácter y virtudes van, por lo demás, ligados, puesto que el carácter de las personas en cuestión no es sino el resultado de sus hábitos morales, buenos o malos, virtudes o vicios, que derivan, a su vez, de la índole de sus actos a lo largo del tiempo. En el trasfondo de esta discusión hay, por ello, una “filosofía moral de las virtudes”, más específicamente, por lo pronto, las virtudes llamadas “cardinales”, siguiendo la estela que han marcado en la filosofía anglosajona reciente, sobre todo a partir de los años cincuenta del siglo pasado, figuras como la de Alasdair MacIntyre (1984) o, en lo tocante a la aplicación de esta filosofía al funcionamiento de la economía de mercado, Deirdre McCloskey (2006), pero que a su vez se inscribe en una tradición mucho más antigua, que combina el pensamiento clásico y el pensamiento cristiano medieval, y que, en el caso de España, recibe un nuevo impulso, en los años cuarenta y cincuenta de ese mismo siglo, con la escuela de Javier Zubiri y de José Luis López Aranguren (1958).

Así pues, a la hora de entender la lectura que el público puede hacer de sus límites y de su potencial para entender y manejar la situación, recurrimos a un esquema simplificado de la estructura de su carácter moral, atendiendo al despliegue de su virtud de la prudencia y de las otras virtudes de carácter (sin que, por otro lado, pretendamos tratar aquí ampliamente un tema que desborda el objeto preciso de este trabajo).¹

¹ Véase al respecto Pérez-Díaz y Rodríguez (2010).

Terminamos, pues, este *tour d'horizon* de la visión que el público tiene de la situación girando 180 grados el objetivo de la cámara, de manera que enfoque al sujeto en cuestión. El público nos proporciona abundantes indicios de cómo se ve a sí mismo de dos maneras: primero, cuando los encuestados responden a preguntas del tipo “cómo cree usted que es el público”, y segundo, cuando responden a preguntas sobre ellos mismos, sobre lo que hacen o cómo se comportan. La combinación de ambos tipos de preguntas nos proporciona el equivalente de una imagen autorreflexiva del público. De todos modos, precisaremos a cada momento lo que corresponde a la visión de sí mismos y lo que se proyecta sobre el público en general. Por otro lado, es obvio que sería conveniente contrastar esta imagen con lo que sabemos de la conducta efectiva del público, pero esto ha de quedar para otra ocasión.

Para empezar con lo relativo a lo que podemos llamar el grado de inteligencia cívica del público, los encuestados nos muestran una imagen un tanto ambigua. Cuando hablan de ellos mismos, en la encuesta de 2009, parecen sentirse poco informados acerca de la crisis (véase capítulo 3), pero en 2010 una proporción notable (56,5%) cree tener una idea lo bastante clara de los riesgos principales de nuestra economía como para fijarse en dos o tres asuntos a la hora de informarse.

Las cosas son, en parte, diferentes cuando cambia su perspectiva y pasan a referirse al público en general. En

la encuesta de 2009, un 55,5% pensaba que las familias entendían bien las causas de la crisis: un porcentaje superior al de los que creían que el gobierno las entendía bien (44,1%), pero inferior al de quienes atribuían ese entendimiento a los empresarios (70,5%).

Sin embargo, cuando se les pregunta por el grado en que la mayoría de la gente está dispuesta a dedicar tiempo a enterarse de las políticas económicas, un 71,6% piensa que está poco o casi nada dispuesta, frente a un 24,8% que la ven como muy o bastante dispuesta. Y cuando se les pregunta por el grado en que la mayoría de la gente está dispuesta a reflexionar sobre las razones a favor o en contra de tales políticas, las respuestas, digamos, negativas vuelven a ser mayoritarias, ascendiendo a un 64,2%, frente al 30,7% de respuestas positivas. No parece que atribuyan al público en general una notable disposición a emplear tiempo en la búsqueda de información o a razonar, siquiera consigo mismos. La mayoría de la gente no está dispuesta a buscar información o a reflexionar, pero la mayoría de las familias (esto es, la gente) entiende bien las causas de la crisis. Quizá no haga falta tanta información para entenderlas.

Tampoco les parece a los encuestados que la gente esté dispuesta a razonar discutiendo con quienes mantienen posiciones distintas a las propias de entrada. En efecto, en 2010 un 69,8% está de acuerdo con la frase “cuando se habla de política, la gente tiende a evitar las conversaciones con personas de ideas políticas diferentes y a conversar con quienes piensan de manera similar”, mientras que sólo un 28,5% está en desacuerdo. De reflejar ese juicio la realidad del público español, éste tendería a emular a sus partidos políticos de referencia en la práctica

de la cerrazón a las razones de los otros; con la diferencia de que, al menos, los políticos de un partido escuchan a los de otros partidos aunque sólo sea para rebatirlos, mientras que, aparentemente, la ciudadanía se ahorraría incluso el esfuerzo de escuchar. Quién eduque a quién en la tarea de no escuchar con cierta apertura de espíritu al prójimo es una buena pregunta, que por ahora dejamos sin respuesta. De ser cierto el juicio de los encuestados, estaríamos, en cualquier caso, ante una experiencia propicia para la difusión del pensamiento grupal (*group-think*).

Puestos a sugerir sendas para una exploración ulterior de este problema, cabe sugerir que tal vez los juicios del público estén arraigados en ciertas experiencias de la vida cotidiana, y sean reforzados por ellas. Es posible que bastantes ciudadanos experimenten una sensación de fatiga creciente cuando se involucran en discusiones políticas con quienes piensan distinto de ellos. Quizá la falta de hábito o los malos hábitos de la conversación en esta materia hagan que se pase rápidamente a la práctica de poner etiquetas o al cuestionamiento de los motivos de los contradictores del momento. En el fondo de esos hábitos puede haber un fenómeno de *group-think*, de mostrar que se pertenece a un grupo u otro, quizá al grupo dominante, en el espacio de conversación de que se trate. También puede operar el factor complementario de cierta inseguridad en los propios juicios, sobre los que las gentes han reflexionado con ligereza y sin mucha información previa, y traten de compensar su inseguridad con un exceso de dogmatismo verbal, o con la apelación a una doctrina o una ideología que parece tener cierta *auctoritas* por sí misma, cierta aura mágica, y, al mismo tiempo, per-

mite reducir el coste de la reflexión: no sería preciso el esfuerzo de pensar si basta con repetir lo que ya han pensado otros.

En estas circunstancias se puede prescindir de persuadir al contrario, porque basta con contradecirlo y aparentar refutarlo; o se puede intentar hacerlo, pero, en ese caso, se descubre, pronto, que, en esas circunstancias y con esos métodos es poco menos que imposible. La reiteración de esas experiencias dejaría el poso de una suerte de lección acerca de la inutilidad del esfuerzo. En este caso, las gentes pueden llegar a la conclusión de que no tiene sentido seguir intentando algo que “en el fondo ni te va ni te viene”. La discusión política se convertiría así en algo que hacen los políticos o los tertulianos que se dedican a esas cosas como parte de su oficio.

El público parece vagamente consciente de que estas prácticas abocan a una decisión final de votar por unos u otros que está cargada de algunas razones, pero no de muchas. Quizá por eso un 78% de los encuestados afirman estar de acuerdo con la afirmación de que “los electores suelen dejar de votar a los políticos cuando las cosas van mal, y votarles cuando van bien, pero en realidad no suelen entender muy bien si esos políticos son los verdaderos responsables de que hayan ido bien o mal” (frente a un 20,4% de encuestados que muestran su desacuerdo con esa afirmación). Una amplia mayoría del público interpretaría así el voto del electorado en los términos de lo que se ha llamado “un voto retrospectivo” (Murakami 2008), lo que sugiere atribuir al electorado un escaso esfuerzo de interpretación de las causas de la situación en la que se encuentra.

Evidentemente, no todo consiste en debatir o razonar. Hacer política es algo más que pensar en política o hablar de política; consiste en tomar decisiones, apoyarlas o combatirlas. Todo ello requiere virtudes morales (no sólo intelectuales) que, en su aplicación a la política, podemos llamar virtudes cívicas.

Por lo pronto, es preciso cierto grado de fortaleza, persistencia y coraje para tomar una decisión, con riesgos, y llevarla adelante. Al respecto, el tono general de las respuestas del público, a pesar de sus contenidos críticos y preocupados, es esperanzado. Ya hemos visto que no se cuestionan instituciones básicas como la economía de mercado o la democracia liberal.

Además, es mayoritaria la esperanza de que muchos actores, prácticamente todos, aprenderán de la crisis económica. En 2009, un 56,7% creía que, tras la crisis, los políticos sabrían afrontar mejor los problemas económicos futuros (un 38,3% no lo creía), un 70,8% creía lo mismo de las asociaciones empresariales (un 26% no) y un 58,7% lo esperaba de los sindicatos (un 37,8% no lo esperaba). Asimismo, una amplísima mayoría, del 78,6%, creía que habría mejorado la comprensión de los problemas económicos que tiene el público en general.

Ese optimismo parece corroborado por las respuestas a una pregunta de la encuesta de 2010 sobre la medida de su acuerdo con la afirmación de que “conviene ser optimista incluso cuando parece que no hay buenas razones para ello”. La frase suena un poco dramática, y, tomada literalmente, sugiere un optimismo irracional;

pero hemos confiado en que lo normal sería entenderla, coloquialmente, como una invitación a adherirse al optimismo de, digamos, un “sí, podemos” (“yes, we can”), uno de los *slogans* de moda en la política occidental de estos años. Un 77,4% es receptivo al atractivo del *slogan* y muestra su acuerdo con la frase propuesta.

Sin embargo, conviene añadir una dosis de escepticismo ante este optimismo declarado a la vista de la evidencia, ya examinada, acerca de la gran abundancia entre los españoles de los que se identifican con la definición de una persona extremadamente ansiosa de seguridad. De ser cierta esa identificación, los españoles seríamos poco proclives a arrostrar riesgos, ciertamente. Lo cual, por lo demás, parece corresponder con el tono general del país y lo que sabemos de su tendencia a mantener el statu quo, y de su dificultad para adoptar reformas de cierto calado; pero es obvio que no podemos entrar a discutir a fondo este tema ahora.

Pero si importa la fortaleza y la capacidad para tomar decisiones comprometidas, cuando toca, tanto o más importa cierto sentido de la justicia y de la comunidad. Combinadas, todas ellas constituirían la virtud cívica por excelencia.

Hay muchas formas de acercarse a la observación de esa virtud. Nosotros hemos optado por una de ellas. Por lo pronto, parece que “lo justo” es hacer bien el trabajo que haya que hacer, lo cual combina el cultivo de la inteligencia, el saber hacer, con el ejercicio de benevolencia que implica hacer algo que sirve a los demás, que lo demandan, supuestamente, porque lo necesitan. Un mundo de gentes descuidadas en su trabajo es un mun-

do de gentes desajustadas, e injustas, que desordenan el funcionamiento del conjunto, o sólo permiten un orden inferior. Preguntados los encuestados de 2010 si dirían que, en general, la mayoría de la gente en España suele procurar hacer muy bien su trabajo o suele hacer su trabajo sólo para cumplir, el 69% responde que lo hacen sólo para cumplir, y un 26%, que procuran hacerlo lo mejor posible.

La censura, quizás autocensura, parece bastante rotunda, y se complementa con otra, de no menor rotundidad. Para que una sociedad funcione con cierto espíritu de justicia recíproca, se supone no sólo que las gentes deben hacer las cosas bien (es decir, proporcionarse los servicios mutuos que les conectan práctica, moral y emocionalmente), sino que también han de encontrar el reconocimiento que merecen por sus actos, al menos grosso modo y con suficiente frecuencia. A los encuestados de 2010 les pedimos que optasen entre dos frases alternativas por la que mejor describe lo que ocurre en España. La gran mayoría, un 76,7% eligió la frase según la cual el éxito de los demás despierta recelo y se tiende a no reconocerlo, a pesar del esfuerzo que pueda suponer. Una exigua minoría, del 18,6%, optó por la que afirmaba que se suele reconocer el esfuerzo de los demás y premiarlo con el éxito.

Esta lectura de las cosas podría verse corroborada indirectamente por la respuesta a otra pregunta sobre qué es lo más importante para llegar a ser rico. Para el 56,6% la respuesta radica en tener buenos contactos y cultivarlos, para el 19,8%, en tener suerte, y para el 17,8%, digamos que “el mérito” de tener buenas ideas y esforzarse en aplicarlas.

Obviamente, si esta descripción de la situación en España es correcta, tendrá consecuencias muy negativas para el funcionamiento de una economía de mercado, que requiere la continua aplicación de reglas de juego de competencia leal y de cooperación leal. Dichas reglas no se pueden aplicar sólo ni principalmente desde fuera, sino, sobre todo, desde dentro, es decir, tienen que estar interiorizadas en la población y configurar sus hábitos de conducta. En España, según parece, los hábitos serían los contrarios. También son obvias las dificultades derivadas de un estado de cosas tal para resolver la crisis económica y para hacer funcionar debidamente el sistema de debate, decisión y gestión atinente a la solución de la crisis.

¿Supone todo esto una actitud de cierta reticencia a la hora de confiar en los demás, colaborar con ellos e implicarse en una vida asociativa? Lo cierto es que sí, hasta cierto punto. En la encuesta de 2009, preguntamos a los encuestados si creían que “en general se puede confiar en la mayoría de la gente” o, más bien “nunca se es lo suficientemente prudente al tratar con los demás”. Un 37,2% respondió que se podía confiar, mientras que un 61,1% contestó que nunca se es lo suficientemente prudente. Se trata de una pregunta clásica en las encuestas de valores españolas e internacionales. Al respecto cabe recordar que las proporciones de “confiados” y “desconfiados” en España se han mantenido bastante estables en los últimos treinta años, a pesar de los cambios políticos y económicos que han tenido lugar (Pérez-Díaz y Rodríguez 2010: 98).

La confianza genérica en España, medida así o de manera similar, tiende a situarse en niveles medios o medio-bajos, según la encuesta, al compararla con la de los demás países de la Unión Europea. La Encuesta Social Europea plantea

esa pregunta solicitando al entrevistado situarse en una escala del 0 ("nunca se es lo bastante prudente") al 10 ("se puede confiar en la mayoría de la gente"), de modo que podemos calcular la media de cada país en dicha escala. La de España en la 4ª ola de dicha encuesta, correspondiente a 2008/09, es 4,94, lo que la sitúa en el 8º puesto de los 21 países de la UE con datos en la encuesta. Casi todos los países con datos mejores que el español pertenecen a lo que antes se denominaba UE15, destacando los países nórdicos por sus mejores puntuaciones (Dinamarca, 6,92; Finlandia, 6,45, y Suecia, 6,35).²

En 2009 y 2010 también formulamos una pregunta sobre pertenencia a alguna asociación voluntaria (ONG, religiosa, cultural, deportiva, juvenil, de consumidores, empresarial, profesional o de otro tipo). Los resultados fueron tasas relativamente bajas de pertenencia a asociaciones, del 31,7% en 2009 y del 30,6% en 2010. La participación de los españoles en este tipo de círculos de sociabilidad no destaca por un nivel alto en términos comparados. De nuevo nos permite la comparación la Encuesta Social Europea que, en su 1ª ola, correspondiente a 2002, plantea al entrevistado si pertenece a alguna asociación de una lista de 11. Puede calcularse el número de asociaciones al que pertenece cada entrevistado y, a partir de él, la media de cada país. Entre los 18 países de la UE con datos, ordenados de mayor a menor, España ocupa el 13º puesto, con una media de 0,67, bastante alejada de las primeras posiciones, una vez más ocupadas por dos países nórdicos (Suecia y Dinamarca, ambos con una media de 2,41), con la ausencia de Finlandia.³

² Fuente: elaboración propia con el fichero de datos brutos de la Encuesta Social Europea, 4ª ola.

³ Fuente: elaboración propia con el fichero de datos brutos de la Encuesta Social Europea, 1ª ola.

La reducida implicación en círculos de sociabilidad de escala pequeña o media, como las asociaciones, parece repetirse a una escala más amplia. Es cierto que los españoles votan, y que muchos votan al mismo partido habitualmente, como ya hemos visto. Sin embargo, cuando se les pregunta por su interés por la política sólo el 41,3% indica que le interesa mucho o bastante, mientras que un 58,5% afirma que le interesa poco o nada.

En realidad, aun teniendo en cuenta que nuestra muestra no incluye a individuos de más de 75 años, que suelen mostrar un menor interés por la política, el dato del 41,3% es relativamente alto para los estándares españoles, que llevan moviéndose en el entorno del 30% desde la transición democrática (Pérez-Díaz y Rodríguez 2010: 130). Cabe pensar que, como en otras coyunturas graves, ese interés ha repuntado ligeramente.

Por último, las respuestas a otra pregunta sobre la participación cívica añaden matices importantes y puede suscitar algunos interrogantes sobre el carácter del interés por la política. En 2010 formulamos la siguiente pregunta: “La mayoría de la gente suele votar pensando tanto en su propio interés como en el bien común. En general, ¿cuánto pesa el bien común en el voto de la gente?”. Obviamente, no se trata de pesar con precisión la dosis del sentido de lo común que contenga el voto de cada ciudadano o la ciudadanía en general, sino de utilizar las respuestas como estimaciones gruesas de una distribución de intereses, referidas al público, que los encuestados imaginan que existe a su alrededor, y del que forman parte.

Para un 30,7% el peso del bien común en los motivos del voto de la gente es inferior al 25%, y el 15,8% piensa que

se sitúa, más bien, "entre el 25 y el 50% ". En conjunto, para un 46,5% el interés común no llega al 50%. En el extremo opuesto, un 12,9% cree que el bien común pesa "un 75% o más", y un 11,2%, que pesa "entre el 50 y el 75% ". En total, para un 24,1% el bien común pesa más de la mitad en la motivación del voto de la gente. En medio, un 26% cree que el interés común y el particular pesan lo mismo. La estimación media del peso del interés común que se obtendría asignando valores medios a los intervalos sería del 42%.

Como un vaso medio lleno o medio vacío, ese mundo puede ser leído de varias formas. Quizá como uno que se queda demasiado corto de civismo, o quizá como uno que se sitúa en torno a un estado de equilibrio entre el interés común y el interés particular. Parece, más bien, que el equilibrio está un tanto descompensado a favor del interés particular, como vamos a ver, pero la cuestión del grado puede ser importante: ¿lo es en exceso? o ¿tal vez lo sería, en exceso, si los estándares de civismo fueran más exigentes?

Que el equilibrio de los intereses se logre quedando claro que hay un bien común por realizar o conseguir es importante, y en especial lo es en un momento de crisis. Sin embargo, otro indicio nos hace ser todavía más precavidos al respecto. Nos referimos a una de las enseñanzas que, a decir de nuestros entrevistados en 2009, habrían extraído los españoles de la crisis. Un 25,8% creía que los españoles serían más solidarios con los demás, mientras que una amplia mayoría, el 66%, creía que serían más propensos a ir cada uno a lo suyo. Es decir, lo que esperaban, aparentemente, es que el peso del bien común cediera en beneficio del interés propio.

Siguiendo esta senda entraríamos en un terreno complejo y accidentado de debate moral, en el que se puedan aducir razones para armonizar uno y otro interés, o mencionar al interés propio bien entendido que incluye el interés común, y se hagan otras sabias disquisiciones. A los efectos de nuestra discusión, y en el terreno que hemos escogido, el del discurso habitual del público ordinario, la contraposición tiene su margen de validez, y es indicativa del nivel de virtud cívica de la población en cuestión. Si España es y quiere seguir siendo una comunidad política, y enfrentarse como tal a un problema común como el de la crisis económica, con el aditamento de otro problema relacionado con él y también común, el de los graves defectos de su sistema de debate, decisión y gestión de la crisis, más vale que tenga un robusto sentido de lo común, o lo refuerce.

Para terminar, baste señalar que dicha necesidad es tanto mayor cuanto que, por debajo de todas las opiniones anteriores, tenemos lo que parece ser un país sin rumbo. En la encuesta de 2009, un 58,5% pensaba que, teniendo en cuenta la situación general del país, nos movíamos por un camino equivocado, y sólo un 30,5% creía que las cosas iban en la dirección correcta. En 2010, a pesar de todas las medidas adoptadas, se repitió el diagnóstico casi al milímetro: un 58,7% seguía pensando que el camino era el equivocado; un 25,9% creía que era el correcto.

Además, y sirva ello de colofón a esta discusión, ese haber perdido el rumbo tiene lugar en el contexto de un mundo que muchos perciben como cada vez más complejo y difícil de entender. En efecto, ante la frase “comprender la crisis actual servirá de algo, pero no de mucho, para prevenir crisis futuras, porque la economía es cada vez

más compleja”, mostró su acuerdo un 57,5%, mientras que el 41% mostró su desacuerdo.

Las implicaciones de estar de acuerdo con una frase semejante son varias. Ese acuerdo puede ser entendido como un paso adelante en el camino de reconocer los límites del conocimiento humano en asuntos tan complejos como el de un orden espontáneo o cuasi espontáneo que permite coordinar, en gran medida, y siempre en un proceso de desequilibrio y reequilibrio incesantes, centenares de millones de decisiones autónomas, a cada momento. Reconocer la incertidumbre y la complejidad de un mundo así puede significar un paso adelante en el camino de la sabiduría. Pero también puede provocar un profundo desconcierto, del que se quiera escapar mediante la apelación a ideologías simplistas, líderes presuntamente carismáticos y masas apasionadas a la busca de un chivo expiatorio (de todo lo cual se han dado tantos ejemplos en la vida política moderna), con su cortejo de violencias diversas.

En definitiva, estamos ante una situación delicada, en la que más vale que por lo menos cada uno ponga su casa en orden. Que un país como España, por ejemplo, lo haga. Que se entere de los problemas, que razone, que maneje su crisis con prudencia, que mejore su sistema de debate, decisión y gestión, que su clase política mejore, razone, haga que sus partidos se traten mejor entre sí, que el público haga sus deberes de ejercicio de su inteligencia y de civismo. En fin, esas cosas básicas.

RESULTADOS PRINCIPALES DEL CAPÍTULO 9

(2009) CREEN QUE DIVERSOS ACTORES ENTIENDEN BIEN LAS CAUSAS DE LA CRISIS.	
■ Familias.	55,5
■ Gobierno.	44,1
■ Empresarios.	70,5
(2010) CREEN QUE LA MAYORÍA DE LA GENTE ESTÁ POCO O NADA DISPUESTA A...	
■ Dedicar tiempo a enterarse de las políticas económicas.	71,6
■ Reflexionar sobre las razones a favor o en contra a la hora de apoyar una política u otra.	64,2
(2010) MUY O BASTANTE DE ACUERDO CON: "CUANDO SE HABLA DE POLÍTICA, LA GENTE TIENDE A EVITAR LAS CONVERSACIONES CON PERSONAS DE IDEAS POLÍTICAS DIFERENTES Y A CONVERSAR CON QUIENES PIENSAN DE MANERA SIMILAR".	
	69,8
(2009) CREEN QUE, UNA VEZ ACABADA LA CRISIS ACTUAL, DIVERSOS ACTORES SABRÁN AFRONTAR MEJOR LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS FUTUROS.	
■ La clase política española.	56,7
■ Los líderes sindicales.	58,7
■ Las asociaciones empresariales.	70,8
(2009) CREEN QUE, UNA VEZ ACABADA LA CRISIS ACTUAL, HABRÁ MEJORADO LA COMPRENSIÓN DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS QUE TIENE EL PÚBLICO EN GENERAL.	
	78,6
(2010) MUY O BASTANTE DE ACUERDO CON: "CONVIENE SER OPTIMISTAS INCLUSO CUANDO PARECE QUE NO HAY BUENAS RAZONES PARA SERLO".	
	77,4
(2010) COMPORTAMIENTO DE LA MAYORÍA DE LA GENTE EN ESPAÑA AL HACER SU TRABAJO.	
■ Suele procurar hacerlo muy bien.	26,0
■ Suele hacerlo sólo para cumplir.	69,0
(2010) OPCIÓN ENTRE DOS FRASES SOBRE EL ÉXITO Y EL ESFUERZO EN ESPAÑA.	
■ Se suele reconocer el esfuerzo de los demás, y premiarlo con el éxito.	18,6
■ El éxito de los demás despierta recelo y se tiende a no reconocerlo, a pesar del esfuerzo que pueda suponer.	76,7
(2010) EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA, LO MÁS IMPORTANTE PARA LLEGAR A SER RICO ES...	
■ Tener buenas ideas y esforzarse en aplicarlas.	17,8
■ Tener buenos contactos y cultivarlos.	56,6
■ Tener suerte.	19,8

RESULTADOS PRINCIPALES DEL CAPÍTULO 9

(2009) CONFIANZA EN LA GENTE.

■ Se puede confiar en la mayoría de la gente.	37,2
■ Nunca se es lo suficientemente prudente al tratar con los demás.	61,1

PERTENENCIA A ALGUNA ASOCIACIÓN VOLUNTARIA (ONG, RELIGIOSA, CULTURAL, DEPORTIVA, JUVENIL, DE CONSUMIDORES, EMPRESARIAL, PROFESIONAL O DE OTRO TIPO).

■ 2009.	31,7
■ 2010.	30,6

(2010) CUÁNTO CREEN QUE PESA EL BIEN COMÚN EN EL VOTO DE LA GENTE.

■ Más del 50%.	24,1
■ Alrededor del 50%.	26,0
■ Menos del 50%.	46,4

(2009) CUANDO HAYAMOS SALIDO DE LA CRISIS, LOS ESPAÑOLES SERÁN...

■ Más solidarios con los demás.	25,8
■ Seguiremos igual (No leer).	4,7
■ Más propensos a ir cada uno a lo suyo.	66,0

LAS COSAS EN ESPAÑA VAN POR UN CAMINO EQUIVOCADO.

■ 2009.	58,5
■ 2010.	58,7

(2010) MUY O BASTANTE DE ACUERDO CON: "COMPRENDER LA CRISIS ACTUAL SERVIRÁ DE ALGO, PERO NO DE MUCHO, PARA PREVENIR CRISIS FUTURAS, PORQUE LA ECONOMÍA ES CADA VEZ MÁS COMPLEJA".

10

UN ELECTORADO POCO
POLARIZADO QUE NO PIDE
DRAMATIZACIONES FICTICIAS

LA PREGUNTA SOBRE EL CONTEXTO PRE-ELECTORAL DEL DEBATE EN CURSO

Decíamos en el primer capítulo que nos parecía conveniente tener en cuenta el contexto político del debate en curso, puesto que el público mismo, y las elites, por supuesto, lo están teniendo cada vez más en cuenta. Están cerca las elecciones locales y autonómicas, y las generales, en principio, se celebrarán en poco más de un año, si es que su convocatoria no se anticipa, como otros gobiernos socialistas han solido hacer en el pasado.

La evolución de las estimaciones de voto publicadas hasta ahora sugiere una tendencia clara a un cambio de gobierno. Sin embargo, (y salvo un tsunami económico, que nunca debe descontarse del todo) como ya hemos señalado, la cuestión permanecerá abierta hasta el último momento, si nos enseñan algo las experiencias de las elecciones de 1993, 1996 ó 2004, por ejemplo, en las que distancias en las estimaciones de voto de los dos grandes partidos relativamente grandes se estrecharon o invirtieron su signo en el último momento.

En cualquier caso, sólo caben dos posibilidades, la de un gobierno del PSOE o la de un gobierno del PP. La pregun-

ta que intentamos responder con nuestras dos encuestas es si a esa disyuntiva, aparentemente tan nítida, corresponden dos electorados cuyas diferencias de opinión y de actitud en lo que se refiere a los asuntos tratados en este libro, es decir, al manejo de la crisis económica, el marco conceptual consiguiente, el funcionamiento del sistema de debate y gestión de la crisis, el carácter de los políticos, son igualmente nítidas, o no tanto. Nuestra conclusión es que no lo son tanto, como vemos a continuación. A ello añadimos un comentario sobre un posible mensaje implícito en algunas de las respuestas de los encuestados a sus partidos de referencia.

UN PRIMER MENSAJE: UN MUNDO DIFERENCIADO SÓLO A MEDIAS

No intentamos ahondar en la materia más allá de una ilustración del argumento general. Pero lo primero que queda relativamente claro del análisis de las dos muestras consideradas es que si comparamos los grupos de quienes votaron al PSOE y al PP en 2008 nos encontramos con dos electorados bastante parecidos según su composición por edades, sexos, niveles educativos y niveles de ingresos.¹ Por ejemplo, según declaran en la encuesta de 2010, ganan menos de 900 euros al mes el 11,6% de los votantes del PSOE y el 13,2%, de los del PP; entre 900 y 1.800 ganan el 49,5% entre los del PSOE y el 45,4% entre los del PP; y por encima de 1.800 se sitúan el 36,7% de los del PSOE y el 38,3% de los del PP. Les diferencian algunos matices que serían relevantes, incluso mucho,

¹ Todas las comparaciones de este capítulo proceden de la encuesta de 2010.

para otro tipo de averiguaciones, pero no presentan diferencias sustantivas respecto a las variables que podemos denominar estructurales.

La diferencia cultural más acusada, y lo es en muy alto grado, se refiere al sentimiento religioso, que es mucho más fuerte en el electorado del PP que en el del PSOE, pues en el primero un 51,6% se declara muy o bastante religioso, algo que ocurre sólo en el 20,1% del segundo. Esta diferencia sí podría ser muy relevante para el tipo de programa de investigación en el que se sitúa este estudio, que es el de comprender mejor los factores culturales e institucionales de los procesos sociales, en general, y desde luego los de índole económica o política; pero su consideración aquí desbordaría el objeto específico y el nivel de análisis que nos hemos propuesto en esta circunstancia.

Esto supuesto, comparamos la posición de ambos electorados en una selección de los temas principales que hemos tratado en el libro. Comenzando con los temas de identificación partidista, la coherencia más elemental hace que los votantes del PSOE tengan una visión más favorable (o menos desfavorable) de su partido que del contrario, y viceversa en el caso de los del PP. No puede extrañar, por ejemplo, que sean menos críticos del gobierno actual que los votantes del PP, pero, con todo, lo son bastante. Hasta el punto de que son incluso más los votantes del PSOE que no creen en que "su" gobierno esté gestionando bien la crisis que los que opinan lo contrario, y son más quienes opinan que "su" líder no sabe muy bien de lo que habla cuando habla de economía que lo contrario. Curiosamente, casi ocurre otro tanto con los votantes del PP, que si bien confían mucho más que los

del PSOE en la posible gestión pública de “sus” líderes, tampoco parecen creer mucho en sus conocimientos. De manera que a los electorados de dos partidos tan diferentes les une un trazo común de cierta distancia respecto a sus propios dirigentes.

Los datos son, a estos efectos, bastante elocuentes. Ambas encuestas arrojan resultados similares, por lo que nos limitamos a la de 2010. Según ésta, el 61,5% del electorado del PSOE no cree que el gobierno esté gestionando bien la crisis, y el 49,4% cree que el Presidente del Gobierno sabe poco o casi nada de lo que habla cuando habla de economía (un 47,4% opina lo contrario). Los votantes del PP tienen una visión más positiva de sus propios líderes, pero hay en su censo minorías críticas, o autocríticas, bastante apreciables: un 23,3% cree que, de llegar al poder, el PP no manejaría la crisis mejor que el gobierno actual, y un 35,9% cree que el líder de la oposición sabe poco o casi nada de economía (un 60,5% opina lo contrario).

¿Tienen el mismo grado de información sobre lo que ocurre y perciben la crisis de la misma manera? No del todo. Los del PP dicen sentir con más acuidad los efectos negativos de la crisis. Les afecta más la crisis, aparentemente. Entre los del PP hay más que dicen que su situación financiera empeoró el año pasado que entre los del PSOE (56,4 y 43,5%, respectivamente), y también son más en el PP los que esperan que la situación financiera de su hogar empeore el año próximo (33,4 y 19,1%, respectivamente).

Quizá su mayor pesimismo esté afectado por una lectura más crítica de la situación política. Sin embargo, quizá

por ser algo más sombríos en su apreciación de las circunstancias están un poco más alerta que los votantes del PSOE. Por lo pronto, quizá sean más los que creen tener una idea clara de los riesgos de nuestra economía y, por ello, procesen mejor la información (63,3% frente al 51,7% de los del PSOE). De hecho, quizá se percataran más de la crisis financiera de mayo del 2010: había oído o leído una noticia al respecto el 62% de los votantes PP, pero sólo el 48,2% de los del PSOE.

El marco conceptual de lo que está ocurriendo tampoco es muy diferente en ambos electorados, aunque son reseñables algunos matices. El apoyo a una economía de mercado es más firme entre los votantes del PP, pues un 78,8% de ellos es partidario de una economía libre de mercado, frente a un 55,8% de los votantes del PSOE, entre los cuales, un 29,3% estaría a favor de una economía dirigida por el gobierno. La reticencia frente a las “grandes empresas” es algo más acusada entre los votantes del PSOE, pero es ampliamente mayoritaria también entre los votantes del PP: un 80,7% y un 66,3%, respectivamente, creen que a las grandes empresas sólo les preocupa tener beneficios y no mejorar el servicio o la calidad para sus clientes.

La propensión de los votantes del PP a expandir el campo de actuación del estado es también algo menor, lo que podría ser coherente con una mayor presencia en aquéllos de una visión comunitaria o pro sociedad civil a la hora de reformar la enseñanza o la sanidad públicas. Un 78,6% de los votantes del PP cree que sería una buena idea que hubiera centros públicos de enseñanza gestionados por profesores independientes en colaboración con asociaciones de padres; el 63,9% de los votantes del

PSOE piensa lo mismo. Y un 65,5% de los votantes del PP aplica un criterio análogo a los centros de salud y hospitales públicos, algo que sólo hace el 43,8% de los votantes del PSOE. Tal vez haya aquí ecos de una visión tradicional de la subsidiaridad del estado, y la equiparación de éste, quizá, con el equivalente a una sociedad civil; quede el tema simplemente apuntado. En cualquier caso, una vez más, los acuerdos de fondo son sustanciales entre los dos electorados, aunque se observan matices que indican sensibilidades distintas.

A la hora de interpretar las causas de la crisis y los posibles remedios, las diferencias, de nuevo, son menores. Albergan parecidas reservas mentales y emocionales respecto a cómo afrontar el salvamento del sistema financiero, y censuran mayoritariamente que los bancos no den suficientes créditos (un 80,4% de los votantes del PSOE; un 79,4% de los del PP). Consideran prioritario reducir el déficit público (71,7 y 83%, respectivamente). Para conseguirlo, ambos electorados se resisten claramente a reducir el gasto social (72% y 65,1%), pero aceptan recortes en el gasto del personal de las administraciones públicas (71,8 y 73%). Sin embargo, entre los del PP son más (91,7%) los que se resisten a subir los impuestos, aun siendo también mayoría clara entre los del PSOE (71,7%). También es algo mayor la disponibilidad de los votantes del PP a abordar medidas de reforma laboral, o, para ser más exactos, a no oponerse demasiado a ellas. En realidad, ambos electorados probablemente compartan la dificultad para comprender la conexión entre la solución a un problema de creación insuficiente del empleo con los rasgos de una regulación del mercado laboral demasiado rígida.

Son menos los votantes del PP que se resisten a abordar una reforma de la negociación colectiva que la adapte más a las circunstancias de cada empresa: la aceptaría un 40%, pero sólo lo haría un 23,7% de los del PSOE. Quizá en concordancia, la visión del sindicalismo que tienen los primeros es más crítica. De hecho, un 45,4% de los votantes del PP cree que la influencia de los sindicatos en las medidas del gobierno contra la crisis ha sido negativa, opinión que sólo comparte el 24,4% de los votantes del PSOE.²

MÁS QUE UN MANDATO, UNA LLAMADA DE ATENCIÓN A LA CLASE POLÍTICA

Todo lo anterior, en conjunto, no configura mandatos nítidamente divergentes, porque no emerjan así de cada electorado o porque no repitan los mensajes procedentes de los partidos a los que dieron su voto. Si ocurriera esto último, se podría suponer que el electorado utiliza una heurística de partido político, es decir, que confía en los mensajes y, en general, el liderazgo del partido al que vota para orientarse acerca de los problemas políticos. De este modo, su pesimismo, o su visión de la economía, o sus ideas sobre las causas de la crisis o las medidas para resolverla se originarían, en buena medida, por influencia del partido en cuestión.

Sin embargo, es poco probable que suceda así, porque la *auctoritas* de la clase política en la sociedad parece bastante modesta, a la vista de los resultados de nuestras encuestas. A las diferencias entre los electorados del

² El porcentaje de quienes creen que la influencia sindical ha sido positiva es mínimo en ambos electorados (7,6 y 10,5%, respectivamente), y la mayoría (un 58,6%) de los votantes del PSOE cree que dicha influencia no ha sido relevante (un 41% en el caso de los votantes del PP).

PSOE y del PP subyace una notable similitud en la manera de estar ante la cosa pública, y ante la clase política en particular. Por un lado, su interés por la política es parecido, y hoy relativamente alto, para los estándares habituales en España (un 46,4% de los votantes del PSOE y un 50,7% de los del PP manifiestan tener mucho o bastante interés en la política), y su grado de asociacionismo es semejante (pertenecer a alguna asociación el 25,9% de los votantes del PSOE y el 28% de los del PP). Por otro lado, comparten una visión similar del público español en aspectos importantes de la vida social, como el creer que la mayoría de la gente hace su trabajo sólo para cumplir (lo cree un 66,1% de los del PSOE, y un 69,5% de los del PP), o el creer vivir en un país en el que no se reconoce el éxito de los demás, aunque implique esfuerzo (76,8 y 79,7%, respectivamente). Semejante es también la escasa disposición que atribuyen a la gente a hablar de política con quienes tienen ideas diferentes: un 72,8% de los votantes del PSOE y un 75,7% de los del PP creen que la gente evita ese tipo de conversación.

Centrando la atención en la clase política, tampoco difieren mucho en su lectura, aparentemente desencantada o desconectada, de esa clase, a la que parecen admirar poco. Un 78,5% de los votantes del PSOE y un 84,3% de los votantes del PP creen que los “líderes políticos que asumen la responsabilidad de gobernar y de velar por el futuro de la nación, y son capaces de persuadir al público de cuál es su mejor interés” son “pocos o casi ninguno”.³ Ambos electorados ven a esa clase política como alejada

³ Como ya hemos señalado antes, la frase es un poco barroca, pero podrían no haberla contestado con tanta rotundidad: la ausencia de respuesta se reduce al 0,7% entre los votantes del PSOE y a un 0% entre los del PP.

de las preocupaciones cotidianas de los votantes, pues, por ejemplo, mayorías amplísimas (78,1 y 74%, respectivamente) no creen que muchos políticos estén muy motivados para resolver la crisis, por no estar sufriendo las consecuencias de la crisis económica en su vida personal. La ven asimismo poco capaz de dar buenas razones de su actuación en materia económica, como apuntan las dudas sobre los conocimientos económicos de los dos principales líderes políticos.

Sin embargo, es evidente que se trata de una clase política a la que la sociedad ha votado, vota y sigue dispuesta a votar; más aún, el 61,5% de los votantes PSOE y el 55,2% de los del PP se identifican en 2010 como votantes de un determinado partido, y no como alguien que decide su voto en cada elección. Podemos suponer, pues, que estamos ante un hábito electoral bastante generalizado como resultado de un acto, continuado, de fe democrática en las instituciones democráticas, y de un acto de esperanza.

Podría parecer, también, que ese hábito fuera un producto tanto de la esperanza como del fatalismo, si no fuera porque el contexto de la encuesta de 2010 no lo sugiere así, y si no fuera, además, porque aquel hábito pudiera venir ligado con el tono vital que se manifiesta en una declaración general a favor del optimismo, “incluso cuando no quedan razones para él” (afirmación que suscribe el 86,6% de los votantes del PSOE, por un 67,3% de los del PP). Incluso cabe especular que este optimismo guarda alguna relación con el simple rechazo, quizá instintivo o básico, a estresarse por razón de la crisis al que aludíamos en un capítulo anterior (de hecho, sólo un 29,1% del electorado del PSOE y un 32,7% de los votantes del

PP declaran haber sufrido estrés, ansiedad, depresión o dificultades para dormir a consecuencia de la crisis en los últimos seis meses), o, al menos, a hacerlo prematuramente. Los indicios sugieren que estamos ante gentes con un grado apreciable de fe y de esperanza, o si se quiere de fe fiducia, de fe que se combina íntimamente con la esperanza. Sólo queda que se trate, además, de una esperanza razonable.

En este punto conviene introducir explícitamente una cautela razonable de los votantes de ambos partidos respecto a los políticos. Ambos tienden a ver a la clase política como demasiado beligerante y, por tanto, con una actitud que les lleva fácilmente a la ofuscación y, quizá, a la tergiversación. O incluso, si se quiere, a una sobreactuación dramática de su papel, que, a juicio de esos espectadores, produce una mala impresión cuando se contempla sobre el escenario de la vida pública.

Llama en este sentido la atención que el 87,3% de los votantes del PSOE y el 90,2% de los del PP crean que los partidos políticos "han estado demasiado atentos a sus rivalidades partidistas, desatendiendo los problemas económicos del país". Parecen unánimes en este punto. A ello se añade que el 72,7% de los votantes del PSOE y el 75,8% de los del PP entienden que los políticos del partido del que se sienten más próximos no están "abiertos a incorporar las ideas razonables de los políticos de otros partidos", sino que, más bien, "sólo les escuchan para rebatir mejor sus argumentos". Tampoco aquí se distinguen unos y otros votantes.

Por si el mensaje quedara confuso o no se escuchara bien, nuestros encuestados parecen tener algo más que

añadir. Les preguntamos, como hemos visto más arriba, por su acuerdo con la afirmación siguiente: “muchos políticos, de todas las tendencias, suelen descalificar a los adversarios para desviar la atención del público del hecho de que, en realidad, no son capaces de resolver la crisis”. De nuevo, y como ya señalamos antes, estamos ante una frase larga y compleja, aunque lo esencial de la cuestión está relativamente claro: “descalifican... para desviar la atención... de no ser ellos capaces”. Contrastamos con esa pregunta en qué medida el público discierne en los políticos una estrategia política compleja, según la cual el objetivo último de la descalificación del rival está ligado a ocultar las propias limitaciones. La pregunta puede ser compleja, pero la respuesta es abrumadora: un 89,3% de los votantes del PSOE y un 86,5% de los del PP mostraron su acuerdo con aquella frase.⁴

Puesto en el contexto de las respuestas al resto de las preguntas que hemos comentado en este capítulo, el mensaje de esa respuesta parece inequívoco. Sugiere que los dos electorados (como ocurre con el electorado de todos los partidos en general, y con los no votantes) se muestran unánimes a la hora de pedir o, si se quiere, de exigir de los políticos una actuación, digamos, más razonada, más mesurada, más atenta a lo sustancial. Quizá no es eso lo que les aconsejan sus expertos, o los medios afines, o lo que les brota espontáneamente desde dentro, a partir de su propia experiencia partidista. Pero parece que es esto lo que les aconsejan los españoles. Quizá sea cuestión de escucharles.

⁴ Ante una pregunta tal, los encuestados podrían haberse refugiado en el rechazo a contestar, pero sólo dejó de hacerlo el 1,5% de los votantes del PSOE y el 1,5% de los votantes del PP.

RESULTADOS PRINCIPALES DEL CAPÍTULO 10*

	TOTAL POBLACIÓN	PSOE	PP
POCO O NADA DE ACUERDO CON CÓMO EL GOBIERNO CENTRAL ESTÁ AFRONTANDO LA CRISIS.	78,3	61,5	91,6
UN GOBIERNO DEL PRINCIPAL PARTIDO DE LA OPOSICIÓN NO MANEJARÍA LA CRISIS MEJOR QUE EL GOBIERNO ACTUAL.	70,2	53,1	92,9
CUANDO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO / EL LÍDER DEL PRINCIPAL PARTIDO DE LA OPOSICIÓN HABLA DE LA CRISIS Y LA SITUACIÓN ECONÓMICA, SABE POCO O CASI NADA DE LO QUE ESTÁ HABLANDO.			
■ Presidente del Gobierno.	62,4	49,4	79,4
■ Líder del principal partido de la oposición.	59,2	67,9	35,9
LA SITUACIÓN FINANCIERA DE SU HOGAR ESTÁ UN POCO O MUCHO PEOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.	48,4	43,5	56,4
LA SITUACIÓN FINANCIERA DE SU HOGAR EMPEORARÁ UN POCO O MUCHO DENTRO DE 12 MESES.	23,0	19,2	33,4
YA HABÍAN OÍDO O LEÍDO ACERCA DE QUE LOS INVERSORES INTERNACIONALES DEJARON DE ADQUIRIR DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA EN UN DETERMINADO MOMENTO DE LA CRISIS, PENSANDO QUE EL ESTADO ESPAÑOL TENDRÍA DIFICULTADES MUY GRANDES PARA HACER FRENTE AL PAGO DE ESA DEUDA A CORTO PLAZO.	52,0	48,1	61,9
ES MEJOR...			
■ Una economía libre de mercado.	62,5	55,8	78,8
■ Una economía dirigida por el gobierno.	24,9	29,3	15,5
NO CREE QUE LOS BANCOS Y LAS CAJAS ESPAÑOLAS ESTÉN DANDO UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE CRÉDITOS A LAS FAMILIAS Y A LAS EMPRESAS.	77,8	80,4	79,4
CREEN QUE ES PRIORITARIO REDUCIR EL DÉFICIT PÚBLICO.	75,5	71,7	83,0
MUY O BASTANTE DE ACUERDO CON DIVERSAS MEDIDAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT PÚBLICO (ENTRE LOS QUE CREEN PRIORITARIO HACERLO).			
■ Reducir el gasto en personal de la administración central, las comunidades autónomas y los municipios.	71,3	72,8	73,3
■ Reducir el gasto social.	28,8	28,0	33,6
■ Aumentar los impuestos.	20,4	27,9	7,6
OPCIÓN ENTRE DOS MODELOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA.			
■ Que adapte lo más posible las condiciones de trabajo y los salarios a las características de cada empresa.	27,4	23,7	40,0
■ Que busque unas condiciones de trabajo y unos salarios iguales o muy parecidos para todos los trabajadores de un mismo sector.	68,0	71,0	55,3
LA POLÍTICA LES INTERESA MUCHO O BASTANTE.	41,3	46,4	50,7
PERTENENCIA A ALGUNA ASOCIACIÓN VOLUNTARIA (ONG, RELIGIOSA, CULTURAL, DEPORTIVA, JUVENIL, DE CONSUMIDORES, EMPRESARIAL, PROFESIONAL O DE OTRO TIPO).	30,6	25,9	28,1

RESULTADOS PRINCIPALES DEL CAPÍTULO 10*

	TOTAL POBLACIÓN	PSOE	PP
COMPORTAMIENTO DE LA MAYORÍA DE LA GENTE EN ESPAÑA AL HACER SU TRABAJO.			
■ Suele procurar hacerlo muy bien.	26,0	28,9	23,2
■ Suele hacerlo sólo para cumplir.	69,0	66,1	69,5
OPCIÓN ENTRE DOS FRASES SOBRE EL ÉXITO Y EL ESFUERZO EN ESPAÑA.			
■ Se suele reconocer el esfuerzo de los demás, y premiarlo con el éxito.	18,6	19,3	16,6
■ El éxito de los demás despierta recelo y se tiende a no reconocerlo, a pesar del esfuerzo que pueda suponer.	76,7	76,8	79,7
MUY O BASTANTE DE ACUERDO CON: "CUANDO SE HABLA DE POLÍTICA, LA GENTE TIENDE A EVITAR LAS CONVERSACIONES CON PERSONAS DE IDEAS POLÍTICAS DIFERENTES Y A CONVERSAR CON QUIENES PIENSAN DE MANERA SIMILAR".			
	69,8	72,8	75,7
ESPAÑA CUENTA CON POCOS O CASI NINGÚN POLÍTICO QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE GOBERNAR Y DE VELAR POR EL FUTURO DE LA NACIÓN, Y SON CAPACES DE PERSUADIR AL PÚBLICO DE CUÁL ES SU MEJOR INTERÉS.			
	82,5	78,5	84,4
POCO O NADA DE ACUERDO CON: "MUCHOS POLÍTICOS, DE TODAS LAS TENDENCIAS, ESTÁN MUY MOTIVADOS PARA RESOLVER LA CRISIS PORQUE ESTÁN SUFRIENDO LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS EN SU VIDA PERSONAL".			
	76,5	78,1	74,0
(2010) COMPORTAMIENTO ELECTORAL.			
■ Se identifica como votante de un determinado partido.	46,3	61,5	55,2
■ Decide en cada elección.	48,6	37,2	44,8
OPCIÓN ENTRE DOS FRASES SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE ESPAÑA.			
■ Han jugado el juego político y el debate político sin desatender los problemas económicos del país.	7,4	11,2	8,2
■ Han estado demasiado atentos a sus rivalidades partidistas, desatendiendo los problemas económicos del país.	90,2	87,3	90,2
COMPORTAMIENTO DE LOS POLÍTICOS DEL PARTIDO MÁS PRÓXIMO AL ENTREVISTADO CUANDO ESCUCHAN LOS PUNTOS DE VISTA DE POLÍTICOS DE OTROS PARTIDOS.			
■ Suelen estar abiertos a incorporar las ideas más razonables.	15,3	19,1	13,3
■ Sólo les escuchan para rebatir mejor sus argumentos.	75,8	75,4	78,5
MUY O BASTANTE DE ACUERDO CON: "MUCHOS POLÍTICOS, DE TODAS LAS TENDENCIAS, SUELEN DESCALIFICAR A LOS ADVERSARIOS PARA DESVIAR LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO DEL HECHO DE QUE, EN REALIDAD, NO SON CAPACES DE RESOLVER LA CRISIS".			
	88,4	89,3	86,6

(*) Todos los datos se refieren a la encuesta de septiembre de 2010.

11

CONCLUSIÓN

UNA SITUACIÓN CADA VEZ MÁS COMPLEJA ¿Y UN PAÍS SIN RUMBO?

A pesar de que vivimos en un clima cultural en el que se habla tanto de la capacidad de comprender, predecir y controlar (cada uno, su propia vida; la sociedad democrática, su destino; y la humanidad, el cosmos, o poco menos), a la hora de comprender y manejar la situación económica, el público parece consciente de sus límites. Más aún, una mayoría clara barrunta que “comprender la crisis actual servirá de algo pero no de mucho, porque la economía es cada vez más compleja”.¹

La sensación de perplejidad ante el futuro, planteada en esos términos generales, se combina con la apreciación claramente mayoritaria de que “nos movemos por un camino equivocado” y no en la dirección correcta, si bien parece influir en este juicio la posición partidista, puesto que una abrumadora mayoría (79,4%) del electorado del PP piensa que nos equivocamos, mientras que el electorado del PSOE se divide por la mitad (un 42% cree que

¹ Recordemos que el 57,5% de la población encuestada (en 2010) está de acuerdo con esa afirmación, contra un 41% que no está de acuerdo, supuestamente porque imagina que aprenderemos “mucho”, aunque quizá algunos piensen que, en realidad, aprenderemos menos que algo, es decir, nada.

vamos en la dirección correcta y un 40,7%, que vamos por el camino erróneo).

Lo cierto es que las circunstancias actuales están marcadas por una grave crisis económica que se prolongará en el tiempo que queda hasta las elecciones generales, que se celebrarían, en principio, en marzo de 2012, y continuará, previsiblemente, en la siguiente legislatura, en la que será difícil retornar a una tasa de paro siquiera como la de 2008. Las cosas serán probablemente muy difíciles durante mucho tiempo.

A pesar de todo, la sociedad española no se siente en un trance demasiado dramático. Las elites, por su parte, parecen imaginarse más bien en la situación peculiar de quienes se creen demasiado grandes para perderlo todo (*too big to fail*). La banca y el sistema financiero en general no acaban de creer que el Banco Central Europeo y el gobierno, con el Banco de España, no le proporcionen la ayuda que necesitan, de manera que unos y otros, sabiendo de su dependencia recíproca, juegan al borde del precipicio sin perder la compostura y tienden quizá a “demorarse un poco”, creyendo contar con un margen de maniobra, sin imaginarse que pueda ocurrirles algo demasiado grave, en la parte que les corresponda, acostumbrados como están a caer de pie.

A la sociedad le llegan ecos de esta situación, pero, en parte por la complejidad de las cosas y en parte porque se lo cuentan con medias palabras, no la acaba de entender, y tampoco acaba de confiar en los mensajeros, ni de las buenas noticias ni de las malas. Probablemente está a resultas de lo que le cuenten sobre la consolidación del sistema financiero, aunque entiende que la crisis financiera implica

una reducción del crédito para empresas y familias, las cuales, en términos generales, sabiéndose sobreendeudadas, hacen lo posible por ahorrar, reduciendo inversión y consumo. Es probable que los españoles se den cuenta de que todo esto supone una reducción del dinamismo económico, lo que traerá consigo dificultades añadidas para reducir el déficit público, y sobre todo de que esa falta de dinamismo hará que el país se instale, durante bastantes años, en un nivel de paro enorme. No acaban de comprender, sin embargo, la conexión entre el debate sobre la reforma laboral y el problema del paro, y en general el de la creación de empleo. En parte, porque no están acostumbrados a considerar la lógica de los procesos económicos. Y en parte, porque han sido demasiados los años de tergiversaciones (y de perderse en los detalles) sobre esta materia en el espacio público. Ello ha traído consigo que el debate sobre esta materia tienda no a despertar al público, sino a inducir en él un estado de semisomnolencia, que puede contrarrestarse, sin duda, pero sólo si se hace un esfuerzo grande y sostenido, lo que hasta ahora no ha ocurrido nunca. En todo caso, por lo menos, el dato del paro se ha quedado en el centro de la atención del público, aunque se trata de un centro cuyas conexiones con el conjunto de la fotografía, por así decirlo, están desdibujadas.

Con el tiempo, parece haber ido calando en la sociedad española la sensación de que va a tener que enfrentarse con la realidad de una crisis gravísima, aunque parece aún inclinada por seguir una pauta habitual en ella, la de instalarse en una situación más o menos bloqueada durante bastante tiempo, como ha hecho en ámbitos como la reforma laboral, la de las pensiones, la del sistema autonómico o la educativa. Sin embargo, el hecho bruto, y brutal, de una tasa de paro del 20% de la población

activa en general, y del 42% de los jóvenes (los de 16 a 24 años) en particular, va a permanecer ahí, en el centro de su atención.²

Tiene un interés especial centrar algo más la atención en los diferentes segmentos de población, y en particular en los jóvenes. Su destino parece ser el de repetir, como lleva haciéndolo varios lustros, un particular “juego de las cuatro esquinas”, saltando con cierta frecuencia entre el paro (con subsidio o sin él), la economía sumergida, el trabajo temporal y el trabajo indefinido, funcionando la familia como una de las claves de la sostenibilidad del juego.³ Lo que esto supone es una incorporación al mercado laboral caracterizada por una primera fase, larga, en la que se combinan los trabajos temporales con periodos de desempleo. Que esto ocurra así tendrá consecuencias a largo plazo en su carácter y en el recorrido de su trayectoria profesional. Como las ha tenido la experiencia de diez años de tasas de paro juvenil alrededor del 40% entre mediados de los ochenta y mediados de los noventa. Es obvio que, por el momento, esto afecta poco a una sociedad que no se interesa mucho por el curso de las cosas a largo plazo (ni por las que ocurren fuera de sus fronteras). Además, el paro afecta directamente sólo a una parte de la población, y lo que a ella le suceda preocupa al resto sólo hasta cierto punto. En todo caso, preocupa (y se destaca cotidianamente entre las preocupaciones reflejadas en las encuestas, como es lógico) pero no angustia.

² Con el tiempo, quizá se añada la percepción de una erosión en la prestación de algunos servicios públicos, y conviene estar atentos a esa percepción y a la aparición de diversos signos de una irritabilidad difusa y creciente en la sociedad.

³ Se exploran con más detalle las implicaciones de dicha metáfora en Pérez-Díaz y Rodríguez (1994) y Pérez-Díaz (1996).

¿Por qué? Aparte de porque el futuro está muy lejos y se imagina mal, por tres razones. Primero, muchos dan por supuesto que los jóvenes atravesarán la crisis, de un modo u otro, con la ayuda de las familias y del estado del bienestar, como ya sucedió en los ochenta y los noventa, años que no están tan lejos como para no recordarlos bien. Segundo, cabe esperar que entre los inmigrantes que se han quedado sin trabajo, unos volverán a sus países, otros recibirán ayuda de sus redes sociales y familiares, y/o recibirán ayuda del estado del bienestar, en sus distintos niveles, así como de las instituciones de la Iglesia o de la filantropía, y otros se buscarán la vida en la economía sumergida. Tercero, muchos españoles operan según una heurística o razonamiento tácito basado en una lectura del pasado: el trasfondo de la experiencia de los últimos cincuenta años (desde el “milagro económico” de los sesenta, que vinculó la economía de España al contexto de la economía occidental, hasta hoy) origina un difuso optimismo según el cual “las cosas al final se resolverán”. No se entiende muy bien cómo, pero “se barrunta algo”.

UN DÉFICIT CULTURAL, Y ALGUNAS DE SUS CONSECUENCIAS

Merece la pena detenerse un momento a reflexionar sobre la dificultad de prever, siquiera, los contornos del futuro. Suele suceder, y así se ha demostrado en el caso de países tan avanzados como Estados Unidos, que la gente del común tenga aproximadamente la misma capacidad de predecir el futuro que los economistas, muy poca. Sin embargo, los economistas cuentan con la ventaja (sustancial) de elaborar explicaciones *ex post facto* bastante

plausibles de lo que ya ha ocurrido o está ocurriendo, de las cuales se pueden deducir reglas de prudencia ad hoc aplicables a las situaciones que se vayan presentando. Esta ventaja es crucial a la hora de articular un debate en momentos de particular incertidumbre como los de una crisis de las dimensiones actuales. Esto produce una sensación de *confianza razonada* que favorece las decisiones económicas y, a la larga, el crecimiento económico.

El problema estriba en lo difícil que es conectar las reflexiones de los economistas con el público en general cuando se dan dos condiciones: que en el sistema de mediación entre los economistas y el público dominen quienes, con una agenda preestablecida y cierta confusión, tienden a crear ruido; y, *sobre todo*, que la sociedad cuente con unos recursos culturales limitados, que le dificulten reducir los niveles de ruido. Centremos la atención en este último punto.

Es evidente que la sociedad española ha ido mejorando su nivel educativo medido por su nivel de escolaridad y otros indicadores, pero también que el aumento del nivel de educación de la sociedad española, incluyendo sus elites, conseguido en los últimos treinta años es insuficiente para manejar los problemas con los que esa sociedad se enfrenta. Todas las sociedades europeas tienen problemas a la hora de entender y manejar la crisis actual; pero la española se enfrenta con una crisis objetivamente más grave contando con un bagaje cultural inferior. Así lo sugiere que España suela situarse en el tercio inferior de los países de la UE15 respecto de un conjunto de indicadores referidos a los hábitos y resultados intelectuales de los españoles, así como a sus capacidades morales, artísticas y emocionales, en particular, a los sentimientos de con-

fianza en sí mismos y de confianza en los demás y en las instituciones, ambos de especial relieve en época de crisis (Pérez-Díaz y Rodríguez 2010).

Ese nivel inferior se refleja en datos como los siguientes. Apenas contamos con alguna universidad española entre las cincuenta primeras europeas o entre las ciento cincuenta primeras del mundo.⁴ Nuestro último premio Nobel en el área de la ciencia (Ramón y Cajal) se remonta a algo más de un siglo. Por último, aun teniendo en cuenta la mejora clara en el volumen de nuestra producción científica, la tendencia de la evolución de las patentes triádicas españolas, que miden la incidencia de la investigación en la tecnología, sugiere que, salvo un esfuerzo ímprobo, la convergencia plena de España con países como Francia y Alemania se produciría, de seguir el ritmo de los últimos lustros, en varios *siglos* (Pérez-Díaz 2010). Todo esto supone un nivel mediano y, dentro de Europa, relativamente inferior de la cultura española; siempre hablando, claro, en términos muy generales, y dejando aparte las numerosas y honrosas excepciones que, si se potencian, pueden augurar un futuro distinto. En cualquier caso, si la cultura se encuentra en este estado, ello repercute en el nivel de claridad, orden, ecuanimidad y precisión del debate público. A su vez, lo que ocurre con la cultura y el debate público en general sucede también con la cultura económica y con el debate público sobre temas económicos.

⁴ Según el Academic Ranking of World Universities correspondiente a 2010, no hay ninguna española entre las 200 primeras del mundo, y tampoco entre las 50 primeras europeas. Según los World University Rankings de Times Higher Education correspondientes a 2010/2011, la primera universidad española sería la Universidad de Barcelona, en el 142º puesto del total mundial y el 49º de las universidades europeas.

Ahora bien, a la hora de poner remedio a este estado de cosas, hay que tener en cuenta la parte de sombra y la parte de luz, tanto en los factores educativos y comunicativos como en los políticos y de la sociedad misma. El sistema educativo proporciona, obviamente, instrumentos muy útiles para entender el funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, a juzgar por el análisis de los contenidos de los libros de texto sobre la economía, lo que probablemente se aprende en la enseñanza secundaria produce una mezcla de informaciones parciales sacadas de contexto, ignorancia de los mecanismos y las causas de los procesos económicos, y sospecha sobre la moralidad de las empresas y los empresarios (González 2003). Los medios de comunicación distribuyen una información abundante, pero la suelen sesgar y explicar insuficientemente, y ya hemos visto la lectura crítica que la sociedad hace de lo que considera el carácter desordenado de la información que le proporcionan los medios.

En cuanto a los políticos, las encuestas que hemos analizado muestran la notable distancia de la población respecto a ellos. Los políticos pueden intentar hacer lo que ellos consideran pedagogía cívica, pero, en realidad, no deben de estar haciéndolo cuando al público le parece que no gestionan bien la crisis, que no se saben los temas, que se enredan en rivalidades exageradas. Como los políticos protagonizan el sistema de debate público, la desconexión entre la sociedad y los políticos provoca que el sistema mismo quede de facto devaluado a los ojos de la sociedad.

Obviamente, como hemos comprobado a lo largo de este estudio, a las dudas sobre los medios y los políticos se añaden las dudas del público sobre sí mismo. Por un

lado, la mayor parte seguramente conserva un suficiente sentido de la realidad, gracias a que tiene que ganarse el pan de cada día en una economía de mercado, y ha de llegar a fin de mes ajustando más o menos sus cuentas. Además, el aumento gradual del nivel escolar general le ha proporcionado instrumentos para ordenar una parte de la información y para intentar analizarla y discernir, en principio, lo que pueda haber de razonable en el debate público, en las posiciones de los políticos y de los comentaristas mediáticos. Por otro lado, sin embargo, el público es consciente de sus propias limitaciones, tanto en su información y su entendimiento de los asuntos como en su sentido cívico y espíritu de búsqueda de un bien común.

■ LOS REMEDIOS QUE LA PROPIA SOCIEDAD PUEDE PONER A ESTA SITUACIÓN DE DÉFICIT CULTURAL

De todos modos, hay que matizar y cualificar sustancialmente un primer juicio que enfatice excesivamente las limitaciones de las capacidades del público, a la vista de la amplia evidencia aportada en nuestro estudio acerca de su potencial de aprendizaje, basado en la combinación de dosis apreciables de sensatez y de buena voluntad. Capítulo a capítulo, hemos desgranado su percepción de la gravedad y la duración de la crisis, su nivel de información y de comprensión de las causas de ésta y de las medidas en curso para superarla, constatando unas bases sobre las que construir una percepción más realista y una información más amplia. En el centro de su marco conceptual relativo a la economía de mercado se sitúa un juicio positivo sobre ella, junto con una lectura un tanto confusa sobre el funcionamiento del mercado

laboral, y probablemente bastante superficial acerca de cómo funciona el sistema financiero y de lo que puede suponer en la realidad una reducción del déficit público. Todo ello, más que a la resignación con un público poco informado y confuso, apela a unas tareas pendientes de aclaración y de explicación, pacientes y continuas. No se observa una ofuscación dogmática en ese público que le impida aprender y comprobar en la práctica lo aprendido.

Su lectura crítica del funcionamiento del sistema de debate público sugiere más bien una actitud de moderación que facilita el ejercicio del sentido común. Echa de menos razones de las cosas, y critica lo que le parece la actitud irrazonable de políticos que se ciegan (y nos ciegan) con sus rivalidades y escamotean las explicaciones necesarias, como si lo confiaran todo a invocar un estado anímico de “confianza”, en ellos y en sus poderes taumatúrgicos. El público les está enviando claramente el mensaje de que enfríen y razonen sus propuestas, como hemos visto en el capítulo anterior.

La razonabilidad del público se pone de manifiesto incluso en su lectura directa o indirectamente crítica de él mismo. Se dice las cosas como son: se trabaja para cumplir, se reconoce el esfuerzo más bien poco, etcétera, etcétera. No parece que estemos ante una actitud ni de autoflagelación ni de complacencia. Más bien, los españoles reconocen la realidad, un signo de veracidad consigo mismos muy interesante, porque revela un ejercicio muy correcto de la razón práctica. Es obvio que cabría esperar una participación positiva por parte de gentes así en el debate público, sobre el manejo de la crisis económica y sobre otros muchos asuntos.

UN MOMENTO PARA UNA “CONFIANZA RAZONADA”

Por consiguiente, no es éste un momento de “confianza” ciega, sino de “confianza razonada”, es decir, de confianza acompañada de explicaciones pacientes, claras, con el requerido margen para la rectificación conforme se va avanzando. Lo que hace falta ahora es que los grupos políticos orientados al bien común traten de satisfacer esa demanda potencial de una *confianza razonada*: una demanda de entender la crisis, aprender de ella, mediante explicaciones ordenadas y continuas, infatigables, y hechas con un espíritu de decencia cívica y de empatía con la suerte de todos y cada uno de los diversos segmentos de la comunidad española. Con dos añadidos. Primero, hay que tener muy en cuenta que la explicación no puede venir de arriba abajo; no viene de la cima de la montaña al valle de las gentes corrientes. Las explicaciones resultan de un debate en el que la aportación de los de abajo es más importante, en el fondo, que la de los de arriba; de modo que si los de arriba no saben escuchar, no hay forma de que se enteren de lo que ocurre ni de que puedan explicar gran cosa. Y, segundo, hay que prepararse para hacerlo a lo largo de varios años.

Quienquiera que gane las próximas elecciones gobernará durante una legislatura de crisis, porque la crisis continuará varios años más. Si no explica lo que va haciendo, aceptando las rectificaciones de rigor a lo largo del camino, corre el riesgo de que su victoria sea una victoria pírrica, y que a la siguiente oportunidad electoral, la alternativa política arrase y relegue a los vencidos a las tristezas de una lejanía del ansiado poder político, quizá por una generación. Esta demanda de explicación sólo puede

ser satisfecha por un grupo con vocación de liderazgo de la sociedad que dé *primacía absoluta* a la *comunicación auténtica y veraz* con la sociedad. Para eso, obviamente, ha de tener algo que comunicar, gusto por la comunicación, saber hacerlo y entender que la comunicación es una calle de doble sentido en la que hay que escuchar tanto o más que hablar uno mismo.

Es importante el contenido y la forma de la comunicación. Al contenido de la comunicación, al menos en lo relativo a la crisis económica, ya nos hemos referido. En cuanto a la forma de comunicar, las dos cuestiones centrales se refieren a si es razonada y razonable, evocando los sentimientos cívicos apropiados, o no; y a si implica una empatía y un reconocimiento recíproco entre los políticos y la sociedad, creándose una comunidad entre ellos, o no. Si la respuesta a ambas cuestiones es positiva, significa que los políticos comprenden y conceden la importancia debida a la cultura (en su sentido amplio, incluyendo en primer término la educación, la ciencia, las artes y las humanidades) y a la sociedad civil. Si no lo es, entonces ni comprenden ni conceden importancia a la una y a la otra. En este último caso, es difícil imaginar cómo pueden los políticos establecer una relación de confianza con la sociedad que sea duradera y capaz de sobrevivir a las muchas dificultades y frustraciones que inevitablemente trae consigo el manejo de una crisis como la actual. Porque es obvio que no se gestionará razonablemente la crisis si el gobierno de turno no sabe apelar a la comprensión y el esfuerzo y la motivación de una gran parte de la sociedad, y aprende junto con la sociedad a resolver las incidencias del camino, porque las entiendan cada vez mejor, desde una perspectiva del bien común.

Por último, la sociedad española necesita cobrar ánimo y confianza en sí misma, de modo que no se trata sólo salir de la crisis, sino de apuntar más alto. Para esto tendrá que hacerse a la idea de que debe mirar al exterior, a Europa y al mundo (tampoco el mundo está "tan en crisis" como Europa, ni mucho menos), y desarrollar la capacidad para mirar a un futuro más lejano. Esa mirada, fuera y lejos, puede dar la perspectiva necesaria para no equivocarse a cada paso a lo largo de una senda que será, probablemente, una carrera de obstáculos no exenta de sorpresas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS

- Aranguren, José Luis L. 1958. *Ética*. Madrid: Revista de Occidente.
- ASP (Analistas Socio Políticos). 1998. *Encuesta sobre consumidores y opinión pública*. Encuesta ASP 98.013.
- ASP (Analistas Socio Políticos). 2007. *Encuesta sobre actitudes y comportamientos relativos a la energía y el medio ambiente*. Encuesta ASP 07.044.
- ASP (Analistas Socio Políticos). 2009. *Encuesta sobre la crisis económica y la economía de mercado (I)*. Encuesta ASP 09.047.
- ASP (Analistas Socio-Políticos). 2010. *Encuesta sobre la crisis económica y la economía de mercado (II)*. Encuesta ASP 10.048.
- Banco de España. Varios años. *Cuentas financieras de la economía española*. Madrid: Banco de España.
- Banco de España. *Boletín estadístico*. Series disponibles en www.bde.es.
- Bennett, Stephen Earl y Jeffrey Friedman. 2008. "The irrelevance of economic theory to understanding economic ignorance", *Critical Review*, 20, 3: 195-258.

- Bergson, Henri. 2008 [1932]. *Les deux sources de la morale et de la religion*. París: Presses Universitaires de France.
- Bhagwati, Jagdish. 2009. "Feeble critiques: capitalism's petty detractors", *World Affairs*, 172, 2: 36-45.
- Blanke, Jennifer et al. 2008. *The global competitiveness report 2008-2009*. Ginebra: World Economic Forum.
- Blanke, Jennifer et al. 2010. *The global competitiveness report 2010-2011*. Ginebra: World Economic Forum.
- Center for World Class Universities of Shanghai Jiao Tong University. 2010. *Academic Ranking of World Universities*. Disponible en www.arwu.org.
- CIRES (Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social). 1994. *Encuesta de identificación supranacional*, 10 al 15 de enero de 1994.
- CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). 1996. *Estudio 2224. Economía y sociedad: cultura económica*. Frecuencias marginales disponibles en www.cis.es.
- Ciepley, David. 2000. "Why the state was dropped in the first place: a prequel to Skocpol's 'Bringing the state back in'", *Critical Review*, 14, 2-3: 157-214.
- Converse, Philip E. 2006 [1964]. "The nature of belief systems in mass publics", *Critical Review*, 18, 1-3: 1-74.
- DeCanio, Samuel. 2006. "Mass opinion and American political development", *Critical Review*, 18, 1-3: 143-156.
- *Electometro.com*. *La web de encuestas electorales en España*. www.electometro.es.

- *ESS Round 1: European Social Survey Round 1 Data (2002). Data file edition 6.1.* Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data.
- *ESS Round 4: European Social Survey Round 1 Data (2008). Data file edition 3.0.* Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data.
- Eurostat. *European Union Labour Force Survey*. Disponible en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data.
- Eurostat. *National accounts (including GDP)*. Disponible en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data.
- European Commission. Directorate General for Economic and Financial Affairs. *Consumer surveys. Time series*. Disponible en http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/time_series/index_en.htm.
- Evans, Peter B., Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol, eds. 1985. *Bringing the state back in*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Friedman, Jeffrey. 2009. "A crisis of politics, not economics: complexity, ignorance, and policy failure", *Critical Review*, 21, 2-3: 127-183.
- FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros). 2009a. *Actualización de las previsiones económicas para España 2009 2010*. Disponible en www.funcas.ceca.es.
- FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros). 2009b. *Panel de previsiones de la economía española. Septiembre 2009*. Disponible en www.funcas.ceca.es.

- FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros). 2010a. *Panel de previsiones de la economía española. Septiembre 2010*. Disponible en www.funcas.ceca.es.
- FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros). 2010b. *Previsiones económicas para España 2010 2011*. Disponible en www.funcas.ceca.es.
- Gaus, Gerald. 2008. "Is the public incompetent?", *Critical Review*, 20, 3: 291-311.
- Generalitat Valenciana. Argos. *Demoscopia. Estimaciones de voto para elecciones al Congreso de los Diputados*. Disponible en: http://www.pre.gva.es/argos/es/contenido_general/recursos/demoscopia/.
- González, Manuel Jesús. 2003. *El empresario y la economía de mercado*. Madrid: Círculo de Empresarios.
- Haffner, Sebastian. 2002. *Anotaciones sobre Hitler*. Trad. María Esperanza Romero y Richard Gross. Barcelona: Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores.
- HarrisInteractive. 2008a. "Financial Times / Harris poll. Monthly opinions of adults from five European countries and the United States. October 2008". Disponible en <http://www.harrisinteractive.com/NewsRoom/HarrisPolls/FinancialTimes.aspx>.
- HarrisInteractive. 2008b. "Impact of financial crisis different for five largest European countries and the U.S.". Disponible en <http://www.harrisinteractive.com/NewsRoom/HarrisPolls/FinancialTimes.aspx>.
- Hayek, Friedrich August von. 1960. *The constitution of liberty*. Chicago: University of Chicago Press.

- IMF (International Monetary Fund). 2010. *World economic outlook. October*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- IMF (International Monetary Fund). *World economic outlook database. October 2010 edition*. Disponible en <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx>.
- INE (Instituto Nacional de Estadística). *Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales. Base 2000*. Disponible en www.ine.es.
- INE (Instituto Nacional de Estadística). *Encuesta de población activa*. Disponible en www.ine.es.
- INE (Instituto Nacional de Estadística). *Estadística de nulidades, separaciones y divorcios*. Disponible en www.ine.es.
- INE (Instituto Nacional de Estadística). *Estimaciones intercensales de población*. Disponible en www.ine.es.
- INE (Instituto Nacional de Estadística). *Estimaciones de la población actual*. Disponible en www.ine.es.
- Jaspers, Karl. 1953. *Balance y perspectiva*. Trad. Fernando Vela. Madrid: Revista de Occidente.
- Lippman, Walter. 1930. *The Phantom Public*. Nueva York: The Macmillan Co.
- MacIntyre, Alasdair. 1984. *After virtue*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- McCloskey, Deirdre. 2006. *The bourgeois virtues. Ethics for an age of commerce*. Chicago, Londres: The University of Chicago Press.

- Miller, Geoffrey P. y Gerald Rosenfeld. 2009. "Intellectual hazard: how conceptual biases in complex organizations contributed to the crisis of 2008", *New York University. Law & Economics Research Paper Series*, 09-43.
- Murakami, Michael H. 2008. "Paradoxes of democratic accountability: polarized parties, hard decisions, and no despot to veto", *Critical Review*, 20, 1-2: 91-113.
- O'Driscoll, Gerald P., Jr., y Mario J. Rizzo. 1996. *The economics of time and ignorance*. Londres: Routledge.
- Pennington, Mark. 2003. "Hayekian political economy and the limits of deliberative democracy", *Political Studies*, 51: 722-739.
- Pérez-Díaz, Víctor. 1979. *Clase obrera, partidos y sindicatos*. Madrid: Fundación INI.
- Pérez-Díaz, Víctor. 1980. *Clase obrera, orden social y conciencia de clase*. Madrid: Fundación INI.
- Pérez-Díaz, Víctor. 1996. *España puesta a prueba 1976-1996*. Madrid: Alianza.
- Pérez-Díaz, Víctor. 2008. *El malestar de la democracia*. Barcelona: Crítica.
- Pérez-Díaz, Víctor. 2010. "La cultura de la ciencia y la convergencia de España con los países avanzados", *Cotec. Estudios*, 41.
- Pérez-Díaz, Víctor y Juan Carlos Rodríguez. 1994. "Opciones inerciales: políticas y prácticas de recursos humanos en España (1959-1993)", *ASP Research Papers*, 2(a)/1994.
- Pérez Díaz, Víctor y Juan Carlos Rodríguez. 2008. *Energía y sociedad. Actitudes de los españoles ante los pro-*

blemas de la energía y del medio ambiente. Madrid: Club Español de la Energía.

- Pérez-Díaz, Víctor y Juan Carlos Rodríguez. 2010. *La cultura de la innovación de los jóvenes españoles en el marco europeo*. Madrid: Fundación Cotec.
- Reher, David Sven. 1998. "Family ties in Western Europe: persistent contrasts", *Population and Development Review*, 24, 2 (junio): 203-234.
- Rizzo, Sergio y Gian Antonio Stella. 2008. *La casta: così i politici italiani sono diventati intoccabili*. Milán: Rizzoli.
- Tetlock, Philip E. 2005. *Expert political judgment: how good is it? How can we know?* Princeton: University of Princeton Press.
- *The Times Higher Education's 2010-2011 World University Rankings*. Disponible en www.timeshighereducation.co.uk.
- Toharia, José Juan. 1989. *Cambios recientes en la sociedad española*. Madrid: Instituto de Estudios Económicos.
- Tversky, Amos y Daniel Kahneman. 1982. "Judgment under uncertainty: heuristics and biases", en Daniel Kahneman, Paul Slovic y Amos Tversky, eds., *Judgment under uncertainty: heuristics and biases*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 3-20.
- World Bank. *World development indicators*. Disponible en data.worldbank.org.
- WIN (Worldwide Independent Network of Market Research). 2009. *WIN consumer confidence index. 4th wave of the worldwide barometer of the financial crisis*. Disponible en www.bva.fr.

- Weber, Max. 1994 [1919]. "The profession and vocation of politics", en *Political writings*, editado por Peter Lassman y Ronald Speirs. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 309-369.
- Zingales, Luigi. 2009. "Capitalism after the crisis", *National Affairs*, 1 (otoño): 22-35.

ANEXO

■ FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA ASP 09.047

Ámbito: Península, Baleares y Canarias.

Población: personas de 18 a 75 años residentes en hogares con teléfono.

Tamaño muestral: 807 entrevistas.

Técnica de entrevista: entrevista telefónica asistida por ordenador.

Error muestral: en el supuesto de $p=q=50\%$ y para un nivel de confianza del 95,5%, el error máximo de los datos es de $\pm 3,5\%$.

Trabajo de campo: llevado a cabo por un equipo de entrevistadores de la red de campo telefónico de IMOP Encuestas, desde el 29 de septiembre al 9 de octubre de 2009.

Equilibraje de los datos: los datos ofrecidos en el informe no son los datos brutos, sino los sometidos a un proceso de equilibraje con la matriz "sexo x edad" y "comunidad autónoma (7 grupos) x tamaño de hábitat", para anular los desequilibrios que el trabajo de campo pudiera haber introducido.

■ FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA ASP 10.048

Ámbito: Península, Baleares y Canarias.

Población: personas de 18 a 75 años residentes en hogares con teléfono.

Tamaño muestral: 811 entrevistas.

Técnica de entrevista: entrevista telefónica asistida por ordenador.

Error muestral: en el supuesto de $p=q=50\%$ y para un nivel de confianza del 95,5%, el error máximo de los datos es de $\pm 3,5\%$.

Trabajo de campo: llevado a cabo por un equipo de entrevistadores

de la red de campo telefónico de IMOP Encuestas, desde el 7 al 13 de septiembre de 2010.

Equilibraje de los datos: los datos ofrecidos en el informe no son los datos brutos, sino los sometidos a un proceso de equilibraje con la matriz “sexo x edad” y “comunidad autónoma (7 grupos) x tamaño de hábitat”, para anular los desequilibrios que el trabajo de campo pudiera haber introducido.

P.V.P.: 13€ (IVA incluido) El problema que surge es: ¿cómo se puede hacer un diagnóstico de la situación actual? Tal vez estos libros nos ayuden. Realmente ocurre que no se informan sobre estos problemas, o se hacen, pero no se comunican. Tal vez estos libros nos ayuden. Realmente ocurre que no se informan sobre estos problemas, o se hacen, pero no se comunican. Tal vez estos libros nos ayuden. Realmente ocurre que no se informan sobre estos problemas, o se hacen, pero no se comunican.